

014.34  
R156

MM

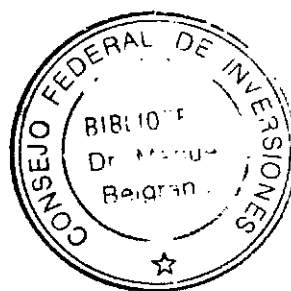
11762<sup>45649</sup>

II

CONSEJO FEDERAL DE INVERSIONES  
PROVINCIA DE SALTA

**HACIA LA ELABORACIÓN DE CONCEPTOS QUE PERMITAN  
COMBATIR LA VIOLENCIA DENTRO DEL MUNDO SOCIAL,  
INSTITUCIONAL Y EN LA HISTORIA, FRENTE A LOS MALES  
DE LA POBREZA, EL AUTORITARISMO Y LAS VIOLACIONES  
DE LOS DERECHOS HUMANOS**

Informe Parcial N° 2



Lic. NORA REGUEIRA  
SEPTIEMBRE 2006

SECRETARIO GENERAL DEL CONSEJO FEDERAL  
DE INVERSIONES:  
ING. JUAN JOSE CIACERA

GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE SALTA:  
Dr. JUAN CARLOS ROMERO

## ÍNDICE GENERAL

VIOLENCIA INSTITUCIONAL Y SOCIAL, LA REAL DEUDA INTERNA.....	Pag. 1
VIOLENCIA INSTITUCIONAL POLICIAL.....	Pag. 12
LA SEGURIDAD CIUDADANA Y LA CULTURA DE LA VIOLENCIA.....	Pag. 21
EL CRECIMIENTO DE LA VIOLENCIA URBANA EN LA ARGENTINA DE LOS 90....	Pag. 40
VIOLENCIA DE ESTADO E IDENTIDADES POLITICAS.....	Pag. 94
JUSTICIA E INJUSTICIA CON LOS JÓVENES DE LOS BARRIOS POPULARES.....	Pag. 128
BIBLIOGRAFÍA.....	Pag. 156

## **VIOLENCIA INSTITUCIONAL Y SOCIAL, LA REAL DEUDA INTERNA**

La Argentina desde hace muchos años viene mostrando un marcado incremento de la violencia, sea esta real o simbólica, manifiesta o latente. Se expresa tanto como Violencia Institucional (sucesivos quiebres del orden constitucional, reiteradas y graves violaciones a los derechos humanos, genocidio, pérdida de representatividad de los poderes del estado y de confianza en la opinión pública, imposición de los modelos neoliberales contrarios al interés nacional, elevados niveles de corrupción e impunidad, manifiesta especulación financiera y destrucción del aparato productivo, criminalización de la pobreza y de la protesta social, escepticismo con pérdida de credibilidad en los poderes del estado y sus valores éticos-morales) y, también, con Violencia Social (alta fragmentación de la sociedad cuasi-estructural, pauperización, miseria, marginación, exclusión, intolerancia, discriminación, marcada desocupación y subocupación con lamentable deterioro de los indicadores en salud y educación, aislamiento, ausencia de horizonte y de expectativas).

Al negarla o esconderla la violencia reaparece como culpabilización del otro, siendo los pobres y los jóvenes los sujetos preferidos para encarnar ese otro. Esta violencia negada se pone en los otros.

La violencia ha cruzado la Argentina en los últimos treinta años; muchas veces no se habla de ella, salvo cuando nos señalamos como víctimas. La imposibilidad de inscribirla en el relato provoca como fuga, la práctica de una nueva forma de violencia.

Cuando una política económico-social rompe con todas las categorías morales, los hombres y mujeres pasan a ser medios de uso y abuso de manera tal que fuga y violencia, raptos del lenguaje y la mediocridad, sintetizan razones de nuestra brutal caída en la indignidad.

En sus múltiples manifestaciones, la violencia es una forma de ejercicio del poder mediante el empleo de la fuerza (sea física, psicológica, política, económica), expresando la existencia de un “arriba” y un “abajo” en forma de roles complementarios: padre- hijo, hombre-mujer, maestro- alumno-, patrón- empleado, joven-viejo (Corsi, 1995) El horror de la violencia irracional ha ido adquiriendo categoría casi cotidiana constituyéndose en un grave problema de la sociedad actual generando honda preocupación e inseguridad colectiva.

Las comunidades pueden tornarse vulnerables cuando en ellas se desatan catástrofes políticas o ambientales, o cuando sus miembros o parte de ellos protagonizan sucesos deleznable. Vulnerabilidad (del latín “vulnerare”) significa herir, incluyendo la idea de recibir un golpe. Los eventos dañinos o destructivos que tienen eficacia en los sujetos pueden provenir tanto de sus procesos psíquicos como del mundo exterior.

Eva Giberti describe las poblaciones vulnerables como objetivamente empobrecidas.

Su nexos con los referentes que dan significado a los propios proyectos se han roto o son cuestionados, al tiempo que la realidad no ofrece alternativas para recuperarlos. Algunos individuos logran sobreponerse porque encuentran instituciones alternativas o construyen nuevos lazos sociales, mientras que otros no encuentran el modo de reposicionarse sumergiéndose en el desvalimiento.

La vulnerabilidad psicosocial se constituye y se recrea. Su naturalización lleva inevitablemente asociada la violencia. La vulnerabilidad es el fenómeno en el que cierto nivel de stress trae como resultado una completa inoperancia en términos de conducta

adaptativa, en referencia a los conceptos de vulnerabilidad y el de resiliencia. Esta puede entenderse como la capacidad del individuo de enfrentar situaciones adversas, saliendo fortalecido, continuando con la expansión de su desarrollo. Lo esencial de estos dos conceptos (vulnerabilidad y resiliencia) es que se ponen en evidencia junto a otras variables de riesgo como el maltrato, el abuso emocional, físico o sexual, la negligencia, la marginalidad, la violencia.

Una de las tantas definiciones de violencia dice: “Todo hecho violento es una situación de poder donde hay un sometido y un sometedor, donde alguien abusa de ese poder y de esta autoridad que alguien padece”.

Las tensiones intergeneracionales, las políticas económicas, laborales, estudiantiles, sociales, etc. expresan la existencia de una estructura violenta en la sociedad, generando la aparición de una subcultura propia que no repudia el fenómeno violento: o sea que la violencia no es ajena a nuestra cultura sino producto de ella.

El consumismo, la pérdida de una jerarquía de valores más o menos consolidada, sumados a la ausencia de ética y solidaridad son también los criterios nucleares que legitiman y posibilitan el hecho violento. Los que ejercen la violencia, se consideran a sí mismos representantes para utilizarla supuestamente en bien de los más débiles.

La clase dirigente rompió el lazo que existía entre la palabra y la conducta resignificándolas de una manera violenta. La violencia aparece entonces como un mecanismo de apropiación de las palabras, que en términos de historia e identidad remiten a valores profundos sólo para robar, hegemonizar y aniquilar. Ese robo literal del lenguaje permite la existencia de mutantes políticos apropiadores de palabras para continuar con las mismas conductas, privando a la sociedad de palabras que puedan expresar su asfixia. Lo que llamamos “la Cultura” ha dejado de existir al ser marginada a subsistir como cultura de la frivolidad y el

divertimiento, perdiéndose la cultura participativa de valores que nos hacen solidarios y no marginales, protagonistas del poder ciudadano que viene de la fraternidad. En tanto la identidad cultural que hermana, va languideciendo, en pos del poder tecnológico, económico, político, partidista y excluyente.

Una sociedad que aspire a considerarse inclusiva y no expulsiva, verdaderamente democrática, no puede desconocer su responsabilidad siendo importante no descontextualizarla del marco social en el que residen las principales causas de la reiteración de problemas que giran en torno a la violencia, caja de resonancia de otros fenómenos de la posmodernidad, como el individualismo extremo, lo efímero, la crisis de valores consensuados, la crisis del sujeto y de sus representaciones.

Frases como “la violencia engendra violencia” y “más de lo mismo lleva a lo mismo” evidencian que no hay retroalimentación positiva ni un auténtico cambio. Afortunadamente junto a esta realidad también crece la conciencia crítica, alertando sobre el peligro que la violencia representa para la supervivencia humana así como su inutilidad para la resolución de conflictos.

Por ello es necesario elaborar un contrato o régimen de convivencia democrática que permita neutralizar situaciones de violencia, atendiendo actitudes centrales decisivas en un ámbito confiable y positivo. Las normas son necesarias para la convivencia, ya que permiten la existencia de parámetros de referencia para la protección de sus miembros.

La norma es creada para ser cumplida; por el contrario, su incumplimiento lleva a la pérdida de confianza, encuadre y soporte, promoviendo el descreimiento y el desborde.

Si la ley es vista como valor no estará oficializada, fijada o apropiada por nadie. El respeto por el Otro será lo que oriente la conducta como expresión del encuentro solidario.

Las actuales tendencias enfatizan la creatividad, el diálogo y la participación en contraposición al concepto tradicional de disciplina, que premia o privilegia el silencio y la pasividad, aunque sabemos que el abuso y la violencia no son patrimonio de una clase social.

Otra alternativa para la resolución de conflictos, en el marco de un proceso constructivo, es la formación de mediadores en la comunidad que tengan como objetivo no sólo la prevención de hechos violentos sino cambiando el estilo de comunicación, privilegiando en su resolución la preeminencia del lenguaje verbal sobre la acción, con la activa participación y auto gestión de la comunidad, elaborando estrategias preventivas de situaciones generadoras de violencia.

Lo que no se resuelve por medio de la palabra encontrará su resolución por medio de actos que pueden llegar a ser violentos.

Esa violencia que permanece latente (por ejemplo la manipulación de personas, el abuso sexual, la carencia de ideales morales) tiene básicamente dos aspectos: por un lado el autoritarismo o la violencia que el más “fuerte” ejerce sobre el más “débil” y por otra la que depende de la marginación que un sector ejerce sobre otros.

De tal manera que el poder “desde arriba” y la “marginación” no siempre son hechos muy manifiestos, pero constituyen el caldo de cultivo de un clima de violencia. Por todo ello la violencia social se torna cada vez más grave sea por su notable incremento como por la temprana edad de sus ejecutores: no hay movimientos sociales cuyos actores sean definidos por la exclusión, la marginalidad o el encierro.

La democracia, por lo tanto, carece de fundamento si el país está fragmentado; si las desigualdades sociales son tantas que sus habitantes ya no tienen el sentido del bien común.



Así como el sometimiento de la sociedad al Estado debilita la democracia (e incluso la destruye), la integración y la unidad de la sociedad política la fortalece.

La conciencia de ciudadanía (según lo ha mostrado T. H. Marshall) es lo único que permite reestablecer la unidad de la sociedad quebrantada por los conflictos y la distancia entre las clases sociales, ya que nadie se realiza en una sociedad que no se realiza. Ser ciudadano significa sentirse responsable del buen funcionamiento de las instituciones que respetan los derechos del hombre, permitiendo la amplia representación de ideas e intereses, conciencia moral o racional de pertenencia. De esta manera, ser responsable consiste en responder al llamado del “Otro”(otro individuo, otra cultura, otro tiempo): tal repuesta nos hace responsables del “Otro” en “Nosotros mismos” o como señalaba Hannah Arendt, “pensar juntos y tener, además, la libertad para pensar”.

La persistencia de la cultura de bienestar material (de la que hablaba Tocqueville) continúa siendo una barrera a las posibilidades de cambio así como uno de los factores centrales de la degradación del espacio ciudadano y de la opinión pública cada vez más reclusa en sus ámbitos privados y alejada del espacio público. Es imposible plantear el debate sobre la restauración de la soberanía política y el fortalecimiento institucional sin advertir sobre las condiciones económicas y sociales que facilitan o frustran el ejercicio de los derechos fundamentales, hoy acotados por la situación de vulnerabilidad que sufren vastos sectores de la sociedad.

La Argentina es el único país de América latina que en cinco años duplicó la pobreza y triplicó la indigencia (según datos oficiales), generando un fuerte shock y vulnerabilidad, forma en que la inseguridad se construye deliberadamente como una forma de control social y aislamiento, que el saqueo, la barbarie, y la inseguridad se apoderan de la Nación cuando esta ha caído en la indignidad: La Argentina es fiel expresión del modo en que una

clase dirigente desató la alianza entre libre albedrío y verdad, dando lugar al envilecimiento colectivo por ausencia de reglas y, conduciéndonos a la pérdida de una idea de futuro y falta de camino.

Lo que hace digno al hombre ante sí mismo no es tanto la adscripción a determinadas reglas como sí a su fiel cumplimiento. Quienes renuncian al respecto de ciertos principios morales rompen la confianza social, sin la cual no hay reglas de derecho, previsibilidad, desarrollo, ausencia de justicia, pasando de un espacio simbólico de seguridad y confianza (que los contiene y hace libres) a otro espacio simbólico pero de amenaza perpetua y miedo hacia el Otro. También en nombre de la solidaridad se esclaviza, se saquea el desarrollo económico, la república se hegemoniza mientras la justicia garantiza la impunidad.

Nuestro país, dentro de este proceso, ha alcanzado niveles de pobreza y desigualdad que serían inimaginables hace pocos años. Tal como lo expresara la Premio Nobel Amartya Sen : “ La pobreza no se relaciona con la cantidad de recursos disponibles en una sociedad sino con la distribución de la misma y con las relaciones sociales que la van configurado”.

Lo más significativo es que en ninguna parte del mundo la pobreza es producto de la falta de recursos; nunca hubo tanta producción de riqueza ni de recursos como en la actualidad aunque nunca estuvo tan mal distribuída, especialmente por falta de voluntad política.

Sólo así se explica que con una producción anual de alimentos de dos toneladas per cápita, nuestro país conviva con situaciones de desnutrición infantil y hambre.

Como si se hubiera despertado de un largo letargo la sociedad Argentina súbitamente ha reconocido la gravedad de su situación de pobreza e indigencia y las consecuencias que estas ejercen sobre las poblaciones más vulnerables: la infancia y los ancianos.

Es sabido que pobreza y enfermedad forman un círculo vicioso: una buena salud es prerrequisito para el desarrollo; sin ella las comunidades pobres no pueden alcanzar su

completo desarrollo. “La pobreza es la mayor amenaza para la salud ” (“Promoción de la salud en el siglo XXI ”, Declaración de Yakarta, julio 1997).

La pobreza definida por los ingresos, el status socioeconómico, las condiciones de vida o el nivel educacional, es el más importante determinante de enfermedad ya que se asocia a una menor expectativa de vida, mayor mortalidad infantil, mala salud reproductiva, elevadas tasas de enfermedades infecciosas, persistencia de enfermedades erradicables o a la adquisición de otras que son prevenibles y evitables.

“Favorecer el desarrollo intelectual de la niñez mediante una eficaz inversión en salud, nutrición, educación y cuidados infantiles es un imperativo moral y una decisión económica adecuada: la pobreza en la infancia es insidiosa e inmoral ”( Carol Bellamy, Directora Ejecutiva de UNICEF). Los ancianos, las mujeres, los integrantes de poblaciones minoritarias y/o marginadas, especialmente los niños, cargan con los efectos más profundos de la indigencia y el consecuente aumento en la tasa de mortalidad.

Así a pesar de la tendencia mundial a su disminución, en la Argentina la mortalidad infantil pasó del 16,3 por mil en el 2001 a 16,8 por mil en el 2002. Otro dato ilustrativo de la desigualdad que en materia de salud afecta a las diferentes regiones del país es que de 700.000 recién nacidos por años, los nacidos en provincias pobres tienen diez veces más posibilidades de quedar huérfanos debido a las elevadas tasas de mortalidad materna. Otro aspecto de violencia social y abandono de las funciones que el Estado debe cumplir, lo constituye el trabajo infantil. Entre 1997 y el 2002 aumentó 26 puntos en conglomerados urbanos entre los menores de 15 años, alcanzando según dicho informe al 31% (1.939.288 niños).

Según el último informe de UNICEF Argentina seis de cada diez menores de 18 años, el 62,7%, (3.689.588 chicos) se encuentran por debajo de la línea de pobreza. Entre los

indigentes, casi la mitad no recibe ningún tipo de subsidio o ayuda social (es decir que los planes sociales no llegan al 48,9 % de los más pobres). Mientras que en los países ricos menos del 5% de todos los niños menores de cinco años sufre de malnutrición, en las naciones pobres la proporción llega hasta el 50%.

El ingreso promedio en los 20 países más ricos es 37 veces mayor que el de las 20 naciones más pobres; esta brecha se ha duplicado en los últimos 40 años. También “existe mayor riesgo educativo” ya que una alta proporción de niños de 5 años no accede a la educación; un millón de jóvenes de 15 a 19 años están fuera del sistema educativo, sin ningún tipo de contención, no estudia ni trabaja, acentuando la inequidad y exclusión preexistentes. Cerca del 20% de la población nacional de jóvenes se encuentra en edad de estudiar, trabajar o participar de una actividad productiva e inclusiva.

La salud y la educación son derechos humanos positivos que deben ser garantizados por el Estado, asegurando el acceso universal, gratuito e igualitario a toda la población, siendo esta una decisión política irrenunciable. Aquí toman relevancia los conceptos de Alain Badiou: “La política solo puede ser un pensamiento si afirma que algo es imposible allí donde solo hay una declaración de imposibilidad. Para que la política recupere un lugar activo en la coyuntura histórico-social es necesario pensar su práctica y su alcance también donde, a priori, sólo podía preverse su imposibilidad”.

Por todo ello es muy importante reflexionar como llegamos hasta aquí y como salir de esta situación; lo peor que podría ocurrirnos, es que empezáramos a ser un país con altos niveles de pobreza, ya que sería altamente negativo, no sólo por razones de equidad sino también por los nefastos efectos que generan sobre la calidad de nuestro tejido social.

La consolidación de este modelo de exclusión sólo fue posible merced a la degradación paulatina de los derechos sociales clásicos.

El reconocimiento de la realidad es un principio central para crecer; hay una crisis de episteme que se rompió quebrando por un lado la idea de futuro y por otro reproduciendo instituciones esclerosadas, pero absolutamente funcionales a esta falta de episteme.

Otro gran problema es la cuestión del Poder planteado en la ciencia política clásica con un enfoque estado-céntrico, como algo inalcanzable que está “arriba”, cuando el Poder real circula por todas partes con profundo sentido simbólico. Michael Foucault sostenía que el Poder no quiere ver, por eso no busca la verdad, busca el Poder. Por ello hay que pasar de esa concepción estado-céntrica a la generación de un contrapoder que piensa y mira de otra manera, trabajando con un episteme diferente, desarrollando Instituciones democráticas fuertes y con mayor participación ciudadana.

Una forma de recuperar la confianza perdida es la construcción de espacios de creación política y participación ciudadana, recuperando la identidad por solidaridad e influyendo sobre el curso de los acontecimientos, hoy prácticamente automatizados. Este espacio simbólico de valores de moral, de reconocimiento del otro, de servicio, es el que permite vislumbrar la salida mediante tres contratos : el moral, el de la distribución del ingreso y el constitucional republicano.

El primero se basa en la construcción de un conjunto de normas morales prohibitivas con dos conceptos de valor propositivos: el amor como reconocimiento del Otro y la Paz como búsqueda de verdad y justicia traducidas en normas jurídico-constitucionales.

El segundo consiste en la construcción de un consenso económico-social que asegure una adecuada política del ingreso, partiendo desde dos extremos: “el ingreso ciudadano a la niñez” y “ el ingreso ciudadano a la vejez”. A estos se agregan el acceso a la educación en todas las generaciones, a la salud; a la atención primaria y a los medicamentos; a la alimentación; al trabajo individual, colectivo y/o comunitario; el acceso a la vivienda; a la

cultura; a una justicia imparcial e independiente, garantizando igualdad de posibilidades y oportunidades; es decir: distribuir ingresos y construir ciudadanía.

Por ultimo, el tercero es la expresión constitucional de los anteriores, consagrando la distribución del poder y la cohabitación para el acceso a los cargos públicos, impidiendo la hegemonía y concentración del poder, reconstruyendo un estado representativo de los intereses generales.

Estamos incluídos dentro de un sistema dominado por una ideología que entroniza el mercado como regulador de la vida social, elimina el campo de valores e idealiza el objeto “dinero” como capacidad de Poder. Se entroniza el pensamiento único donde lo más importante es el Poder y el éxito competitivo, donde unos pocos ganan y muchos otros pierden, quebrando el principio de igualdad como valor aniquilando la libre elección de nuevas posibilidades.

“ Ya no se trata de interpretar el mundo sino de transformarlo” ; no ser solo críticos implacables de todo lo existente sino de bregar por una adecuada y justa sociedad. El gran desafío de la sociedad argentina es encarar, reconocer y saldar nuestra mayor deuda, aquella que nos agobia y aflige : la Deuda Interna que mantenemos con los marginados y los excluídos recuperando, de esta manera, la ética, la moral y la equidad perdidas.

“Ya que no podemos dirigir el viento, tratemos al menos de orientar las velas”.Entre todos podremos conseguirlo. Constituye nuestro mayor y urgente compromiso.

## **VIOLENCIA INSTITUCIONAL POLICIAL**

La brutalidad policial es otro de los aspectos preocupantes de la situación de los derechos humanos en la Argentina (que se traduce en aplicación frecuente por parte de las fuerzas de seguridad, de torturas, ejecuciones extrajudiciales y varias otras formas de violencia desplegadas por éstas), y promovida, facilitada, o al menos, no perseguida adecuadamente por el Estado.

EL Comité designado para estudiar el Informe presentado por el Gobierno argentino, hizo recomendaciones haciendo referencia específica al "uso de fuerza excesiva por parte de la policía y a las garantías relacionadas con la prevención del abuso de poder por las autoridades, en particular respecto de la práctica de la tortura", y el Presidente de este Comité expresó la esperanza de que fuera abordado "inmediatamente". A pesar de ello el Estado argentino, no sólo no ha efectivizado una mejor protección y promueve leyes que ponen aun en mayor riesgo la efectiva vigencia de los derechos reconocidos en el Pacto, sino que además en su nuevo Informe se limita a remitir al Comité a lo ya expresado en el Informe anterior.

Las opiniones son unánimes respecto a la gravedad del problema de la violencia institucional en la Argentina (llamamos "violencia institucional" a todo uso arbitrario o ilegítimo de la fuerza ejercido o permitido por las reparticiones del Estado). Tanto los informes de organismos de derechos humanos argentinos, como los de organismos internacionales (Human Rights Watch [sección dedicada a la Argentina en su Informe sobre la situación de los derechos humanos en el Mundo, 1994] Amnistía Internacional [Informe sobre la Violencia Policial en Chaco y Formosa] Lawyers Committee for Human Rights, [Sección dedicada a la Argentina en Critique]), coinciden en destacar la gravedad del

problema y la falta de respuestas por parte del Gobierno argentino. En el mismo sentido, en el Informe del Departamento de Estado norteamericano respecto a la situación de los derechos humanos en la Argentina se ha dicho entre otras cosas que: "la policía continuó siendo responsable por abusos a los derechos humanos, ... personal policial y militar ha sido responsable de un considerable número de asesinatos extrajudiciales, ... (y) el maltrato policial sigue siendo un grave problema".

El Gobierno argentino, por su parte, en su Informe a este Comité, da como única respuesta a estos Justos reclamos, un detalle de las reformas que se han llevado adelante en el Código Procesal Penal. Más allá de que, como quedará demostrado más adelante, estas reformas legislativas no sirven para limitar numerosas prácticas cotidianas ilegales, es importante destacar que, a pesar de las reformas promovidas por el Estado, el nuevo ordenamiento procesal penal mantiene normas jurídicas claramente violatorias de los derechos humanos. En este sentido es importante destacar, por ejemplo, que:

- se sigue abusando de la prisión preventiva, siendo ésta la regla y no la excepción; se mantiene el principio legal que, para las personas procesadas por determinados delitos, no existe la posibilidad de excarcelación. Debido al indiscriminado aumento de las penas en la mayoría de los delitos, son muchos los casos en que legalmente se prohíbe la excarcelación, sin posibilidad de considerar situaciones excepcionales.
- Los plazos legales siguen siendo extremadamente prolongados. Recientemente se ha sancionado una ley que dice que el plazo razonable para la detención preventiva durante un proceso penal es de dos años, siendo prorrogable hasta tres años y medio. Si bien este plazo legal significa una "mejora" pues al menos existe un límite temporal cierto para la detención preventiva, la ley entiende que una persona puede "razonablemente" estar



detenida sin condena hasta tres años y medio (en el caso de los delitos vinculados a estupefacientes no hay ningún límite temporal).

- se sigue practicando la incomunicación del detenido durante las primeras horas de su encierro; como se verá más adelante el Gobierno busca prolongar este periodo de incomunicación hasta cinco días, lo que equivaldría posibilitar la impunidad de torturadores, pues es muy difícil demostrar la aplicación de tormentos después de tantos días de confinamiento. Pero más allá de estas eventuales modificaciones a la legislación actual al permitir todavía la incomunicación en sede policial, facilita notoriamente la aplicación de torturas y malos tratos durante las primeras horas de detención. La mayoría de los jueces, por su parte, son renuentes a investigar estas denuncias para mantener sus "buenas relaciones" con la seccional policial correspondiente.

- La aplicación de edictos contravencionales directamente en manos de la policía impide el debido contralor jurisdiccional en la tramitación de estos procesos que pueden concluir en una sentencia de hasta 30 días de prisión. En casos no tan flagrantes, aun la condena con Sentencia de multa en estos casos significa para el condenado un antecedente policial que dificulta su inserción social. La gravedad de estos procesos policiales es que se llevan adelante sin un contralor judicial automático.

La detención por averiguación de antecedentes sigue siendo una temible arma utilizada por las fuerzas de seguridad para detener arbitrariamente a sus enemigos o a cualquier persona que deseen. Durante la práctica cotidiana de estas detenciones arbitrarias, no sólo se somete a la persona a un encierro injustificado y en condiciones indignas, sino que también se la suele someter a vejaciones de variada índole.

Más allá de éstas y otras violaciones "legales" a los derechos humanos, también es necesario destacar la abismal distancia existente entre la regulación normativa y la

aplicación de las normas que hacen de ellas los agentes estatales. En este sentido, nos interesa destacar aquí algunos de los abusos policiales más graves y frecuentes:

- La aplicación casi sistemática de torturas y malos tratos, facilitada por una legislación que en forma muy insuficiente protege a los ciudadanos detenidos, las fuerzas de seguridad hacen uso permanente de la tortura y otros Vejámenes. Entre los mecanismos más utilizados puede enumerarse el "bolseamiento" del detenido, (cubrirle la cabeza con una bolsa especialmente diseñada que hace que los golpes no dejen huellas externas, pero sí dejan secuelas irreparables en el interior del cerebro) y el "submarino seco" (tapar la cabeza del detenido con una bolsa de polietileno, provocando asfixia). Ambas metodologías son muy utilizadas por no dejar huellas visibles.
- Las detenciones ilegales: más allá del texto de la ley y de las amplias facultades que otorga a las fuerzas de seguridad para detener ciudadanos, los agentes policiales suelen detener sin ningún motivo ni justificación legal; incluso, el que no haya de hecho ningún control jurisdiccional de las detenciones en comisarias, provoca que las seccionales policiales suelen "reconocer" la detención de un ciudadano cuando les conviene, quedando en algunos casos registrada la detención de una persona horas o días después de ocurrida.
- Las declaraciones "espontáneas": uno de los principales elementos de prueba siguen siendo las declaraciones espontáneamente presentadas ante funcionarios policiales. Estas confesiones, obtenidas en todos los casos a través de tormentos físicos y psíquicos, siguen siendo el elemento principal de la mayoría de las sentencias condenatorias.

- Violación de plazos legales: más allá de que los plazos legales para desarrollar un juicio suelen ser demasiado prolongados, ni siquiera en este caso son cumplidos y los procedimientos legales suelen extenderse en el tiempo sin límite ni contralor alguno. El acortamiento de los plazos esgrimido por el gobierno debido a la implementación del juicio oral es sólo parcial, debido a que la etapa de instrucción del juicio sigue siendo escrita, lo que prolonga innecesariamente las tramitaciones de las causas.
- Las condiciones de detención en dependencias policiales: es necesario llamar la atención acerca de las paupérrimas condiciones de detención a las que se ven sometidas las personas mientras permanecen detenidas en dependencias policiales; los detenidos suelen "amontonarse" en celdas pequeñas y sin luz natural -a veces ni siquiera luz artificial-, en condiciones de hacinamiento y en instalaciones sin ningún tipo de dispositivos especiales para casos, por ejemplo, de discapacidad. Además, la estricta vigilancia policial en todo momento suele resultar intimidatoria para los abogados que intentan conversar con sus clientes en sede policial.

Todas estas violaciones a los derechos humanos, sean tanto de carácter legal como producto de las prácticas ilegales de los agentes estatales, no son nuevas en la Argentina sino todo lo contrario, siendo posible advertir una larga tradición del uso arbitrario de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad. No obstante lo trascendental de estas violaciones, el Gobierno no ha dado muestras de querer ponerle fin o al menos limitar este fenómeno. Por el contrario, es posible advertir una preocupante pasividad en la mayoría de los casos o una incomprensible complicidad en otros. Este es el caso, por ejemplo, del comisario Luis Patti,

quien tiene un proceso pendiente por torturas desde hace varios años atrás sin que ello haya impedido que el Gobierno lo promoviera de distintas formas.

Por toda respuesta al pedido de la ciudadanía de una mejor seguridad para todos (pedido que incluye un mayor control sobre las fuerzas de seguridad debido a que su autoridad indiscriminada produce miedo entre los habitantes), el Gobierno contesta con leyes que buscan ampliar las facultades policiales, ignorando las pruebas que documentan los riesgos que significa una mayor discrecionalidad en manos de los agentes del Estado (se adjunta una encuesta del Centro de Estudios Legales y Sociales sobre la imagen policial). En vez de llevar a cabo un programa serio y global que considere las necesidades de todos los involucrados de modo tal de lograr una fuerza de seguridad que cumpla con un rol adecuado para una sociedad democrática, el Gobierno promueve leyes y reglamentos que dejan aun más desprotegido al ciudadano.

El caso más notorio dentro de esta tendencia es el Proyecto de Reformas al Código Procesal penal de la Nación, enviado por el Ministerio de Justicia dentro del programa de Reorganización del poder Judicial. En este Proyecto se proponen medidas que constituyen en si mismas Violaciones a los derechos humanos y otras que ponen en grave riesgo la efectiva protección de las garantías básicas. Entre estas propuestas es necesario destacar:

- Se permite el interrogatorio de sospechosos por parte de las Fuerzas de Seguridad (art. 10 del Proyecto).
- se dispone la prolongación de la incomunicación decidida en sede policial de seis a doce horas (art. 10) y, tal como ya fuera dicho, la incomunicación decidida por el juez puede ser de hasta cinco días (art. 18). Es necesario destacar que el detenido puede no ser visto por el juez mientras dura el periodo de incomunicación policial o

judicial, violándose de este modo el derecho elemental a ser presentado sin demora ante el juez (el art. 30 elimina el plazo de 6 horas actualmente existente para la presentación de un detenido ante el juez competente).

- se elimina la necesidad de que la orden de detención contenga el hecho que se le atribuye al detenido, de modo tal que no se lo informa de las razones de su detención (art. 29).
- Estas son solamente algunas de las peligrosas modificaciones propuestas por el Ejecutivo recientemente, pudiéndose comprobar en el proyecto en general una clara tendencia a otorgar amplísimas facultades a las Fuerzas de Seguridad sin ningún tipo de contralor judicial.
- Finalmente, es necesario destacar que el problema de la violencia policial no se limita a alguna región en particular, sino que los abusos por parte de la policía en sus diferentes formas alcanzan a todo el país (más allá de que sea posible identificar situaciones de mayor gravedad como las de las provincias de Buenos Aires -que es la región más poblada del país-, Mendoza o Chaco).

Resulta imposible extendernos aquí más detalladamente sobre la gravedad de la situación y el negligente o cómplice comportamiento del Estado argentino. Remitimos a los anexos que acompañan este informe donde se demuestra estadísticamente y a través de numerosos casos individuales la entidad de las violaciones a los derechos humanos aquí descriptas.

A pesar de las recomendaciones realizadas por este Comité en momentos de estudiar el Informe anterior presentado por el Gobierno argentino, donde específicamente se hace referencia al "uso de fuerza excesiva por parte de la policía y a las garantías relacionadas con la prevención del abuso de poder por las autoridades, en particular respecto de la

práctica de la tortura", y de que el Presidente de este Comité expresara la esperanza de que fuera abordado "inmediatamente", el Estado argentino, no sólo no ha efectivizado una mejor protección y promueve leyes que ponen aun en mayor riesgo la efectiva vigencia de los derechos reconocidos en el Pacto, sino que además en su nuevo Informe se limita a remitir al Comité a lo ya expresado en el Informe anterior (Referencia a los arts. 6, 7 y 9 del Pacto en el Informe del 7 de enero de 1994).

A principios de febrero, en momentos en que este informe estaba en su fase final, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que reforma el Código Procesal Penal en muchos puntos fundamentales. Si bien es imposible, por razones de tiempo, realizar un análisis detallado de las reformas proyectadas, corresponde destacar que el proyecto en cuestión recoge en su mayoría las reformas propuestas por el poder Ejecutivo a través de su Ministerio de Justicia que se cuestionan en este informe. Es decir que es posible verificar en el actual proyecto de reformas al Código Procesal Penal, una clara tendencia autoritaria en sus disposiciones fundamentales.

En este sentido, nos interesa destacar tan sólo una modificación propuesta la que, por la magnitud de sus consecuencias prácticas, merece ser descrita en detalle. En el capítulo referido a la anulación de los actos procesales debido a su tramitación irregular, el mencionado proyecto dice en su regla general: "no se declararla la nulidad del acto si, no obstante su irregularidad, ha logrado la finalidad a que estaba destinado". Esto significaría la legalización del principio de que *fiel fin justifica los medios*". Aunque todavía resta la sanción de esta ley por la Cámara de Senadores y su posterior aplicación por parte de los Jueces, no deberla sorprendernos que esta disposición legal fuera interpretada por los Jueces locales en el sentido de que, aun en el caso de que se obtuviera una confesión a

través de la aplicación de tormentos, como la tortura echa logrado la finalidad a que estaba destinada", la confesión sería válida.

Merece puntualizarse que esta modificación del texto legal tiene su origen en la presión realizada por los organismos de seguridad en un afán de lograr mayores facultades para lograr sus fines. Recientemente, algunos jueces inferiores han invalidado una serie de actos policiales por haberse demostrado graves irregularidades en la obtención de las pruebas condenatorias. Ante estas nulidades declaradas por los Jueces, se ha contestado con esta ofensiva por lograr una protección legal de las arbitrariedades policiales. Por su parte, el Poder Ejecutivo y el Legislativo -lo mismo que los tribunales superiores digitados políticamente- están permitiendo así un mayor autoritarismo policial.

## **LA SEGURIDAD CIUDADANA Y LA CULTURA DE LA VIOLENCIA**

Los cambios que el paso del tiempo ha impuesto en cada una de ellas reseñan episodios de las microhistorias cotidianas en las cuáles, se van tramando las trágicas formas en que el poder de vigilancia moldea nuestros débiles cuerpos ciudadanos.

La primera versión, fue escrita a mediados de 1996. La saga de violencia policial que describe y la despreocupación de la agenda pública por el tema de la violencia eran cuestiones de época. La segunda versión, fue otra etapa: se estaban discutiendo, en la Convención Estatuyente de la ciudad autónoma de Buenos Aires, la derogación de los viejos edictos policiales. Para entonces, el reportero gráfico José Luis Cabezas había sido asesinado en la provincia de Buenos Aires. La preocupación con que los medios tomaron el tema resultó en que, en muy poco tiempo, la corrupción, las prácticas violentas de las policías y la complicidad de muchos sectores políticos para que esto pueda ocurrir, salieran a la luz pública.

Aunque se tratara de la policía de la provincia de Buenos Aires, todas las policías eran cuestionadas. Así las cosas, los legisladores votaron, en reemplazo de los viejos edictos, un código de convivencia respetuoso de los derechos de ciudadanía. Sin embargo, esta tercera versión de este artículo no puede celebrar nada. A menos de un año de sancionado el nuevo código, los mismos legisladores<sup>1</sup>, sin ser capaces de resistir las presiones del acostumbrado autoritarismo, cuando no sintiéndose mucho más cómodos gracias a ellas, aumentaron las penas de prisión por faltas contravencionales y prohibieron la oferta y demanda de sexo en la vía pública. La figura a través de la cual legislaron es tan imprecisa – y por lo tanto tan



violatoria de los derechos humanos - como aquellas que los viejos edictos establecían. Al mismo tiempo, el presidente de la Nación ha ordenado por decreto<sup>2</sup> que, en el marco de la ley que permite la detención policial por averiguación de identidad, sean conducidas a la dependencia policial las personas que incurriesen en una serie de conductas. El detalle de éstas es una transcripción casi literal de los obstrusos edictos derogados. Así las cosas, este es un artículo nuevo y viejo al mismo tiempo. Lo que tiene del viejo – el corpus principal – me parece sin embargo que despliega toda la actualidad y las preocupaciones que aquí se plantean. corporaciones, de la actitud reflexiva y responsable desde . la cual los legisladores sean capaces de dictar leyes que permitan, alguna vez, construir ciudadanía y democracia.

Hacia mediados del mes de febrero de 1996 estaba inmersa en la investigación que la Universidad de Buenos Aires nos subsidia<sup>3</sup>. Los meses de verano son tranquilos en la ciudad, aún no han comenzado las clases en la facultad y mucha gente está de vacaciones. En febrero y marzo nadie quiere despegarse del verano. Es entonces un buen tiempo para los investigadores de esta región para dedicarse a la reflexión académica. Pero no resultó así. Hacia fines de mes, la policía de la provincia de Buenos Aires reprimió en forma arbitraria y brutal una pacífica manifestación de estudiantes en la ciudad de La Plata. Golpeó e hirió a periodistas, jóvenes y transeúntes. Un día después, un adolescente que estaba con unos amigos en la esquina de un barrio céntrico de la Capital fue asesinado de un tiro en la nuca por un policía Federal uniformado. Al día siguiente, un hombre que llevaba a su hija al hospital fue asesinado también por un policía bonaerense que le disparó por la espalda. Pocos días después en Mar del Plata un joven es detenido por una patrulla policial, conducido a un descampado, asesinado a mansalva y luego quemado por estos mismos agentes. El mismo día que se descubre el hecho, un grupo de chicos de clase media denuncia que un gendarme de civil mantiene un altercado con ellos en la vía pública, se

baja del auto que conducía, se dirige al auto de los menores y comienza a dispararles. Como se le traba el arma, sólo logra herir a dos de ellos. Al día siguiente, una mujer joven aparece ante las cámaras de televisión mostrando la cara y el cuerpo lastimado e hinchado debido a los golpes recibidos en la comisaría por negarse a ejercer la prostitución bajo la protección de los agentes. Y así continuó, hasta mayo, la trágica saga.

Ninguno de estos hechos es ajeno a lo que sucede muy a menudo en Buenos Aires. Sin embargo, no es común que ocurran dentro de un lapso de tiempo tan breve.

Habitualmente, cuando un hecho de violencia policial adquiere notoriedad a través de los medios de comunicación o, cuando denuncias o informes de violaciones a los derechos humanos se dan a publicidad, la policía disminuye, por unos pocos meses, el ejercicio de la violencia. Así ocurrió, por ejemplo en febrero de 1995 luego de los Informes del Departamento de Estado de los EEUU denunciando la violencia policial en la provincia de Buenos Aires o, luego de la muerte de Walter Bulacio en una comisaría, en 1991 y de la disminución de las horas de detención por averiguación de antecedentes.

Pero esta vez no fue así. La violencia no cesó. Sin embargo, al menos, comenzó a debatirse, quizás por primera vez, el lugar de las fuerzas policiales en la vida ciudadana. Por primera vez, los “excesos” comenzaron a ser denunciados como cuestiones estructurales y un debate público al respecto comenzó a organizarse.

Sin duda que la pregunta que se hará el lector es, ¿cuál es la vinculación entre la facultad policial de detener personas y la perpetración de crímenes policiales?.

Queremos demostrar en este trabajo que ambas forman parte de una estructura autoritaria y extendida de concebir el poder de policía y el ejercicio de la violencia..

Cuando comenzamos a pensar en esta particular vinculación entre violencia y cultura, una primera cuestión nos sorprendió, como antropólogos nativos que hemos naturalizado

nuestra cultura académica, y fue tomar conciencia que, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros países como los Estados Unidos y más recientemente en Brasil, no existe en Argentina una tradición sociológica importante de estudios sobre violencia, o sobre criminalidad, o sobre criminalidad y violencia o sobre inseguridad urbana. Los estudios en el área de la criminalidad han estado hegemonizados por las ciencias jurídicas y penales pero, incluso, la criminología jurídica tampoco ha alcanzado un desarrollo similar al del derecho penal o al derecho procesal penal. Las escasas investigaciones estadísticas sobre estos temas adolecen de gravísimos problemas metodológicos y solo sirven, por lo tanto, como argumentos variables para demostrar, según la ocasión, la disminución o el aumento del delito y pedir, según quien la utilice, leyes más duras y menos garantías procesales.<sup>4</sup> Han sido elaboradas en el marco de la burocracia estatal, sin vinculaciones con la producción sociológica académica.

Algo similar sucede en la literatura argentina. Si la novela policial puede comprenderse, como toda otra práctica literaria, como una forma particular de "matriz perceptiva" que ordena puntos de vista, tipos de relaciones sociales, sentidos del orden (Link, D.; 1992:5) no resulta extraño que no exista en nuestro país escritores que puedan ser identificados como clásicos novelistas policiales o como cultores del género de la "novela negra" norteamericana. Quiero decir, no tenemos un Conan Doyle o, en su versión regional, un Rubem Fonseca, por ejemplo.<sup>5</sup> Ello así porque la institución policial y el crimen -dos actores protagónicos del género- no parecen representar entre nosotros los clásicos roles que la novela y el cuento policial les ha asignado en sus variables posibles (Feinmann, J.P.: 1991)

Asimismo las clásicas revistas populares, que relatan semanalmente crímenes e historias de violencia llenas de sangre, han tenido vidas efímeras en estos últimos años.

Desde la reinstauración de la democracia se editaron algunas publicaciones destinadas tanto a una audiencia popular como a públicos más circunscriptos. Ninguna tuvo una vida de más de dos años, y la mayoría solo pudo editar unos cuantos números<sup>6</sup>. De todas ellas, las que más vida tuvo, sumaba a las crónicas sobre crímenes truculentos denuncias sobre la brutalidad policial o historias sobre la injusticia de la violencia estatal sobre los cuerpos de los muchos indefensos: los pobres, los travestis, los desocupados.

En enero de 1997 es asesinado el reportero gráfico José Luis Cabezas. Las múltiples formas en que opera la violencia policial de desplegaron ante la mirada pública. Pero también la criminalidad urbana comenzó a llenar las páginas de las crónicas periodísticas y a ser tema privilegiado del discurso político. Solo muy recientemente han comenzado a aparecer algunas tímidas señales de que estos temas pueden formar parte de una agenda de problemas sociales prioritarios, antes que de una serie de cuestiones que entran en la arena pública cuando hechos escandalosos los arrastran.

Sin embargo, esta primera mirada puede resultar equívoca. Sucede que la violencia es un concepto que solo adquiere significación en tanto es analizado en su valor local. Y este carácter local, a su vez, enlaza con procesos históricos particulares<sup>7</sup>. Y estos procesos históricos particulares son los que dan forma, locales también, a instituciones, prácticas, memorias y actores.

Clifford Geertz en una poética y sugestiva definición de cultura decía, hace ya tiempo: "(...) el hombre es un animal inserto en tramas de significación que él mismo ha tejido, considero que la cultura es esa urdimbre y que el análisis de la cultura ha de ser por lo tanto, no una ciencia experimental en busca de leyes, sino una ciencia interpretativa en busca de significaciones".(Geertz; 1973:20)

No podemos negar que, si la cultura es una urdimbre, en nuestro país, varios de los hilos que la traman son los hilos de la violencia política. Digamos, el carácter político de la violencia en la Argentina debería explicar porque no hemos tenido una tradición sociológica y literaria de preocupación por la criminalidad urbana.

Para dar cuenta de ello vamos a intentar recorrer un camino que abrirá varias vías posibles de explicación. Estas vías serán construidas como pequeñas tesis argumentales y, ante cada una de ellas presentaremos, por razones de espacio, sólo una serie de indicadores que, como mojones en una ruta, servirán para darnos una idea de la dimensión del problema que el análisis de la violencia y la cultura presenta en nuestro caso.

La primera tesis, que llamaremos, “del estado policial”, se propone explicar cómo la cuestión del orden urbano fue una preocupación hegemonizada por las élites morales<sup>8</sup>, y sustraída entonces, del debate democrático.

Para ello, en una primera parte de la argumentación, explicaremos cómo en la etapa formativa de la Argentina como Nación el problema de la delincuencia y la transgresión se construyeron como un problema de anormalidad patológica y, por lo tanto, la pena o el castigo se fueron adaptando a la estereotipación de tipos humanos portadores de diversas patologías, antes que al tipo de delito. Ello redundó en la construcción social de una sensibilidad legal<sup>9</sup> preocupada por determinar el tipo de condicionamientos sociales, biológicos, raciales y hereditarios que convertían a determinados grupos en peligrosos sociales y una vez identificados, en medir el grado de “temibilidad” (según el término acuñado por José Ingenieros a principios del siglo). Así, el libre albedrío, problema fundante del derecho liberal clásico, base de una ética de los derechos humanos, y fundamento de la construcción de la ciudadanía, quedó excluida, en buena medida, de las preocupaciones por el orden social.

En una segunda parte de la argumentación explicaremos cómo esta sensibilidad legal se reificó en una serie de reglamentos, normas de baja de jerarquía y prácticas de subcultura policial y jurídica que continúan vigentes hasta hoy y constituyen uno de los temas de debate más complejos para la agenda actual de los derechos humanos.

Explicaremos, a su vez, como estas prácticas de subcultura se configuran como constreñimientos estructurales que coadyuvan a su reproducción cotidiana, limitando los espacios de disenso o debate sobre ellas.

La segunda tesis, que llamaremos la del estado terrorista, argumentará cómo durante la última dictadura militar una serie de prácticas y metodologías represivas policiales, aplicadas sobre determinados grupos sociales se extendieron sobre toda la sociedad y tejieron lo que acertadamente O'Donnell denominara la cultura del miedo.

A través de estas dos tesis nos proponemos argumentar sobre la extensión de estas dos formas de "estado" sobre el cuerpo de la sociedad civil y la concomitante dificultad para construir sobre ellas modos democráticos de interacción social.

Buenos aires, marzo de 1996. El jefe de la policía bonaerense, crio. Mayor Pedro Klodczyk explica al diario Clarín las razones de los crímenes cometidos por la policía:

Crio. Klodczyk: "La función de la policía es muy difícil. En la fuerza tenemos una frase: "Al ser los basureros de la sociedad, a veces nos manchamos con la basura"Periodista: )Qué quiere decir eso exactamente?Crio.: "Que al estar en contacto permanente con los delincuentes, el policíacorre el riesgo de contagiarse (...)"

Buenos aires, cátedra de Psicología experimental de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, palabras de su titular José Ingenieros, 1910.

"Los anormales: el homicida, el genio, el mentiroso, el pederasta, el filántropo, el avaro, el alienado, el ladrón, el apóstol, el sectario, el enamorado, el vagabundo, la prostitución son la levadura -buena o mala- queda vida y fermento a las instituciones policiales"

Buenos Aires, marzo de 1999. Reunión de fiscales contravencionales de la ciudad autónoma de Buenos Aires y comisarios y subcomisarios de la policía Federal, en el Departamento de Policía.

Policía: "Para nosotros es un enorme problema demostrar que una chica que está parada en una esquina es una prostituta. Aunque la filmemos, ella perfectamente puede decir que está esperando un colectivo"

Fiscal Juan Carlos López: "Si tiene cara de perro, ladra como un perro y mueve la cola como un perro, es un perro"

(diario Clarín, 10 de marzo de 1999 pág.38)

¿Que instituciones, cuál derecho y que prácticas punitivas sostienen y han sostenidos estos discursos? Hacia finales del siglo XIX y principios del XX la producción científica e intelectual se caracteriza por una particular preocupación por el problema del orden social. El crecimiento urbano, la inmigración europea, las primeras huelgas obreras y el movimiento anarquista fueron definidos, en la voz y las políticas de las diversas élites morales, como los problemas sociales relevantes. El positivismo y la teoría de la degeneración fueron la forma disciplinaria de producción de un saber específico sobre el desorden y la criminalidad. Sobre sus debates y discursos se construyeron instituciones, edificios, técnicas disciplinarias, saberes, se organizaron congresos, se promovieron intercambios internacionales y, se codificaron cientos de normas y prácticas de baja jerarquía que aún hoy están vigentes en la vida cotidiana de la ciudad. (Salelli, Jorge: 1995; del Olmo, R: 1981 )

Anthony Giddens (1985), preguntándose porqué ciertas teorías sociales conservan su vigencia después que pasaron las condiciones que concurrieron a producirlas, responde que es porque se trata de reflexiones sobre una realidad social que también contribuyen a constituir y que, la distancia de las mismas de nuestro mundo social no implica que no sean parte de él.

Nos encontramos entonces con una serie de prácticas de castigo construidas y apoyadas, por un lado, por una retórica científica y argumental que, aunque hoy desacreditada en la mayoría de los espacios académicos, conserva buena parte de su vigor entre los cuadros superiores de las fuerzas de seguridad y en amplios sectores de los tribunales. Por otra parte, con una retórica de imágenes cuya naturalización en el ámbito de la cultura urbana las hacen terriblemente eficaces para legitimar las prácticas aludidas. Y finalmente, con un número importante de oficinas, cuerpos burocráticos, dependencias estatales que fueron, en su momento, el resultado de la reflexión institucional sobre un tema definido como problema por un grupo de científicos, políticos, militares, pensadores y escritores de una época, pero que, varios años después, la capacidad de reflexividad de estos mismos cuerpos institucionales solo buscó su lógica en su propia reproducción.

Trataremos de dar unos ejemplos. Hacia fines del siglo pasado, la antinomia que Sarmiento construye entre Civilización y Barbarie fue sin duda un modelo de análisis persistente. Pero fundamentalmente porque de ella surgieron "los principios teóricos, las metáforas y formas de representación del higienismo que sirvieron mejor que el modelo sarmientino para asociar a la mayor parte de la población sean intelectuales, ganaderos y burgueses, gauchos e inmigrantes, habitantes del campo y la ciudad, en la lucha contra un invisible enemigo común que amenazaba la integridad de todo el cuerpo de la nación" (Salessi, J.: 1995:15). El higienismo se presentó como una teoría científica e instrumental: así, la definición de la



higiene argentina buscó incluir procedimientos y hechos públicos, sociales y legales: por ello pudo constituirse en la legítima argumentación no solo para la realización de obras públicas sino de leyes como la de Residencia en 1902 y la de Defensa Social en 1910.

En un mismo haz significativo fueron asociados metonímicamente la inmigración, la enfermedad y la criminalidad. La inmigración amenazaba, para las élites morales las costumbres patriarcales y tradicionales. Para las élites políticas -coincidentes muchas veces con las anteriores- la amenaza eran "los elementos anarquistas indeseables" que, mezclados con "honestos" inmigrantes llegaban al país con la misión, como bacterias de una pandemia incontrolable, de infectar el cuerpo de los trabajadores.

Así lo expresa, por ejemplo, Cornelio Moyano Gacitúa, Juez de la Suprema Corte de Justicia y profesor de Derecho Penal, en 1905. Dice: "Así como las ciudades, al recibir una gran población, necesitan para su higiene física obras de drenaje y de salubridad so pena de grandes saturaciones mefíticas; así también necesitan de esas obras de salubridad moral que son las instituciones preventivas o represivas, destinadas a contener la sobresaturación criminal del inmigrante". (en: Salessi, Jorge; 1995:116)

Para que estas obras de "salubridad moral" se realizasen debían de existir una burocracia estatal que las impulsara y les diera forma. Ello ocurrió con los médicos y científicos positivistas. Por un lado, aparece la figura del perito y las prácticas periciales. El perito es el hombre al que, apoyado por una metodología supuestamente rigurosa, le es permitido indagar sobre un sujeto /objeto minuciosamente y sin interferencia posible de la subjetividad del observado. Jorge Salessi (ob.cit.) describe como los peritos positivistas usaron historias clínicas específicas para promover la creación de nuevos espacios, argumentando que el alienista que ejercía la profilaxis no podría esperar que el peligro se convirtiera en delito consumado para recién entonces recomendar la internación de su

víctima.<sup>10</sup> Así encontraron lugar especial en la burocracia estatal el Asilo especial para bebedores y los manicomios criminales, por ejemplo.

A su vez, estos peritos "ampliaron su campo de acción agregando a sus credenciales científicas, militares y policiales, credenciales de legistas, que los transformaron en jueces virtuales" (Salessi, J.;ob.cit.128). Un perito decidía si un ladrón lo era a consecuencia de un proceso atávico de degeneración que podía leer en el movimiento de los ojos, en la mirada esquiva o en la forma de la oreja. podía recomendar la internación manicomial o el encierro reformador. también podía decidir la internación o el arresto de un "compadrito", de un amante apasionado, de un bígamo o de cualquier persona sin domicilio fijo o sin trabajo reconocido (ver: Lombroso, C.:1914:295 y ss).

Todos ellos eran alojados en el "Depósito de contraventores" donde, luego de ser debidamente observados y catalogados podrían ser, o bien puestos en libertad o bien, derivados a un instituto especial. La historia y las prácticas del positivismo en Argentina son casos ejemplares de lo que Foucault denominara el ejercicio del poder de las disciplinas.

Ahora bien, y volviendo a la pregunta de Giddens, cómo fue posible que esta disciplina científica perviviera fuera de las condiciones que le dieron origen y cómo se vincula este proceso con la percepción de la violencia en nuestro país.

Por una lado, debemos reconocer que los procesos complejos de reflexividad institucional que Giddens caracteriza como marca fundamental de la modernidad, no parecieran ser tan dinámicos en América Latina, como en los países centrales. No queremos decir que las instituciones y organizaciones que dan forma a nuestros estados y a nuestra sociedad puedan sustraerse de esta dinámica. Muy por el contrario.

Queremos decir que lo hacen con una dinámica diferente.

Los procesos de reflexividad institucional se caracterizan, entre otros atributos, por no tener un centro o un lugar generador. La reflexividad esta fuera de un centro de control y, por ello mismo, su capacidad de control es incommensurable.

Ello no ha sido exactamente así en América Latina. Por una serie de situaciones históricas y coyunturas específicas, este proceso aparece claramente -en Argentina-, a principios de siglo, pero luego se torna errático. Es posible inferir una fuerte tendencia de las instituciones, especialmente las punitivas, a mantener un control exhaustivo de sus posibilidades reflexivas y, exactamente esta tendencia es la que resulta en que amplias áreas de la vida social queden fuera de control y que se constituyan en áreas de impugnación a la dominación o de espacios de alteridad. Esta afirmación no hace más que corroborar aquella vieja comprobación de Durkheim acerca de que, contradictoriamente, es más fácil ejercer el control en una democracia que en un estado absolutista. El control social del público y la dinámica del consenso, que tanto han preocupado a los pensadores de la tradición teórica norteamericana sobre el Estado, se ha demostrado más eficaces que el ejercicio de la coerción para el gobierno de la sociedad civil, típica de las sociedades que se formaron bajo la tradición europea del Estado y el control social.

Volvamos entonces al tema y a la segunda parte de la argumentación de nuestra primera tesis. Decíamos que la sensibilidad legal que se configuró con el Positivismo y que nutrió la retórica de las imágenes que le proveyó el higienismo y las teorías del determinismo biológico y la degeneración, se reificaron en una serie de reglamentos, normas de baja de jerarquía y prácticas de subcultura policial y jurídica que continúan vigentes hasta hoy. A su vez, decíamos que estas prácticas de subcultura se configuran como constreñimientos estructurales que coadyuvan a su reproducción cotidiana limitando los espacios de disenso o debate sobre ellas.

Estas normas han sido los Edictos Contravencionales de policía y son, aún hoy, los códigos de Faltas de las policías provinciales. Estas normas permiten a la policía detener personas por un tiempo de hasta 30 días sin control jurisdiccional alguno. En la ciudad de Buenos Aires, la policía era juez y parte en estos casos, Las contravenciones de policía en la ciudad de Buenos Aires, eran una serie compleja de figuras que definen conductas delictivas. Muchas de ellas se remontan a la época de la colonia, la mayoría fueron codificadas a principios de siglo, durante el auge del positivismo y otras, luego de la década del '50, como respuesta a las luchas sociales.

Las principales figuras eran las de Vagancia, Mendicidad, Escándalo y Ebriedad. Pero cubrían también un número importante de actividades sociales que pueden ser intervenidas por la policía: desde los bailes públicos hasta juegos infantiles, desde el uso de insignias hasta la tenencia de elementos "sospechosos de servir para la comisión de delitos". En todos los bares de Buenos Aires, por ejemplo, hasta marzo de 1998 colgaba de algún rincón de la pared, enmarcado bajo un vidrio más o menos limpio el Edicto de policía que prohibía juegos de azar desaparecidos hace tiempo y de los que nadie conserva memoria, pero la advertencia estaba ahí. Si la advertencia no era ostensible, el bar podía ser clausurado.

Se manifestaba así una situación paradójica. Como señalamos, la codificación de los Edictos puede remontarse a hace más de cien años, su reglamentación y normas de aplicación eran particularmente enrevesada y, en muchos casos, había sido modificada por acuerdos y memoranda secretos solo conocidos por los cuerpos policiales y legitimados por el Poder Judicial, que, por otra parte, poco sabía de su existencia por tratarse de normas de menor jerarquía.

Pero, al cubrir un espectro muy amplio de las actividades y la cultura cotidiana, impregnaban la cultura urbana de la posibilidad de control policial arbitrario, mantenían el

secreto que toda arbitrariedad requiere, y permitían un ejercicio sordo y continuo de la violencia estatal sobre importantes sectores de la población.

En la Capital Federal, según cifras de la misma policía, se han condenado, durante el primer semestre de 1995 a 160.830 personas, en 1994 a 116.000. De estas cien mil, apenas 100 apelaron a la justicia la detención. La mayoría han sido sometidas a malos tratos y a prácticas autoritarias y degradantes al ser alojadas en los calabozos de las comisarias.

Aún cuando hoy los edictos han sido reemplazados por el código de convivencia, el debate sobre la facultad de detener personas según el "olfato policial" no parece ser discutida seriamente por los operadores del sistema.

Entendemos que ello sucede por varias razones. En primer lugar, el debate se produce cuando este tipo de detenciones resulta en muertes o denuncias públicas de tortura. O sea, cuando un hecho extraordinario irrumpe en la cotidianidad de la práctica policial. Por otro lado, el estigma que se construyera a principios de siglo y que se reprodujera hasta hoy sin mayores alteraciones resulta en que, en la cultura urbana, este fuertemente naturalizada la potencial carga de "peligrosidad" del diferente o del "sospechoso". Sospechoso es una categoría que se ha construido estereotipando rasgos físicos tales como la tez oscura, la ropa pobre o descuidada, el pelo largo. A ello se suma la arbitrariedad de la mirada policial entrenada en sospechar al azar para prevenir o reprimir el delito. El espectro de sospechosos puede ampliarse pero no puede traspasar ciertos límites, por ejemplo, la categoría mujer, mayor de treinta años, vestida de clase media alta, es prácticamente invulnerable.

Así las cosas, tenemos entonces un importante sector de la población urbana joven que alguna vez ha sido detenido, aunque sea por pocas horas, por la policía. Así, la experiencia de la detención ingresa de continuo en el ámbito de la cotidianidad, raramente es decodifica

como una arbitrariedad que puede ser discutida y marca los cuerpos y las conductas de las víctimas.

Paralelamente, la policía ejerce la facultad de detener arbitrariamente como una función burocrática antes que como una función punitiva propiamente dicha. Ello parece obvio si tenemos en cuenta la discrecionalidad con que se practica. Pero, más importante aún que esta discrecionalidad, es el valor que, en la subcultura policial, se otorga a este ejercicio de poder.

Las detenciones son generalmente asentadas en un libro de entradas iniciando un trámite burocrático complejo que involucra a varios agentes y varias, también, instancias jerárquicas. Mes a mes, el número de detenciones se vuelca en una estadística que es remitida a la central policial. Las jurisdicciones policiales que a fin de mes han conseguido un número alto de detenidos, aunque ello no implique, claro, la disminución de la criminalidad urbana, son evaluadas como jurisdicciones dónde efectivamente "se trabaja". Los propios policías suelen referirse a este tipo de detenciones como "vamos a hacer estadística". Así es común que estos salgan a la calle a detener personas porque esa semana "no han completado la estadística", por ejemplo.

Las causas que justifican las privaciones de libertad son, según consta en las actas policiales: por "encontrarse merodeando por la intersección en actitud sospechosa"; "demuestra actitudes de nerviosismo / intranquilidad, intentando pasar desapercibido, ante la presencia policial. Ello demuestra la predisposición a cometer o el haber cometido ya un delito contravencional"; "no justifica su presencia en el lugar". Si el detenido se resiste alegando falta de mérito para la detención, se le instruye una causa judicial por "resistencia y lesiones a la autoridad".

Por otra, este amplio control de las actividades sociales les permite, más que la prevención del delito, el control eficiente de las actividades delictivas. Les permite intervenir en la programación de este tipo de actividades, organizar el cuerpo de "buchones" (informantes de la policía) sin los cuales no podrían prácticamente esclarecer delito alguno, manejar los recursos provenientes de la prostitución, organizar su exhibición, controlar los pequeños traficantes de droga, etc.

Y, finalmente, esta posibilidad de accionar discrecional permite a las policías dar respuestas concretas a las demandas de orden que, muchas veces presionan desde la ciudadanía. El pesado, lento y corrupto sistema de justicia en Argentina no esta preparado para dar respuestas a las demandas de seguridad, ni tampoco parece demasiado preocupado por ello. Y este es el principal espacio que queda abierto para la legitimación del accionar policial: si la justicia no puede retener detenidos a los pequeños delincuentes, ni contemplar la punición de ilegalismos menores, y menos aún ingresar en la privacidad de las personas, la policía, violando los principios más elementales del estado derecho, sí puede hacerlo y, en muchas ocasiones lo hace. Así, "desalienta" a los ladrones pegándoles y encerrándolos hasta que abandonan el barrio.

Esconde a los travestis de la mirada pública obligándolos a trabajar por un canon en hoteles y apartamentos cerrados. Controla a los pasadores de droga para que, por un canon también, no hagan una exhibición ostentosa de su actividad en plazas o lugares públicos, etc. Privatiza la seguridad en beneficio propio y, profundiza entonces el proceso de "des-estatalidad" que caracteriza a tantas agencias del estado.

Pero, dirá el lector a esta altura de la disertación: ¿y la cuestión de la violencia dónde está?.

Es cierto. Se trata de una violencia sorda, cotidiana, poco espectacular, cuyos resortes son secretos, sus tácticas antiguas, su reproducción ilimitada. Por el centro de Buenos Aires se

puede caminar relativamente tranquilo por las noches, si se tiene más de treinta años, se es bastante blanco y se viste prolijamente, situación que en una ciudad de clase media es bastante común. Si no se reúnen esos rasgos, la posibilidad de ser indagado por una patrulla policial, revisado y, eventualmente detenido y alojado en una comisaría es muy alta, aunque previsible. Forma parte del orden autoritario cotidiano La "criminalidad" urbana está en manos de la policía. Es el estado policial.

### **Segunda tesis. Del "estado" terrorista.**

La segunda tesis se llamaba del estado terrorista. La violencia que analizamos en esta segunda tesis comparte las características fundamentales de la anterior, es más, fue una prolongación monstruosa de aquella. El proceso de terror comenzó en Argentina antes del golpe militar de marzo de 1976. Entre el 1 de julio de 1974 y el 30 de junio de 1975 fueron denunciadas la muertes por secuestro y fusilamiento de 507 personas - dirigentes sindicales, estudiantes, profesores universitarios, dirigentes barriales-. La mayoría de ellas en manos de la Alianza Anticomunista Argentina (AAA), organización terrorista integrada por policías, militares, sindicalistas de ultraderecha, nacionalistas ultramontanos promovida por el entonces Ministro del Interior del gobierno de Isabel Martínez, el ex-cabo de la policía bonaerense José López Rega. Las noticias de los diarios, por aquel entonces, acostumbraban a narrar: "La policía de la provincia halló los restos de un hombre joven totalmente mutilado en los suburbios de La Plata. De acuerdo con las pericias policiales el occiso fue ultimado a tiros y posteriormente su cadáver volado con una carga de trotyl" (La Opinión, 15-1-76) ó "El cadáver de un hombre de unos 26 años fue hallado ayer en un camino vecinal de Pergamino. La víctima presentaba los ojos cubiertos con cinta adhesiva y tenía anudado al cuello unacorbata y toallas. Su deceso se debió a numerosos impactos de bala" (La Opinión, 18-3-76)Mientras el terror de 1974/75 se exhibía espectacularmente en



los periódicos y se veía en las calles, el terror iniciado por la dictadura militar se desarrolló detrás del escenario público. La implementación de la Doctrina de la Seguridad Nacional fue sorda, cotidiana y poco espectacular. Sus formas fueron la desaparición de personas, cuyo antecedente fue la práctica policial del ocultamiento de cadáveres; los falsos enfrentamientos y la aplicación de la "ley de fuga", y, finalmente, la sustracción de identidad de niños nacidos en cautiverio, cuyo antecedente no es una práctica policial, en este caso, sino una práctica judicial: desde muy antiguo ha sido aceptado que funcionarios judiciales entreguen en adopción, a familias pudientes, niños de las clases pobres que son sustraídos mediante robo o pago en especies o dinero.

Los diarios de la época solo daban "el parte de guerra" relacionado con los éxitos militares. Noticias de la crónica política y policial narrados en la vieja retórica del orden reestablecido: "Un tiroteo registrado en la madrugada de ayer en Gregorio de Laferrere dejó un saldo de tres subversivos muertos. En el lugar del hecho se encontraron armas y otros elementos. No se informó la identidad de las víctimas" ó "Durante el año en curso se logró asestar un duro golpe a las bandas de delincuentes subversivos que operan en la subzona, desarticulando la organización de las mismas mediante la detención de la mayor parte de sus integrantes. Subzona Militar 15 – Mar del Plata" (La Opinión, 27-11-76)

La vida cotidiana de la época también daba cuenta del reestablecimiento del orden: los niños varones de las escuelas primarias no podían entrar a clase si no tenían el pelo debidamente corto, y la niñas si no lo llevaban convenientemente atado. Los directores más progresistas argüían que era una medida de higiene, antes que una orden militar.

La metáfora organicista - higienista encontraba perfecta encarnadura en la potencial "infección" del mal subversivo hallable en todos los "tejidos sociales" (O'Donnell, G.: 1987:15)

Es cuantiosa la literatura acerca de los efectos de la dictadura sobre la sociedad argentina y no me extenderé sobre ello (O'Donnell: ob.cit y 1998; Villareal, J.: 1987; Landi, O.:1988, entre otros). Baste decir que la experiencia del ejercicio de la violencia en manos de un Estado terrorista es, posiblemente, una de las experiencias más definitorias para la estructuración de una sociedad fragmentada y autoritaria.

Quisiéramos haber demostrado que permitir a las policías detener personas sin los adecuados controles, no es un problema menor. O, que, en todo caso, sobre estos problemas menores y de compleja estructura, se arma buena parte de nuestra vida cotidiana. La mayoría de nosotros - los intelectuales, digo - desconocemos qué han sido exactamente los edictos de policía, o que es la detención por establecimiento de identidad; qué derechos asisten a los jóvenes si son detenidos, o, lo que es más grave aún, cuán operativos son estos derechos. Hasta la muerte del Bulacio muy pocos sabían que era el memorandum 40 y, seguramente, pocos lo recuerdan hoy. Los intelectuales latinoamericanos estamos acostumbrados a vivir en la maraña de decretos, órdenes del día, memorandas y demás secretos que el Estado guarda. Es más, muy pocos estamos dispuestos a “investigar” a las instituciones policiales –como quien investiga la escuela y la educación; la pobreza o los wichi salteños -, muy pocos estamos dispuestos a saber realmente que hay ahí adentro. Pero, si no lo hacemos, la seguridad continuará siendo del tradicional tema de las derechas. Entonces, ¿porqué no creer que comenzar a tirar del hilo de la madeja pueda contribuir a desanudar algunas de las polvorientas marañas que nos tienen atrapados?

## **EL CRECIMIENTO DE LA VIOLENCIA URBANA EN LA ARGENTINA DE LOS 90.**

Hoy gran parte de los argentinos viven con el temor de ser víctimas de un delito. ¿Los datos existentes muestran un aumento de la criminalidad tal que justifiquen la honda preocupación social? ¿O no será que en ese miedo se cristalizan incertidumbres que, más allá de la amenaza de la violencia, surgen de la generalizada vulnerabilidad económico-social? El desasosiego frente a la violencia, al no diferenciarse de otras fuentes de inquietud estaría, entonces, magnificado. Si tal fuera el caso, la amplificación del miedo, encarnado en el temor a la victimización, podría llevar a construir el "problema del delito en la Argentina" y a proponer soluciones de manera apresurada. Error que surge al acoplarse dos problemas diferentes: uno, la sensación de inseguridad en la población y el otro, la criminalidad propiamente dicha. Tal confusión lleva a que los responsables políticos propongan medidas más dirigidas a tranquilizar a la población que a enfrentar un problema cuyas características y magnitud aún no conocen con precisión.

Como esto sucede simultáneamente con el aumento del desempleo y de la pobreza, la intensidad de la inseguridad colectiva puede presionar hacia una redefinición riesgosa de la cuestión social: del énfasis en la protección a los van quedando en los márgenes de la sociedad al desvelo por "defender" a la sociedad de la supuesta amenaza que ellos representan. La consecuencia de este proceso es que se ha ido construyendo en el espacio público una "cuestión criminal" que todavía no ha sido investigada ni definida en su alcance y contornos. La pregunta por el delito ha sido históricamente conflictiva, puesto que encierra cuestiones ideológicas centrales a la vida en sociedad. Las ideas preexistentes sobre las normas y el orden social, sobre la transgresión y el castigo, sobre la justicia y la

libertad tienen la construcción del problema y, por ende, la búsqueda de soluciones. Por esta razón, conocer con precisión lo que está sucediendo en el mundo del delito, quienes son sus actores, el sentido de sus acciones, resulta un elemento clave a la hora de diseñar políticas públicas.

Con la intención de contribuir a precisar los alcances y magnitud del fenómeno delictivo se encaró la investigación cuyos primeros resultados aquí se presentan. La perspectiva adoptada fue la siguiente: el crimen y el delito configuran un fenómeno complejo que es determinado y condicionado por múltiples factores. Su comprensión es indisociable a la de otros hechos que caracterizan a la sociedad argentina de las últimas décadas: el aumento del desempleo y otras formas de precarización laboral, la creciente desigualdad y segregación socio-espacial, el empobrecimiento de sectores tradicionalmente estables y las dificultades crecientes de movilidad social, entre otros. Pero considerar el contexto social de origen no alcanza para explicar el problema, es necesario elucidar el sentido que tales experiencias cobran para los actores.

Desde este abordaje intentamos responder los siguientes interrogantes: ¿Cuáles son los cambios cuantitativos y cualitativos registradas en las acciones delictivas? ¿Quiénes son los protagonistas de estos hechos? ¿Cuál es el sentido que imprimen a sus acciones?

¿Estamos asistiendo a la emergencia de formas anómicas de delito y violencia? Y, si es así, ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo se explica el aparente uso innecesario de la violencia en tales actos?

No hay duda que la definición de un nuevo problema social precisa de nociones acordes al objeto de estudio, de las que todavía carecemos. Por esta razón, en el presente trabajo se utilizan provisoriamente términos tales como "delincuentes", "normas" y "desviación" en su

acepción más corriente, sin desconocer los riesgos que representan su grado de imprecisión y sus fuertes connotaciones prescriptivas.

Intentamos también avanzar en el campo de las políticas públicas, examinando las experiencias internacionales. Nos concentramos en acciones públicas de carácter no represivo, centradas en la prevención y en la integración.

En la investigación se articularon las siguientes metodologías: 1) trabajo de tipo cualitativo con protagonistas de hechos delictivos; 2) Entrevistas a Informantes claves; 3) recolección de datos secundarios y 4) Análisis de políticas públicas existentes en el país y el extranjero. Las entrevistas con los protagonistas de actos ilegales y con los informantes claves fueron realizadas entre enero y septiembre de 1999 en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires. Se realizaron aproximadamente un centenar de entrevistas con casi 60 habitantes de la Ciudad y Provincia de Buenos Aires –en su mayoría menores de 30 años– que habían protagonizado acciones ilegales, en particular contra la propiedad. Elegimos franja de edad con el objetivo de captar las nuevas formas de delito. En efecto, la mayor parte de nuestros entrevistados no poseía una “carrera delictiva” propiamente dicha sino que habían protagonizado acciones ilegales en un período no mayor al año y medio previos al momento de la entrevista.

Nos centramos en hechos en los que real o potencialmente existiera violencia. A los fines de esta investigación, consideramos violencia a la concreción y/o amenaza contra la integridad física de personas. Hay entonces casos de homicidio o tentativa del mismo, así como víctimas con heridas de distinta gravedad. Se excluyeron infracciones tales como posesión de drogas ilegales para consumo personal, carterismo y otros hechos en los que la violencia –tal como se la ha definido– estuviera excluida. Se descartaron casos de violencia

sin objetivos de dolo, como la violación, los crímenes pasionales y las diversas manifestaciones de violencia familiar.

En segundo lugar, se realizaron alrededor de 30 entrevistas a informantes claves. Se trató de autoridades nacionales, provinciales y municipales vinculados al tema, jueces, abogados penalistas, trabajadores sociales, personal de Institutos de Menores, psicólogos, periodistas, policías, líderes barriales, docentes y padres de jóvenes en conflicto con la ley.

En tercer lugar, se examinaron las distintas fuentes de datos estadísticos existentes sobre el tema, tanto de carácter público como privado. Por último, se consultó la documentación sobre experiencias de programas no represivos implementados en otros países.

El presente artículo se divide en 3 partes. En la primera se examinan los datos sobre el panorama actual de delito en el país con el objetivo de elaborar un primer diagnóstico del alcance del problema. En la segunda parte se presentan las características principales que surgen del trabajo de campo. Por último, se ofrece al lector un panorama de los distintos abordajes del problema que se realizan en Argentina y en otras partes del mundo.

Sabiendo de los riesgos que implica presentar tan variados temas en el marco restringido de un artículo, optamos por ese tipo de presentación a fin de proponer líneas de trabajo que en el futuro deberán ser profundizados. Por ende, las próximas páginas deben considerarse como los resultados preliminares de una investigación en curso de mayor alcance.

### **Los datos del problema**

Uno de los requisitos para conocer la situación delictiva que hoy enfrenta el país es contar con estadísticas que nos informen sobre el tipo de delitos cometidos, su magnitud y evolución, las características de las personas que cometen estos delitos así como las de las

víctimas, las eventuales diferencias por zonas, etc. Con estos datos no sólo es posible diseñar un mapa del delito actual, herramienta clave a la hora de diseñar una política de seguridad, sino también poder conocer los posibles cambios en el tipo de crímenes y de sus protagonistas con respecto al pasado.

4

Lamentablemente la información que hoy contamos no es suficiente ni rigurosa: sólo hay estadísticas de los delitos que han sido denunciados y, se supone, que si bien los hechos más graves (p.ej donde hay violencia) se denuncian no sucede lo mismo con las ofensas menores<sup>1</sup>. A esto se suma que ninguna institución lleva un seguimiento sistemático de cierta continuidad temporal, que los datos de las distintas fuentes no son comparables entre sí y que hay un déficit en la elaboración de indicadores que permitirían una mejor comprensión del fenómeno.

Aceptando esta limitación y suponiendo que el error es sistemático, se observa que Argentina ha venido registrando un incremento continuó de delitos desde 1980-1994. En este período la tasa de delitos denunciados se ha incrementado en un 150%. Vale la pena observar que en este lapso de tiempo hay períodos de crecimiento más pronunciado como el comprendido entre los años 1980-84, 1988-1989 y el que comienza en 1995. En los últimos 5 años habría aumentado un 65%. En 1994 se cometió un delito cada 55 habitantes y, al ritmo, actual este año habrá un delito cada 34 personas.

Los datos existentes parecieran indicar una asociación entre situación económica y aumento de los delitos. En efecto, a simple vista, se observa que el aumento en la tasa de delincuencia coincide con momentos críticos para la economía como la hiperinflación de fines de la década pasada o el impacto de la crisis mexicana a mediados de los 90.

¿Es posible hacer inferencias sobre la situación económica y los comportamientos delictivos? ¿Incide y si es así, de qué manera el crecimiento del desempleo en este incremento de la violencia? Existen en el caso argentino algunos –pocos– estudios econométricos que intentaron medir esta asociación. ¿Cuales fueron sus conclusiones? En un caso (Pompei 1999), se afirma que la desigualdad en la distribución del ingreso incide más que el desempleo en el incremento de la violencia. Navarro (1997), por el contrario, concluye que es el desempleo factor clave para explicar el aumento de la delincuencia.

Pompei (1999) realiza un análisis econométrico del problema con datos del Gran Buenos Aires desde 1985 a 1997. La tasa de robos y hurtos es considerada la variable 1 Según la interpretación personal de funcionarios de la Dirección Nacional de Política Criminal, sólo se denunciarían un 50% de los delitos cometidos. Sin embargo, no existen aún investigaciones que precisen el nivel de la subdeclaración.

La probabilidad que una persona común tiene de ser víctima de un delito, que es lo que expresa la tasa de delincuencia, en realidad no es un indicador suficientemente sensible de la violencia en un país: habría que incluir otros como la tasa de muertes violentas o de muertes por armas de fuego.

Información aparecida en el diario Clarín (25/7/1999–pag. 32) basada en datos de la Dirección Nacional de Política Criminal dependiente e intenta probar la correlación con las siguientes variables independientes: a) tasa de desempleo, b) población desocupada/población total (en lugar de sobre la PEA), c) desempleo joven, d) coeficiente de Gini (distribución de ingresos), e) ingreso medio. De acuerdo con sus cálculos la tasa de desempleo –proporción de población desocupada sobre la población total –, y la tasa de desempleo joven arrojan niveles despreciables de relación.



Por el contrario, la equidad en la distribución –o mejor dicho la inequidad– medida través del coeficiente de Gini, registra una alta correlación. Algo similar sucede con el ingreso medio, aunque con un nivel de correlación menor. La covariabilidad, entre inequidad y delito lleva al autor a inferir que una mera reducción del desempleo no garantizará la solución de los problema de seguridad. La mejora de los ingresos no acompañada con una mejora en la distribución no repercute en una reducción en las tasas de delincuencia.

Navarro (1997) analiza estadísticas de delitos a nivel agregado y desagregado según provincias. Parte de la hipótesis de la existencia de un significativo componente de cálculo racional en la acción delictiva: las personas cometen delitos porque esperan obtener beneficios superiores a los que obtendrían en actividades legales. Desde esta perspectiva hay incentivos positivos y negativos al delito, el que pasa a ser estudiado como «oferta de delitos». El razonamiento se apoya en la llamada “teoría de la disuasión”: supone que los códigos penales reflejan la función de desutilidad social de los distintos tipos de delitos.

Concluye que «(l)a situación de desempleo implica un menor costo de oportunidad de ingresar a la actividad delictiva, por un lado debido a que los ingresos legales en esa situación son reducidos, y por otro por una cuestión de disponibilidad de tiempo» (pág.27).

Por ende «..el delito se ha ido transformando en una actividad cada vez más rentable. Tanto las condiciones del sistema policial y judicial como las macroeconómicas y sociales han resultado ser significativas en la determinación de la oferta delictiva.” Considera, finalmente, que “las políticas que implican mayor certeza y severidad de las penas, así como las que mejoran las oportunidades en la actividad legal, serán válidas para controlar el crimen »

Más allá del interés que este tipo de enfoques despiertan, desde el punto de vista teórico-metodológico son discutibles. A nivel metodológico, es cuestionable en ambos trabajos la utilización de la existencia de una correlación como sinónimo de causalidad.

Pompei establece una relación entre inequidad en los ingresos y delincuencia pero deja sin respuestas el interrogante de cómo la desigualdad impactaría en los comportamientos individuales de modo de incrementar las tendencias delictivas. Por otra parte, no es ésta una relación universalmente probada. Ejemplos como el de Suiza muestran un coeficiente de Gini elevado y bajas tasas de delincuencia. O, en sentido contrario, en Uruguay donde el coeficiente de Gini es bajo, se registra un aumento importante de la delincuencia<sup>4</sup> (CEPAL 1999). En el trabajo de Navarro, se parte de dos supuestos que son discutibles. El primero es que el crimen está exclusivamente motivado por una elección racional de costo-beneficio. El segundo, es la relación directa entre desempleo y delito sin tener en cuenta ningún tipo de mediación.

Pero ¿es válido el supuesto de que estamos frente a actores que realizan cálculos racionales antes de encarar cada acción? O, por el contrario, ¿estamos en presencia de protagonistas cuyo comportamiento no puede ser comprendido bajo este marco de análisis?

Esta es una pregunta clave en nuestra investigación. Nuestro punto de partida es que la asunción de comportamientos racionales es válida para lo que podría llamarse “crimen organizado”, es decir aquellos que están optando por una carrera criminal o que, al menos, realizan una planificación estratégica de sus acciones delictivas. El fenómeno más novedoso –o al menos, el que más preocupa a la opinión pública– no parece ser este tipo de delincuencia, sino el que podría calificarse como nuevas formas de delito y violencia, violencia que podríamos calificar de anómica, marcadas por el repentismo, por la falta de

planificación; cuyos protagonistas no parecen tomar en consideración el riesgo ni la relación costo-beneficio de sus acciones.

La hipótesis de las que partimos es que muchos de los protagonistas de las nuevas formas de delito y crimen en la Argentina no actúan de manera racional en el sentido tradicional. Para que un individuo se transforme en un actor racional es preciso contar con una base de socialización exitosa y un estado personal en el que pueda realizar las operaciones básicas que precisa todo cálculo costo-beneficio. La racionalidad del actor no es un don innato, sino una propiedad adquirida a poner en juego en ciertas acciones pero no en todas. Hasta no contar con las evidencias empíricas necesarias, se debería dejar en suspenso la presuposición de que los actores de las nuevas formas de delito y violencia actúen conforme a las reglas básicas del actor racional.

¿Por qué tanto énfasis en el tipo de racionalidad (o de irracionalidad) que guían a los actores? Porque no sólo es una cuestión básica no sólo para comprender la naturaleza del fenómeno delictivo sino porque constituye un dato esencial a la hora de establecer la. El Panorama Social para América Latina 1999 de CEPAL señala un considerable aumento de la tasa de homicidios entre la década del 80 y del 90 (de 2.6 a 4.4 homicidios por 100.000 habitantes, mientras que en Argentina, las cifras respectivamente son 3.9 y 4.8, a pesar del aumento del coeficiente de Gini). orientación de las políticas públicas. En efecto, las políticas de disuasión se basan en el supuesto de un actor racional. El axioma de base es que la información sobre el aumento de las penas y/o sobre la posibilidad de ser aprehendido aumentarían el riesgo de cometer una acción delictiva y, por ende, disminuyen la relación costo-beneficio. Pero si, tal como se hipotetiza, se trata de actores que se manejan con lógicas de acción alternativas, el fundamento de las prácticas disuasivas pierde

eficacia. Toda política de seguridad debe, ante todo, saber a ciencia cierta, quiénes son esos individuos y cuál es la lógica intrínseca de sus acciones.

Otra falencia que se deriva de tal caracterización del actor es considerar al delito como una opción «ocupacional» racional frente al desempleo. Se postula entonces una relación directa entre aumento del desempleo y de delitos contra la propiedad. Al hacer esta aseveración no se consideran importantes variables que pueden intervenir, como el poder disuasivo de las barreras normativas internalizadas en la educación, el uso de sustancias, el factor riesgo, la accesibilidad a las armas, a las oportunidades de delito, etc. Se imagina, además, una frontera tajante entre “delincuentes” y el resto de la población. Por el contrario pareciera haber grupos que combinan actividades consideradas ilegales con otras legales, sin que por esto se vayan construyendo grupos separados del resto de la sociedad. Pero tampoco puede analizarse sin más al crimen como una opción «ocupacional» equivalente a las otras; se precisa un abordaje más complejo que tenga en cuenta las diversas causas que juegan en la explicación del aumento de los delitos.

Ahora bien, pese al déficit informativo a que hacíamos alusión en párrafos anteriores, existen algunos datos que confirmarían nuestra posición de que algo ha cambiado en el mundo del delito, que no solo hay un incremento en la cantidad de delitos, sino que estamos en presencia de personas que actúan de manera distinta de aquella del crimen organizado y cuyos protagonistas no se comportan de manera racional sopesando el costo/beneficio de su accionar delictivo.

### **Tipo de delitos**

Las estadísticas existentes señalan tres datos de importancia. El primero es el notable aumento de los delitos contra la propiedad ocurridos entre 1980 y 1995. En ese período este tipo de infracciones creció un 2341% en la provincia de Buenos Aires y explican más del 60% de los actos cometidos. En la ciudad de Buenos Aires, las cifras son similares: entre 1980 y 1996 las ofensas contra la propiedad aumentaron 2.701,3% y constituyen el 64.5% del total de los delitos cometidos<sup>5</sup>. Este dato ya de por sí reviste interés: hay que dar alguna explicación acerca de este vertiginoso aumento. Pero esta información no es suficiente ya que nada nos dice acerca de si estamos o no frente a un nuevo tipo de delito y de delincuentes. Para ello recurrimos a otros datos. Uno de ellos es el aumento de homicidios dolosos ocurridos durante la última década. El otro dato<sup>6</sup> –el más significativo para la hipótesis de que estamos frente a un nuevo tipo de delincuencia– es el aumento de homicidios cometidos en ocasión de otro delito, generalmente robo. Es decir, que el aumento de los delitos contra la propiedad se produce de manera más violenta que lo que sucedía anteriormente. La mayor circulación de armas, que se analiza más adelante, podría corroborar esta suposición.

Tasa de delincuencia (por diez mil habitantes) por año según tipo de delito. Años

1980, 1985, 1990/1996. Ciudad de Buenos Aires.

1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996

TOTAL 83.9 198.9 204.6 142.2 102.7 126.7 211.9 397.6 418.5

Contra las personas

(doloso)

5.5 8.5 8.3 6.4 4.3 5.8 13.2 29.0 47.8

Contra la propiedad 54.5 169.3 169.2 106.4 70.2 88.8 162.1 275.5 270.0

Contra la honestidad 0.8 0.7 0.3 0.2 0.1 0.2 0.4 1.9 2.0

Contra la libertad 1.2 3.1 3.4 3.1 2.1 3.0 7.5 26.3 31.3

Otros 21.9 17.3 23.4 26.1 26.0 68.9 28.7 64.9 67.4

Fuente: Anuario Estadístico de la Ciudad de Buenos Aires, 1998

¿Qué ha sucedido con los homicidios que, por supuesto, es el delito que más aterroriza a la población? Los datos de principios de los 90 y los más actuales permiten Anuario Estadístico de la Ciudad de Buenos Aires, 1998. Señalado por la Dirección Nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia. Los delitos contra la propiedad: comprenden hurto, hurto calificado, robo, robo calificado, estafa, defraudaciones, etc; contra las personas: implican hechos culposos (lesiones y homicidios), como dolosos (homicidio simple, lesiones leves, lesiones graves, disparo de armas de fuego y otros); contra la honestidad: delitos sexuales como violación, estupro, rapto, etc.; contra la libertad: comprenden amenazas y coacciones,

violación de domicilio, privación ilegal de la libertad, etc. Y otros incluye: contra el honor, el estado civil, la seguridad, etc. hipotetizar un punto de inflexión en la tendencia. A comienzos de la década la tasa de homicidio, si bien había sufrido un incremento respecto a una década atrás (del 3.9 al 4.8), todavía estaba muy por debajo de otros países latinoamericanos<sup>8</sup> y de Estados Unidos.

Según este indicador (tasa de muertes por armas de fuego cada cien mil habitantes) nuestro país aún se encuentra muy por debajo de los países (y en especial de las grandes urbes más violentos del mundo. Sin embargo, datos más recientes señalan un dramático acercamiento entre la Argentina y países que presentaban tasas de violencias muy por encima del país. Por ejemplo, en lo que respecta a muertes violentas por arma de fuego, en

1996 Buenos Aires (área metropolitana) alcanzaba una tasa de 12,3 (Kusznir, 1997, pág. 40), muy cercana al valor 13 de ciudades como México D.F y Nueva York (The Economist, 1997, pág. 36). De todos modos, consideramos que sería necesario contar con más datos antes de establecer alguna conclusión terminante sobre la eventual magnitud del aumento de muertes violentas en el país.

### **Las víctimas**

Un análisis de las víctimas por nivel socio económico revela que en el año 1997 el 50% de las víctimas eran de clase baja y sectores con NBI. Sólo el 15% eran de clase alta, medias altas y profesionales independientes 15% y clase media baja 35%<sup>9</sup> ¿Por qué la mayor parte de los delitos recae entre los sectores más carenciados de la población?. Una de las razones podría ser las diferencias crecientes en términos de seguridad en las distintas zonas de las ciudades. Como se analiza más adelante, en estos años se produjo un importante aumento de la seguridad privada custodiando a los barrios residenciales. No sólo la seguridad privada se distribuye inequitativamente en la población argentina, sino que algo similar sucede con la seguridad pública. Según la Encuesta de Desarrollo Social, realizada por la Secretaría de Desarrollo Social de la Nación (1999), el 6.7% de los hogares están ubicados a más de 30 cuadras de una comisaría. Pero mientras esta distancia afecta al 1.9% de los hogares de mayores ingresos (quinto quintil) alcanza al 11.2% de los de menores ingresos (primer quintil). Se agrega así una desventaja más en los barrios más pobres: la inseguridad atenta directamente contra la calidad de vida.

<sup>9</sup> Colombia 89,5; Brasil 19,7, Perú 11,5; Estados Unidos 10,1. Fuente: Banco Mundial cit.

“The Economist, 8 de marzo de 1997”, en Smulovitz, C, 1998.

Datos proporcionados por la Dirección de Política Criminal, Ministerio de Justicia de la Nación, 1999.

### **Los victimarios**

Construir un perfil de los victimarios –edad, nivel socioeconómico, escolaridad alcanzada– es sólo posible a partir de los datos que surgen de las causas penales. Esta información elaborada por el Ministerio de Justicia de la Nación (1999) para la ciudad y la provincia de Buenos Aires, tiene algunas limitaciones. En primer lugar, dado que sólo se toma en cuenta a los encausados, no está representando al conjunto de los delincuentes.

En segundo lugar, la información obtenida es para un solo año y, por lo tanto, no es posible conocer la tendencia. En tercer lugar, en la distribución por edades se tienen en cuenta tres categorías: 16-17 años, 18 a 20 años y 20 años y más. Por lo tanto, es lógico que en esta última categoría se acumulen la mayoría de los casos: el 82% en la provincia de Buenos Aires y el 85% en la Capital mientras que entre los 18 y 20 años se agrupan el 17.8% (provincia de Buenos Aires) y el 14.2% (en la ciudad).

En cuanto a su nacionalidad, el 97% de los sentenciados eran argentinos mientras que en la Ciudad de Buenos Aires, la participación de los extranjeros era un poco mayor: el 13.7% no era argentino. La distribución porcentual según sexo del total de sujetos sentenciados, fue la siguiente: masculino 93.07% y 92.31% en provincia y ciudad respectivamente. De acuerdo con esta misma fuente, en la provincia de Buenos Aires, el 66.25% estaba casado, mientras que el 27.60% se encontraba soltero en el momento de la sentencia. En Capital Federal, se registraba una distribución porcentual similar: 67.22% solteros y 26.92% casados.



De acuerdo con el nivel de instrucción alcanzado, cerca del 90%, tanto en la provincia como en la ciudad de Buenos Aires, solo había cursado estudios primarios, mientras el 6% en la provincia de Buenos Aires y el 7% en la Ciudad tenían estudios secundarios cumplidos. En cuanto a las profesiones de las personas sentenciadas durante 1997, tomando las 11 profesiones en las que se registran el mayor número de casos, se observa que si bien hay una fuerte concentración entre quienes son clasificados como sin profesión, llama la atención el peso de la categoría empleados. Otras categorías ocupacionales que aparecen con frecuencia son las de albañiles, comerciantes, jornaleros, chóferes, etc. De todas maneras dado que las categorías utilizadas no son excluyentes, no es posible hacer demasiadas inferencias.

El estado de las personas en el momento de delinquir señala que en muy pocos casos las personas al realizar estas acciones se encontraban alcoholizados o habían consumido estupefacientes: en más del 90% de los casos se considera que su estado es normal. Estos números pondrían en suspenso la habitual correlación que se hace entre droga y delito.

El último dato que nos interesa señalar es el de la situación judicial del procesado. De acuerdo con la misma fuente, el 73% de los procesados en la provincia no tenían ningún 11 antecedente judicial previo a la causa. La situación es un poco distinto en la Capital donde sólo el 53% no registra antecedentes judiciales. También en Capital la participación de los reincidentes sobre el total de los procesado es mayor. Estas cifras, si bien no pueden tomarse como definitivas, confirmarían la hipótesis de que estamos ante nuevos protagonistas de hechos delictivos.

## **La victimización**

Las encuestas revelan que más del 80% de la población –en el Gran Buenos Aires– se sienten amenazados ya que perciben que pueden ser víctimas de algún delito. Percepción que, si bien no se condice con la experiencia personal, ya que menos de la mitad de la población encuestada fue efectivamente víctima de un delito, es atendible por el incremento en el número de delitos.

En una encuesta realizada en la provincia de Buenos Aires, se mostró que el temor a ser víctima de actos delictivos provoca cambios en los comportamientos, cambios que implican, en muchos casos, privaciones y, por lo tanto, un empeoramiento de su calidad de vida. Así el 58% de los bonaerenses afirma que por miedo deja de concurrir a partir de determinada hora a ciertos lugares a los cuales quisiera ir. Otras privaciones frecuentes entre los encuestados son: dejar de salir de su casa a partir de cierta hora (52%), dejar de salir a la calle con cosas que les gusta (47%), dejar de ir a ciertos lugares aún de día (33%), pagar un servicio de seguridad privada (23%), y unirse con los vecinos para buscar soluciones conjuntas (23%). Incluso, por temor a sufrir violencia, el 6% de los encuestados manifestó haberse mudado a un lugar más seguro (Desarrollo Humano, 1998).

La sensación de inseguridad, además de provocar estos cambios en los comportamientos, se expresa en los reclamos de la gente e incide en la orientación de las políticas públicas. En una encuesta en la que se mide la percepción de la inseguridad el 81%<sup>10</sup> de la población de Capital y del Gran Buenos Aires estuvo de acuerdo con el aumento de las penas en el Código Penal pese a que, paradójicamente, la mayoría cree que la causa de la delincuencia es la pobreza. El temor a ser víctima de un delito no sólo testimonia de la ansiedad en la que vive la población y restringe las interacciones sociales, sino que es un temible predictor de conductas tales como una mayor compra de armas, un apoyo a políticas represivas, etc.

10 Encuesta Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría ( extraído de Smulovitz, C., 1998).

### **Gasto público y privado para la seguridad**

Paralelamente al incremento de los actos delictivos se observa un aumento del gasto en seguridad tanto público como privado. En el presupuesto nacional (Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Servicio Penitenciario) se asignó en 1999 un total de 1.848 millones de pesos que significa un incremento del orden del 10% en los últimos tres años.

Los gastos provinciales pasaron de 2.188 millones de pesos en 1993 a 2.729 en 1997 registrando un incremento del orden del 24.5%. Este aumento no se distribuye de manera homogénea entre todas las provincias: mientras que el promedio nacional es de 83.6,12 hay provincias como La Rioja que gastan el doble (170.9), mientras que la de Buenos Aires está por debajo del promedio (75.6).

En cuanto al gasto privado, las armas registradas por el RENAR (Registro Nacional de Armas) pasaron de 1.100.000 en 1994 a 1.800.000 en 1999 lo cual implica un crecimiento anual del orden del 33%. Mas aún, se estima que un número similar se encontraría en el mercado clandestino (PNUD 1998). Las empresas de seguridad privada así como las de Seguridad electrónica habrían aumentado hasta 10 veces su facturación en los últimos años. Este aumento de la seguridad privada está indicando un problema con la policía: o es una institución que está sobre demandada o no tiene la confianza de la población. Por otra parte, pese al incremento del gasto público y privado, los delitos siguen creciendo. Más aún, se podría afirmar que la tenencia de armas por parte de la población civil incrementa la ola de

violencia ya que se establece una suerte de círculo vicioso: como los delincuentes tienen armas y no hay confianza en la policía, las armas son la protección elegida por la población. Pero si efectivamente estamos frente a un actor que no toma en consideración el riesgo que para él significa cometer un homicidio la posesión de armas por parte de la población puede aumentar la ola de violencia. Igual que en otros sectores de la política pública, el aumento del gasto no es un buen indicador de la aplicación de una política eficiente. Se necesita contar con diagnósticos que permitan conocer mejor las razones del incremento de esta violencia, quienes son los que la cometen, el tipo de delito.

Datos extraídos de Leyes de Presupuestos Años 1997–1998–1999

Datos proporcionados por el Ministerio de Economía Obras y Servicios Públicos de la Nación.

### **Jóvenes protagonistas de acciones ilegales con uso de violencia**

Antes de concentrarse en el análisis del trabajo de campo realizado, en este punto se presentan hallazgos de investigaciones realizadas en otros países sobre dos temas centrales en el debate. Se trata de la relación entre delito con pobreza y desempleo por un lado y de delito y droga por el otro. No se presentan estos ejes con el fin de proponer una extrapolación directa a nuestro país, pues las diferencias respecto a la historia, cultura, estructura social y políticas públicas moldean escenarios nacionales particulares. Pero dado que, de un modo u otro, estos temas aparecen en el debate local y muchas veces parecieran llegarse a consensos literalmente opuestos a las evidencias acumuladas internacionalmente, es importante rescatar la experiencia al respecto.

## Delito y pobreza–desempleo

A pesar de que desempleo y delitos contra la propiedad aparezcan comúnmente asociados en la opinión pública, los trabajos científicos no se ha puesto de acuerdo sobre la validez de tal presuposición, evidenciando resultados divergentes según el período, región, país y fuente consideradas (Gillespie 1978, Freeman 1983). Los datos agregados mostraron durante décadas una cierta *correlación* entre el incremento del desempleo y del delito, pero a fines de los 80 Chiricos (1987), luego de una exhaustiva revisión de la evidencia empírica, demostró que tal relación positiva era casi insignificante. Esto llevó a que, según el autor, a mediados de los 80 se generara un “consenso de duda” sobre la real existencia de una relación consistente entre desempleo y crimen que todavía perdura.

Con todo, el mayor problema sobreviene al pasar del nivel agregado al individual, puesto que la eventual existencia de una correlación general no significa que sean los mismos desempleados los que delinquen. Para esclarecer la relación entre los fenómenos el interrogante es *cómo* el desempleo originaría mayor criminalidad. En efecto, cuando se trata de explicar el aumento de la pobreza a partir del desempleo, es la disminución de los ingresos el lazo explicativo; pero al intentar comprender las causas del delito, ¿cuáles son específicamente sus vínculos?

En principio, hay que evitar la «falacia ecológica», es decir, la extrapolación de correlaciones válidas en un nivel general para utilizarlas como explicación de hechos individuales. De hecho, muchas investigaciones muestran que los victimarios tienden a ser jóvenes que aún no han entrado al mercado de trabajo. Pareciera ser que el debilitamiento del capital social local por causa del desempleo, no sólo restringe el acceso a

oportunidades, sino que también deteriora los dispositivos de generación y mantenimiento de normas sociales, favoreciendo el fortalecimiento de normas alternativas que contribuyen al desarrollo de actividades ilegales. El consenso actual es que la privación económica conjugada con otros problemas locales coadyudaría al desarrollo de un medio social en el que se produce el aumento del crimen; sin que la experiencia individual de privación económica pueda ser considerada la única variable explicativa del delito.

Así lo ilustra el trabajo de M. Sullivan (1989) en tres complejos habitacionales de vivienda social (*Projects*) en la ciudad de New York, uno habitado por blancos, el otro por hispanos y el tercero por afro-americanos. Si en los tres la privación económica es similar, el capital social del conjunto, —el «capital comunitario»— es diferente. Los blancos son quienes más contactos tienen con el mundo del trabajo, a partir de parientes, amigos y conocidos, lo que facilita la inserción laboral de los jóvenes. Los hogares hispanos y afro-americanos poseen un capital social menor, lo que dificulta la inserción laboral juvenil. No obstante, Sullivan no establece una relación directa entre falta de oportunidades y crimen. Enfatiza que ni la privación económica, ni la necesidad *per se* aparecen motivando la iniciación al delito. La declinación económica genera de modo indirecto condiciones de debilitamiento familiar y de pérdida de control comunitario, aumentando las probabilidades de la implicancia de los jóvenes en delitos.

En la compleja relación que aquí nos ocupa, la edad interviene como variable central, en particular en la conformación incipiente de “espirales delictivas”. Es el caso de los que habiendo cometido algún delito menor en una edad temprana, experimentan luego dificultades de inserción laboral. En tales casos, es más probable que, faltos de oportunidades, continúen delinquiriendo durante el resto de su adolescencia. Y si continúan sufriendo el desempleo en el comienzo de su vida adulta, es probable que son los que más

frecuentemente encaren una verdadera "carrera delictiva", ya entonces con menores posibilidades de reinserción (Farrington *et al.* 1986). En contraposición, tal tipo de retroalimentación entre desempleo y delincuencia es menos habitual en los que pierden sus puestos cuando ya están establemente insertos en el mercado de trabajo. El rol socializador del trabajo es un potente inhibidor a la realización de actividades delictivas, aún en situaciones de profunda necesidad.

En suma, la evidencia empírica muestra que la existencia de una correlación entre desempleo y delincuencia se halla en pleno debate, estudiándose alternativas posiblemente más fecundas, como la que existiría entre delincuencia y desigualdad social (Hagan y Peterson 1995). De todos modos, aún puede decirse que, a nivel de los datos agregados, el desempleo tiene cierta influencia en las causas de la delincuencia juvenil y crimen adulto. Pero también, al nivel individual, la delincuencia juvenil puede favorecer el desempleo adulto y posterior recaída en actividades delictivas.

### **Drogas y especialización del delito**

Durante décadas los especialistas han discutido, sin ponerse de acuerdo, sobre la relación entre droga y crimen. Hay un segundo debate articulado a lo anterior: sobre la especialización entre los contraventores, es decir, si hay una especialización entre los autores de delitos o una tendencia a una amplia gama de actividades delictivas.

¿Cómo se establece el vínculo entre ambos interrogantes? La teoría económica de la droga supone que las necesidades financieras creadas por la adicción lleva a la realización de delitos contra la propiedad para poder solventar el consumo. Postula una relación linear, causal entre droga y crimen. Sin embargo, los estudios sobre la materia no son

concluyentes. Si hay datos sobre la *correlación* entre droga y criminalidad, no se está tan seguro que esta correlación sea causal. Como afirma uno de los especialistas mundiales sobre el tema, J. Fagan (1990): “el peso de la evidencia sugiere que el uso de sustancia provee un provocativo contexto para la violencia, pero hay limitadas evidencias que el alcohol o las drogas directamente causen violencia.” Es decir, los trabajos más rigurosos sobre el tema descartan una relación causal directa entre drogas y violencia. Parten de la constatación de que la mayoría del consumo de drogas no genera violencia, por lo cual el peso explicativo no puede sino ser limitado.

En este punto es que se articula el debate sobre la especialización. Hay quienes afirman que la implicación en las llamadas «conductas desviantes», como la drogadicción y el crimen, son de carácter general y no especializadas: los responsables de delitos tienden a cometer una amplia gama de hecho y no se limitan a una serie restringida de los mismos.

Por ende, no es que primero se vuelvan adictos y en segundo lugar se dediquen al crimen para financiar la adicción, sino que ambos aparecen como fenómenos no ligados causalmente, sino que responden, a lo sumo, a una pauta común de ruptura de normas que *antecede* a ambos hechos. Si tales presuposiciones son correctas, las políticas que tratan de disminuir la criminalidad mediante el control de la droga, –políticas de alto costo económico y humano–, se basan en ideas erróneas.

Se trata de un tema central para nuestro país. La opinión pública tiende a establecer una relación causal entre ambos hechos. Muchas políticas de seguridad se basan en el control de la droga como base de la lucha contra el crimen. Como se vio en el capítulo anterior, datos del Ministerio de Justicia de la Nación (1999) desmienten la existencia de tal correlación. Así, un diagnóstico erróneo estaría dando lugar a propuestas políticas equivocadas, políticas que insumen un alto costo humano y económico. Urge entonces dejar los



prejuicios de lado y considerar la relación que realmente existe en la Argentina entre ambas cuestiones.

En las páginas siguientes se exponen los resultados del trabajo de campo realizado entre enero y septiembre de 1999. Este consistió en entrevistas con jóvenes de entre 14 a 25 años que habían realizado distintos actos considerados ilegales. Se incluyeron aquellos donde haya habido uso de violencia: en particular robo a mano armada ya sea en la vía pública, en comercios o domicilios particulares. En algunos casos existió violencia, con heridos o muertos y en otros no se había llegado al uso de las armas. También se incluyeron casos de violación y privación ilegítima de la libertad, pero en el contexto de acciones con objetivos de robo. No fue fácil limitar el tipo de casos a considerar, pero dado el carácter exploratorio del trabajo se prefirió incluir una amplia gama de los mismos, sin desconocer la existencia de grandes diferencias entre los tipos de actos.

Gran parte de los entrevistados estaban internados en Institutos de Menores o en otros centros de detención para adolescentes en conflictos con la ley. Los menos estaban en libertad ya sean por haber cumplido sus penas, hallarse en regímenes de libertad asistida o, simplemente, por no haber sido aprehendidos. Para poder acceder a ellos se contó con la colaboración de una veintena de personas, entre contactos institucionales (trabajadores sociales, psicólogos, guardianes y docentes), también hubo contactos con personas que mantenían un vínculo no profesional con el tipo de jóvenes que nos interesaba.

En las próximas páginas intentaremos describir el accionar de estos jóvenes. Luego de presentar un perfil sociodemográfico de los entrevistados, se dedica una parte de este capítulo a tres interrogantes. El primero, acerca de lo que sucede con el marco institucional de la familia, la escuela y la comunidad local. En segundo lugar, la reconstrucción, desde el

punto de vista de los actores, del sentido y las razones de sus actos. Por último, nos dedicamos al tema más inquietante: el uso innecesario de la violencia en hechos delictivos. Al ser un primer trabajo sobre el tema las consideraciones presentadas son de carácter general. Sin dudas será necesario profundizar en trabajos posteriores cada una de las dimensiones de análisis presentadas así como comprender su interrelación. También se deja para presentaciones futuras un análisis más detallado del trabajo de campo y de las diferencias existentes entre los distintos entrevistados.

### **Perfil de los entrevistados**

¿Quiénes fueron los jóvenes entrevistados? Sobre 55 casos, poseemos datos suficientes de 43: 36 hombres y 7 mujeres; 7 tienen entre 13 y 16 años, 17 entre 17 y 21 entre 22 y 30 y el resto por encima de 31. Es decir, el 55% son menores de 21 años. Son solteros 35, 4 casados y 4 separados y 7 tienen hijos. Si se tiene en cuenta el nivel de escolaridad alcanzado, 12 tienen primaria incompleta, 15 primaria completa, 12 secundaria incompleta (3 de ellos en curso), 1 secundaria completa. Es significativo que el 30% tenga primaria incompleta, pues la cobertura de la primaria es prácticamente universal en todo el país y aún en los sectores sociales más desfavorecidos.

Se trata de jóvenes nacidos mayoritariamente en Buenos Aires: 24 casos fueron en el conurbano bonaerense, 7 en la Capital Federal. Sólo 3 proviene del interior del país y 2 fuera de él. En cuanto a la composición familiar, poseemos datos sobre 39 casos. De estos, 9 viven con ambos padres, 5 con la madre y una pareja que no es el padre, 3 con su padre sin su madre, 13 con la madre sola y los 9 restantes en hogares con otro tipo de arreglo familiar (p.ej. hermanos, en pareja, con tíos, abuelos, etc.). Respecto a los ingresos totales

de sus hogares (excluyendo los de los jóvenes), de los 24 hogares de los que poseemos datos, 8 se hallaban debajo de la línea de pobreza, mientras que 16 por encima de la misma (se tomó como medida \$ 150 per capita).

La mayoría de los entrevistados ha trabajado alguna vez, tanto antes como una vez comenzado a realizar actividades ilegales. Al momento de la entrevista, sobre 36 casos, 11 ejercían alguna actividad. No se trata de un dato significativo, puesto que la mayoría se hallaba internado o bajo tutela legal, lo que dificultaba una eventual inserción laboral. De todos modos, es central comprender que el mundo del trabajo no les es ajeno, no se trata de una población dedicada a acciones ilegales a tiempo completo, sino que combinan —en un mismo momento o según el período— actividades consideradas ilegales con las legales.

¿Cuáles son o fueron sus ocupaciones? Una amplia gama de actividades poco calificadas, como albañil, cadete, empleados de pequeños comercios, fletero, niñera, trabajador de limpieza, mensajero, lavador de autos; lo habitual en jóvenes de baja calificación. Pero lo sorprendente es lo que ha sucedido con sus ingresos. Se compararon los ingresos promedios de las 3 últimas ocupaciones, en los 11 casos que los hubo: \$ 400 en el primero, \$ 301 en el segundo y \$ 299 en el tercero. La evolución descendente de las remuneraciones se contrapone con el habitual aumento paulatino que implica una carrera laboral. También la estabilidad de las ocupaciones fue disminuyendo: en la primera, la duración promedio fue de 20 meses, mientras que las segundas y terceras ocupaciones la misma fue, en promedio, 10 meses.

En resumen, nuestros entrevistados son jóvenes de sectores populares provenientes tanto de hogares pobres como no pobres. Es llamativa la altísima incidencia de educación primaria incompleta, un número de familias no intactas que podría ser más alta que la media así como trayectorias laborales de signo descendente en relación con los ingresos.

## Los marcos integradores

Al hablar de déficits de los marcos integradores nos referimos a algunos aspectos de la experiencia actual de estos jóvenes en sus familias, escuelas y en la comunidad barrial así como en relación con los grupos de pares.

### La familia

Cuando un joven comete un delito, la mirada pública se posa inmediatamente en su familia buscando en ella razones de su accionar. Imágenes de familias desestructuradas, madres solteras o abandonadas, en suma de alguna conflictividad interna, se repiten una y otra vez. Ahora bien ¿cuán hay de cierto en todo esto y cuánto es producto de una "ideología familista" que, ante la necesidad de hallar una explicación, establece demasiado rápidamente una relación causal entre delito y "problemas familiares"? Y, aun si tal lazo causal existiere, faltaría establecer *como* la desestructuración familiar genera o refuerza tendencias pre-existentes en los jóvenes.

Dado el gran peso explicativo que la opinión pública local tiende a otorgarle a la familia, es necesario examinar cuidadosamente las evidencias acumuladas sobre el tema.

Ante todo, es evidente que la influencia de la ruptura familiar no puede sino ser limitada; al fin de cuentas, la gran mayoría de los hijos de familias no intactas no realizan actos contra la ley. M. Free (1991), al revisar las experiencias acumuladas, concluye que no existen evidencias suficientemente para postular taxativamente una relación positiva entre desestructuración familiar y delincuencia. El peso del componente familiar varía según el

tipo de ruptura (divorcio vs. muerte), edad y género de los hijos, nivel socioeconómico, raza y, sobre todo, tipo de crimen.

Existen corrientes teórico-metodológicas críticas hacia el acento puesto en tal relación.

Una primer limitación metodológica reside en que, al tratarse por lo general de estudios comparativos y no longitudinales, es difícil aislar el efecto disruptivo de la desestructuración familiar. Para hacerlo sería necesario el seguimiento de una cohorte antes y después de la ruptura familiar. Hay también estudios norteamericanos que cuestionan la confiabilidad de los datos usados para establecer el lazo causal, dado que los hijos de familias no intactas son aprehendidos por la policía más frecuentemente que los que provienen de hogares intactos (Rankin 1983).

A pesar de los reparos presentados, es innegable que la mayor parte de las investigaciones muestran alguna correlación entre familias no intactas y acciones ilegales.

De lo que se trata es de comprender cuál es la eventual relación causal, a fin de no confundir correlación con causalidad, ya que lo primero indica una concomitancia de variables, sin por ello autorizarnos a establecer algún lazo causal entre ambas. Entre los factores que conectan familia no intacta con conductas conflictivas de los hijos, se destaca el déficit de control por la ausencia de un adulto en los hogares monoparentales. Para los teóricos del control social informal, un hogar monoparental está asociado con menos lazos familiares, por ende con menor interdependencia de sus integrantes y débiles acciones disuasivas ante una eventual conducta desviante. Un segundo factor causal se refiere a los déficits de socialización. La familia es el agente básico de internalización de valores societales. La desestructuración familiar temprana dificultaría tal rol, dejando un déficit en la internalización de normas sociales.

Ahora bien, ¿qué sucede en la Argentina? Si la cantidad de evidencias acumuladas en el caso americano no nos permite ser concluyente sobre la relación familia-delincuencia, menos podemos establecer juicios sobre la situación local donde las investigaciones son escasas. Por lo tanto, lo que establecemos a continuación son sólo una serie de consideraciones generales, a partir del trabajo de campo. Una primera característica es que, si bien hay bastante hogares no intactos, los lazos familiares no parecen ser una fuente de grandes conflictos para los jóvenes, al menos de forma manifiesta. Es más, en muchos casos, la relación familiar era –siempre según la evaluación de los jóvenes– muy satisfactoria. Así, en los hogares no intactos, se señalaban vínculos muy significativos, en particular la madre, la abuela o algún hermano mayor. Es con respecto a ellos que sienten culpa por haber delinquido y su figura hace las veces de ejemplo o guía para la reinserción. En algunos casos, hasta combinaban acciones ilegales de envergadura con un puntilloso cuidado de los lazos familiares, como el joven que afirmaba que sólo asaltaba supermercados hasta las 19 horas, porque 19.30 iba sin falta a la parada del colectivo “para esperar a mamá y cargarle las bolsas hasta la casa cuando viene del trabajo.”

Sin embargo, se trate de familias intactas o no, la característica común es una dificultad de control sobre las actividades de los jóvenes, manifestado de dos modos. Uno, el –al menos aparente– poco conocimiento de los padres del accionar de los hijos y lo segundo, el fracaso reiterado de los medios de regulación de sus comportamientos.

En cuanto a lo primero, muchos padres argumentaban no saber del accionar de sus hijos hasta que fueron aprehendidos por la policía. ¿Puede ser realmente así? Es realmente poco creíble, ya sea porque poseían una trayectoria delictiva de cierta data o porque habían manifestado signos de problemas –violencia en la escuela, participación en bandas–, si bien

los padres no tenían porqué considerar necesariamente a tales conductas como predictoras de acciones ilegales.

Lo segundo son problemas de regulación familiar interna. Aun cuando se hubieran detectado problemas, los medios habituales para ejercer el control sobre los hijos no eran eficaces. Sucede como si las familias agotaran sus recursos de regulación interna (hablar con los hijos, penitencias, hasta los castigos físicos) y en un punto se les otorgara tácitamente autonomía sobre sus acciones fuera del ámbito privado. Es un modo de resguardar el equilibrio en un mundo privado cargado de todo tipo de tensiones, mediante la no injerencia paterna en lo que sucede más allá de los límites del hogar. En este punto cobra sentido el aparente desconocimiento: es probable que muchos padres conocieran el accionar de sus hijos pero que, ante la dificultad de establecer algún límite, construyeran un manto de ignorancia sobre los hechos.

Existen otros factores a investigar para elucidar el aparente “déficit normativo” en los hogares. Algunos padres pueden llegar a justificar a sus hijos, negando la responsabilidad de estos o culpando de todo a las “malas juntas. También en ciertos casos, los recursos obtenidos por los chicos mediante sus robos, neutraliza el descontento de los padres y supone un alivio financiero para el hogar (un joven afirma “la primera vez que traje una campera nueva me preguntaron de donde había sacado la plata, la segunda vez ya no preguntaron nada”). Otro tema complejo se refiere a la existencia de un “clima de época” anómico: ¿cuánto de la erosión normativa de los medios legítimos de acceso a objetivos sociales —el estudio y el trabajo— no es secretamente compartido por los padres, lo que los hace menos adversos a las acciones de sus hijos?

## **La escuela**

Al igual que en el caso de la familia, la relación entre escuela y delito también se halla en pleno debate. En el presente, si bien existe consenso acerca de los efectos negativos de la deserción, las investigaciones americanas actuales no encuentran una relación directa entre deserción escolar y delincuencia (Figueira-McDonough 1993). En líneas generales, se considera que la escuela no interviene en la génesis de conductas delictivas, pero su accionar favorece o contrarresta tendencias gestadas al exterior de ella.

La pregunta es, una vez más, sobre *cómo* precisar tal eventual relación. En primer lugar, al igual que la ruptura familiar, la deserción escolar erosiona el capital social de los jóvenes, debilitando su integración y el control normativo sobre ellos. En segundo lugar, la escuela es un agente de internalización de normas sociales, por lo que la deserción provocaría un déficit en la socialización. Por último, una menor permanencia en el sistema educativo disminuye las chances de inserción laboral futura, aumentando así el riesgo de recurrencia a medios ilegales para ganarse la vida.

Ahora bien, las trayectorias educativas de los jóvenes entrevistados están marcadas por fracasos, mala performance intelectual y/o disciplinaria, aunque no necesariamente por la deserción o la expulsión. Un rasgo común en los entrevistados es la escasa importancia que la escuela parece ocupar en sus vidas. Tanto entre los que concurren como entre los que no, la escuela no es un tema que les merece gran reflexión, crítica o preocupación. Si bien, esto no es totalmente novedoso, marca un deterioro respecto a lo que encuentran otras investigaciones con jóvenes de sectores populares. Por ejemplo, J. Auyero (1992) señala en un trabajo realizado a principios de esta década que la escuela, aún desvalorizada, seguía teniendo un lugar importante en sus vidas.

Manifiestan, a lo sumo, una relación totalmente instrumental: el título es necesario para postular a distintos trabajos; todos ellos de muy baja calificación, como repositor en un



supermercado o vendedor en un comercio. La visión instrumental se refuerza porque el diploma es sólo un requisito exigido, sin que los conocimientos que certificaría se consideren necesarios para el desempeño de los puestos en cuestión. Aún los que repitieron varias veces no la consideraban “difícil”, sino que la repitencia sería producto de su desinterés, el recurrente “aburrimiento”.

En cuanto a la situación de las escuelas, los docentes de “colegios difíciles” describen instituciones desbordadas por los problemas cotidianos: la reforma educativa, los bajos salarios y los conflictos de los alumnos “normales”. Nadie está preparado para tratar con adolescentes violentos, no hay personal especial que pueda hacerlo. A su vez, la inclusión de octavo y noveno año genera más problemas al implicar el ingreso de alumnos adolescentes que empiezan a interactuar con los pequeños. Se respira un clima de tensión: chicos provenientes de hogares conflictivos, que expresan su violencia en la escuela, con sus compañeros y hasta con los docentes. Estos últimos se quejan también porque los padres se muestran muy agresivos en su contra.

Tal clima conflictivo lleva a que en muchas escuelas se excedieran límites hasta entonces impensables, como por ejemplo insultar a la maestra, lo que denota el debilitamiento del contexto normativo. Ante tal situación, el cuerpo docente aparece dividido entre dos posiciones encontradas. Están quienes argumentan que hay que separar a esos chicos de la escuela pues atacan a sus compañeros, impiden el desarrollo de las clases y generan un ejemplo negativo al resto (“un adicto produce otro adicto” decía un maestro de 7° grado); posición que es por su parte reforzada por la presión de muchos alumnos y de sus padres. Sin embargo, los pro-expulsión no apelan necesariamente a la metáfora de la “manzana podrida que pudre al resto”, de claro corte autoritario, sino a la carencia de recursos, tiempos y saberes para encarar solos el problema. Esgrimen la necesidad de administrar

recursos y energía escasos pues los casos problemáticos exigen mucho trabajo y atención, a expensas del grueso de los alumnos. La posición opuesta es la de los docentes que, aún reconociendo las dificultades, sigue prefiriendo mejor “mantener a los 23 chicos en la escuela” a toda costa, porque “aunque no aprendan nada” mientras estén allí al menos se aseguran de que estén dentro de un marco institucional. En algunas de estas escuelas pareciera producirse un desplazamiento general de roles: los docentes y directivos concentrando el grueso de su energía en la cuestión disciplinaria, los porteros y administrativos controlando las puertas y los muros para que los chicos no se escapen, los alumnos sobrepasando límites antes inimaginables.

En resumen, pareciera que la escuela no constituye un marco integrador para estos jóvenes: ya sea por haber desertado o por las dificultades existentes cuando permanecen.

Sin duda es necesario trabajar en la escuela para evitar la deserción de los jóvenes más difíciles y, en el caso en que sea imposible retenerlos, brindarles alguna alternativa que evite la pérdida de un marco integrador fundamental.

### **La comunidad local**

¿Qué marco integrador proporciona la comunidad local? Los trabajos sociológicos ponen acento en todas miradas distintas. Habitualmente, para los autores europeos, barrios homogéneamente obreros son un *locus* central de integración, socialización y transmisión de valores de la clase trabajadora, como aparece en R.Hoggart (1970) para Inglaterra y F. Dubet y D. Lapeyronnie (1992) en el caso francés. A los norteamericanos, por su lado, más que la integración, les preocupa el *control social* formal e informal que la comunidad ejerce sobre sus integrantes.

No se trata de acciones mutuamente excluyentes, sino complementarias; en todo caso, al menos la integración social posee un componente de control social formal e informal. Aún así, los presupuestos y conclusiones de cada abordaje difieren entre sí. En primer lugar, respecto de la homogeneidad–heterogeneidad barrial. En Europa Occidental, la fuerza integradora de las barriadas obreras residía en gran medida en su homogeneidad social. F. Dubet y Lapeyronnie (op.cit.) describen a los suburbios *rouges* franceses como un «modo de organización social que resulta de la articulación de una comunidad popular y de una conciencia de clase obrera, en torno a un sistema político municipal. » (1992, p.49).

Estados Unidos aparece como la contracara de esta imagen: no se trata de comunidades obreras integradas, sino de ghettos de *underclass* aquejados de déficits de integración. Allí, la homogeneidad es sinónimo de la segregación socio-espacial de una grupo excluido del *mainstream* americano. La experiencia del *ghetto* contribuiría a la emergencia de conductas ilegales en los jóvenes por tres vías: la menor calidad de los servicios públicos ofrecidos, en particular la educación; la baja exposición a modelos de rol exitosos, reforzando así el descreimiento frente a los medios de movilidad social legítimos, como el trabajo y, por último, por la carencia de contactos con sectores mejor posicionados que posibiliten el acceso a oportunidades de movilidad social.

Ahora bien, ¿Cuál fue el rol integrador de los barrios populares en el conurbano bonaerense? El Gran Buenos Aires se fue poblando gracias a políticas urbanas implícitas que permitieron el acceso masivo de las clases populares al terreno y a la casa propia, caso singular en América Latina (Prévot–Schapira 1995). A partir de 1940 se ha ido formando en el conurbano un denso entramado institucional, pero focalizado en problemas de hábitat. A diferencia de USA, en el caso argentino, la cuestión racial estaba ausente y, a diferencia del caso francés, la cuestión obrera era patrimonio de los poderosos sindicatos, organizados

en los lugares de trabajos; *grosso modo*, las acciones barriales y sindicales han seguido dos caminos paralelos. El barrio no parece haber sido entonces, como en Europa, un escenario central de la integración obrera, pero sin duda contribuyó a la conformación de una identidad obrera –o más bien “trabajadora”– reforzando lo que acontecía en el mundo laboral.

Hoy, cuando el mundo del trabajo pierde su rol integrador de antaño, la comunidad local tampoco puede suplir parte de este lugar vacante. Los jóvenes entrevistados hablan de barrios caracterizados por un anonimato –más construido que real– donde la gente “hace como si no se conociera”, apenas se saluda y “nadie se mete con nadie”. El anonimato ficticio es una forma de construcción de distancias internas a fin de asegurar una convivencia pacífica.

Ellos viven en la precarización institucional de su hábitat. No es que no haya ningún tipo de trama asociativa en los barrios, sino que cuando ésta existe ellos no participan de ellas; en parte excluidos por ser los “malos” del barrio, los “perdidos” y en parte por el deseo propio de los jóvenes de crear sus propios lugares. Aunque tampoco tienen sus espacios: no hay ni instituciones ni lugares físicos que los jóvenes consideren como suyos. Sólo les queda la calle, éste es su lugar de encuentro. Pero a más allá de la trama institucional, la relación intergeneracional en los barrios populares parece estar en problemas. En la cultura obrera siempre existió un margen de tolerancia para las conductas de los adolescentes: las peleas entre barras, una borrachera, eran parte del pasaje de la adolescencia a la adultez (Hoggart op. cit.). Hoy no sólo la idea de pasaje entra en crisis puesto que el punto de llegada –la cultura obrera– se ha debilitado, sino que los mayores ven a estos jóvenes no sólo muy diferentes sino hasta embarcados en acciones –cuya imagen más cruda es el consumo de drogas– que les resultan imposibles de aceptar.

En síntesis, se adopte tanto una mirada más puesta en la integración como en el control social informal, al igual que el resto de los marcos institucionales, la comunidad local no es ajena a la precarización actual. En el contexto de la crisis de la familia, la escuela y, sobre todo, del mundo del trabajo, ella tampoco puede brindar marcos integradores para los jóvenes.

### **Los grupos de pares**

La influencia de los grupos de pares en la realización de actos ilegales es otro tema centrales de la sociología del crimen anglosajona, lo cual es comprensible dado que la mayoría de tales acciones se cometen en grupo (p.ej. Sanchez Jankowski 1991). En general, los estudios han estado tan centrados en los *gangs* y bandas de filiación étnica, que ha llevado a suponer la existencia de una subcultura delincuente ligado a minorías estigmatizadas. Sin embargo, otros enfoques han mantenido el interés por el grupo de pares, sin por ello presuponer la existencia de una subcultura particular. Tales estudios sirvieron para desmentir la presuposición de una subcultura específica de ciertas minorías, ya que verifican comportamientos similares en distintas poblaciones, no perteneciente a ningún grupo minoritario, como en estudios realizados entre población blanca de Londres (ver Hagan y Peterson 1995).

Ahora bien, ¿qué se observa en el caso argentino? Pareciera que los grupos de pares cobran importancia como marcos de inserción para los jóvenes pero sin que se conformen lazos tan fuertes, como los existentes en las bandas o *gangs* descriptas en los trabajos americanos. El caso típico es el de grupos formados en los barrios y no en el interior de instituciones como la escuela o clubes, sin un líder definido y en el que sus integrantes no están unidos, como

en el caso americano, únicamente por lazos fuertes. En los grupos coexisten dos tipos de relaciones: un grupo de referencia general unidos por lazos débiles, con el que sólo comparten códigos, pero no más que eso. A pesar de su fragilidad interna, actúan como grupo de referencia al ser el principal orientador de la acción. Luego existen dúos o tríos de lazos muy fuertes. Sólo con ellos se comparten códigos de amistad tradicionales: intimidad y ayuda mutua. Juntos –aunque no exclusivamente con ellos– realizan las acciones ilegales. Con los lazos fuertes se comparten códigos de lealtad: no se registran traiciones, del tipo “buchoneo” cuando son aprehendidos por la policía, lo que sí sucede con los lazos débiles. La referencia al grupo de pares se articula con una visión temporalmente limitada de las conductas criminales, lo que llamamos el etapismo, que se observa a veces no sólo en los jóvenes sino también en sus padres. Se trata de una visión justificadora de las acciones cometidas en tanto “macanas” de la juventud, aún en el caso de delitos graves, como el homicidio. Al naturalizarlas como propias a una edad, ellas cesarán por el mero paso del tiempo “cuando me ponga a trabajar y haga una familia”. Es una forma de desresponsabilización presente y futura, ya que el etapismo permite descartar una posibilidad alternativa: que esas “macanas” de juventud sean los primeros pasos de una carrera criminal en ciernes.

El lugar de los grupos de pares como orientadores de la acción de los jóvenes se ve favorecido por un contexto que muestra signos de creciente segregación intraclase e interclase. En el interior de su misma clase social, van disminuyendo los intercambios cotidianos tanto en sus familias como en sus barrios y escuelas. En dichas instituciones se van delimitando fronteras internas donde, muchas veces con la intención de mantener un equilibrio, se establece una férrea distancia con estos jóvenes. Simultáneamente, la creciente homogeneización social de barrios, escuelas y demás instituciones van reduciendo

sus oportunidades de interacción con otros sectores sociales. Los que concurren a escuelas, lo hacen en las de peor calidad, que son en general las únicas a las que tienen acceso los alumnos de niveles sociales más bajos. Sus barrios se van vaciando de clases medias y, en el caso que haya sectores heterogéneos, las fronteras locales acentúan –a veces de forma muy violenta– la segregación social. Todo parece indicar que se estarían perdiendo los espacios de interacción, los “puentes” entre los grupos sociales. Y tal homogeneización socioespacial, como R. Katzman (1999) ha demostrado en un reciente trabajo sobre Montevideo perjudica, por sobre todo, a los jóvenes de sectores más bajos.

Déficit normativo, segregación social y preeminencia de normas locales son procesos que se retroalimentan. En efecto, las normas que se generan en el grupo de pares precisan para su efectividad de un grupo endogámico, cerrado hacia el exterior. El contacto con otros grupos, que cuestiona la legitimidad de dichas normas, compite con su eficacia. Por ello, las normas locales precisan de cierta “clausura” social, una reducción de los contactos con los grupos que eventualmente puedan cuestionar, competir y, por ende, restar eficacia a los dispositivos locales orientadores de la acción.

En resumen, asistimos a un proceso conformado por tres dinámicas mutuamente reforzadas. En primer lugar, el déficit de los marcos integradores que proponía la familia, escuela y comunidad local. Frente a esto, adquieren más relevancia la influencia de los grupos de pares como orientadores de la acción. Por último, estas normas locales requieren para su eficacia de una segregación inter e intraclase que pareciera estar incrementándose.

### **Lógica y sentido de las acciones**

¿Cómo elucidar el sentido de estas acciones? Para comenzar a desentrañar tal compleja cuestión partimos de la constatación que las demandas de consumo de estos jóvenes son comparables a las de sus pares de clases sociales superiores. Ellos aspiran a ropa de determinadas marcas, zapatillas, dinero para diversión y hasta conocer el interior del país o países extranjeros.

La creciente homogeneidad de las pautas de consumo de los jóvenes urbanos por la influencia de los medios de comunicación y el aumento de la tasa de escolaridad no es un fenómeno exclusivo de la Argentina. Se trata de una generación que, ha diferencia de muchos de sus abuelos y de algunos padres, es esencialmente urbana. Han nacido en Buenos Aires y comparten parámetros de consumo propios de las clases medias. Pero sobre todo, aquello que desean, lo quieren ya. Es una característica típica de la adolescencia, que adquiere una significación particular pues, en el caso que nos ocupa, para obtenerlo deben sin dudas infringir normas legales. Comprender este inmediateismo es central para explicar los delitos contra la propiedad. En efecto, robar aparece como la única forma de acceder a la satisfacción de sus necesidades raudamente. No se roba con la intención de acumular o ahorrar dinero, sino para realizar un gasto en el momento. A veces son para consumos individuales, ropa, viajes, en otros de alcance grupal, como ir a bailar, comprar cerveza y, hasta en un caso, para festejar un cumpleaños.

Inmediateismo y falta de planificación de las acciones están relacionadas. En efecto, al interrogar sobre los robos, en particular sobre los primeros, el repentismo es su característica compartida. Testimonios del estilo “estábamos en la calle, vimos aparece una vieja con un bolso y nos mandamos” muestran la falta de planificación de los hechos. No hay en general un plan previo en lo que concierne a la elección de la víctima y la situación, a un intento de minimizar el riesgo, de no dejar rastros, etc. Pero no deben ser



caracterizados tampoco como meros hechos reactivos o irracionales. Es necesario investigar qué se oculta detrás del repentismo. Si alguien puede “mandarse” a robar de forma aparentemente espontánea es porque las normas internalizadas que debían impedir tales conductas ya habían previamente fallado.

El repentismo es un tema central a la hora de planificar políticas públicas puesto que éste pone en cuestión los presupuestos de la “teoría de la disuasión” en los que se basan propuestas más corrientes sobre el tema en la Argentina. Se supone que el aumento de las penas y de la posibilidad de ser aprehendido al cometer un delito tendría un efecto disuasivo sobre eventuales delincuentes. Cuando éste planifique sus acciones, el mayor costo eventual de la misma (las probabilidades de ser aprehendido y dureza de la pena) lo desaconsejará de tomar tales rumbos. Pero la teoría de la disuasión presupone un actor racional que planifica con anticipación y estratégicamente sus acciones, sopesando los costos y beneficios de las distintas opciones que se le presentan.

Al no haber una planificación explícita, las acciones de los jóvenes entrevistados no se revela guiadas por cálculos de costo–beneficio. No sólo porque carecen de la información necesaria para la realización de tales cálculos, sino sobre todo porque tal tipo de racionalidad económica requiere de un grado y forma de socialización que no es la que estos jóvenes expresan. Sus lógicas de acción, como veremos a continuación, se valen de otros recursos y significados.

### **Las tres lógicas de acción**

Al hablar aquí de “lógicas de acción” hacemos referencia a la racionalidad intrínseca al proceder de los distintos individuos desde el punto de vista de un observador externo

(Dubet 1994). En tanto observadores, es posible reconstruir en los jóvenes entrevistados lógicas de acción que se reiteran en gran parte de los casos: la lógica de la necesidad, del ventajeo y del aguante. Salvo en la primera, en las dos restantes utilizamos denominaciones tomadas de los mismos actores. Las 3 lógicas se refuerzan mutuamente, pues son solidarias entre sí y no se plantean tensiones entre ellas.

En primer lugar, sus acciones están regidas por la lógica de la necesidad. Estos jóvenes no tienen un peso. Juntan las moneditas de 5 y 10 centavos para viajar, para comprar cerveza, marihuana o ir a bailar. Cada centavo tiene para ellos valor, por lo que a la vista de un observador de clase media, sorprende la importancia que le otorgan a “botines” sumamente exigüos. En efecto, obtener 20, 10 o hasta 5 pesos en un robo no es visto como un fracaso, sino que “al menos permite hacer algo.”

El horizonte es el de la falta total de dinero para sus consumos adolescentes. Aun cuando no provengan de hogares pobres, sus demandas están muy relegadas o directamente excluidas de los criterios familiares de asignación de recursos. El estado de necesidad para el mínimo consumo es una experiencia central. Para escapar de él, cualquier recurso puede ser válido: pedir, trabajar, “apretar” a alguien en la calle, robar; según los códigos que comparten, prácticamente cualquier medio es legítimo si permite obtener dinero. Se trata de un tema central a la hora de pensar políticas, pues un requisito clave es resolver este estado de necesidad constante, proveyendo de recursos a los adolescentes.

Sin embargo, si todos los medios son legítimos, es porque la lógica de la necesidad se refuerza con la lógica del ventajeo. Su definición podría ser la siguiente: en toda interacción en la que medie un conflicto de intereses con el otro, se debe “ventajear” al competidor, es decir obtener lo deseado apelando a cualquier medio que esté al alcance. No hay necesariamente códigos de procedimientos definidos en el ventajeo, sino que muchas veces

las acciones se van decidiendo en el transcurso mismo de la interacción. En el enfrentamiento con el otro se va optando por la forma en que se intentará ventajearlo. Así las cosas, un pedido de dinero en la calle sin éxito, puede transformarse en un “apriete” y, si este también fracasa, terminar en un robo. Pero ventajear implica también reflejos, hacer un movimiento antes que el rival, una anticipación sobre la jugada del otro lo que, como veremos más adelante, ayuda a comprender el uso de la violencia en muchas acciones.

La violencia y el enfrentamiento halla su sentido y legitimación por la predominancia de la lógica del aguante. Con su clara connotación viril, con sus reminiscencias del orgullo de la fuerza de los sectores populares, con su intrincada relación con el fútbol, “tener aguante” es un valor central a la hora de hacerse valer en el grupo de pares. Tener aguante: ser capaz de mantener la mirada o la intención ante cualquier oponente; no achicarse frente a alguien de mayor porte y dar batalla –aunque luego se pierda– ante quien sea. Enfrentarse a un adversario que juega mejor en el fútbol, un contrincante más fuerte en una pelea o un grupo de policías fuertemente armados, estas y otras situaciones están legitimadas y valoradas por la lógica del aguante.

### **El mundo laboral**

La plena conciencia de que sus oportunidades laborales se limitan a empleos precarios e inestables se ha adueñado de estos jóvenes. Ven frente a ellos un horizonte de precariedad duradera. Quizás más perjudicial que los bajos ingresos actuales de un eventual empleo, es la dificultad de vislumbrar una carrera laboral signada por algún tipo de ascenso social. Sin disimular la amargura un joven nos decía “¿Qué te parece que puedo esperar? Como

máximo, un laburito de 180 mangos durante 3 meses. Después, nada durante un tiempo. Otro laburito de 180, 200 mangos por un tiempo. Después nada de nuevo...y así siempre.”

Imaginan –en el mejor de los casos– una carrera laboral conformada por una sucesión de puestos de baja calificación y bajos ingresos, todos inestables, interrumpidos por períodos de desempleo. La pérdida de la idea de carrera al interior del mundo laboral, ya los condena de antemano –por tener baja calificación– a los peores lugares del mundo del trabajo. En tal sentido, no hay posibilidad de soñar con ninguna movilidad ascendente; lo único posible es la mera supervivencia.

Tal horizonte tiene una influencia central para estos jóvenes. El pasaje al mundo del trabajo estable marcaba un punto de corte central: de la escuela al trabajo, de la adolescencia a la adultez. Los tiempos cotidianos, los ciclos vitales, las estrategias de distinción al interior de las familias pobres estaban marcados por la inserción laboral estable.

Cuando el trabajo no es más una frontera clara, diferenciadora, toda una red de sentido derivada del empleo, también entra en crisis. Si las oportunidades de trabajo escasean y el mundo del trabajo no se plantea ya como una zona segura, un pasaje definitivo, otras dimensiones de la vida se desdibujan, como por ejemplo la visión de lo legal y lo ilegal. Pero también, las experiencias laborales que han conocido han sido en general muy negativas.

Fueron ayudantes de jardineros que nos le pagaron, limpiaron coches en una agencia de remises “truchos” que jamás le liquidaron el sueldo, etc., lo que contribuye a disminuir su confianza en el mundo laboral.

Una consecuencia es que en la experiencia cotidiana de estos jóvenes lo legal y lo ilegal no constituye una frontera nítida. Ahora bien, ¿estamos acaso afirmando que hay un desconocimiento total de la ley? ¿Están conformando un sistema clasificatorio que invierte

—a su favor— la atribución de lo legal y lo ilegal vigentes en la sociedad? No parece ser el caso. Más bien, en la experiencia cotidiana de estos jóvenes se delinearía una zona gris entre lo legal y lo ilegal en la que se encuentran disponibles una serie de acciones. La elección de una u otra opción sería el resultado de las oportunidades contextuales, relacionadas a la posibilidad de acudir a una u otra para llegar a ciertos objetivos, tampoco estos últimos muy claramente definidos. El “peaje”, el “apriete”, la amenaza, el hurto y el trabajo están dentro de su mundo como opciones legítimas, según las normas locales.

Frente tal legitimidad acotada espacial y temporalmente, no hay casi lugar para el interrogante sobre su legalidad. En todo caso, sólo se vuelve relevante cuando se produce la **tipificación externa** por parte de un actor, en particular la policía. Su accionar impone post-facto la denominación de ilegal. Es el castigo la que determina la ilegalidad de la acción; ilegalidad que no necesariamente “ilegítima” sus acciones. En efecto, la policía puede regular los castigos pero no necesariamente la adjudicación de legitimidad.

La señalada fragilidad interna de los grupos de pares contribuye al desdibujamiento de límites claros entre las acciones. En el mundo del crimen organizado se observan grupos muy cohesionados, que imponen a sus miembros rígidos sistemas normativos, aunque sean opuestos a las normas generales. No es este el caso: la indefinición de las fronteras se observa en las interacciones: a veces cuando “encaran” a alguien el carácter de la acción se va negociando en el transcurso de la misma. En particular, cuando la víctima es conocida, de la reacción del contrincante dependerá si se tratará de un robo violento, un apriete o un pedido amigable para “comprarle remedio a los chicos”. Así las cosas, un pedido puede terminar en un robo con lesiones o, inversamente, un apriete se transforma en un abrazo amigable y en una tipificación de la acción como broma (“te asustaste eh, pensaste que te iba a currar”) y hasta puede concluir en un pedido de perdón.

## **La coerción individualista**

R. Castel (1995) distingue entre el individualismo positivo y el negativo. El primero se refiere al creciente margen de autonomía y libertad que van ganando las personas en lo que A. Giddens llama "sociedades post-tradicionales". El segundo es un individualismo coercitivo: el que sufren aquellos obligados a valerse únicamente por sí mismos debido a un déficit de los marcos de protección materiales y simbólicos. En la posguerra, el Estado de Bienestar, al disminuir los riesgos sociales, permitió acrecentar los grados de libertad individual. Décadas más tarde, la crisis de la sociedad salarial hizo recrudecer un individualismo negativo que afecta hoy a los grupos más vulnerables, cuyo horizonte es la atomización, el aislamiento y la desafiliación.

“Necesitás guita si o si. Buscás trabajo, si trabajo no hay, salís a robar” esta afirmación cándidamente desprovista de cinismo de un joven, resume bien los avatares del individualismo negativo. Estos jóvenes están “condenados a ser individuos”, más específicamente a tomar en sus manos la resolución de todas sus necesidades. Sin posibilidad de apoyo familiar ni institucional, sin marcos colectivos, la coerción al individualismo es significativa. Es sobre aquello que es lo único que tienen, su cuerpo, que recae la total responsabilidad de asegurarse la satisfacción de sus necesidades. La coerción individualista tiene un efecto de aumento de riesgo y de puesta en juego. Porque al hacer recaer exclusivamente en sí mismos la resolución de sus necesidades, obliga a ponerlo en juego en su totalidad. No es la fuerza de trabajo del obrero lo que se mercantiliza, sino un cuerpo que como una totalidad se pone en juego en una acción determinada.

En el terreno de lo público este individualismo coercitivo se expresa en una fuerte despolitización, entendida aquí como la ausencia imaginaria de toda influencia de lo público en su mundo de vida. Así como los padres no pueden casi ayudar, tampoco esbozan ninguna instancia exterior –real o imaginaria– a la que dirigir demandas. No hay nada que esperar de nadie y lo más interesante es que esto no suscita nada, ni siquiera la rabia que F. Dubet (1987) encuentra en el discurso crítico hacia los políticos entre jóvenes similares de los suburbios franceses. Para Dubet, la rabia expresa la revuelta frente a una dominación a la que no se detecta ni principios legitimadores ni un rostro identificable. En los jóvenes entrevistados, no aparecen visibles las marcas de la dominación. No hay ninguna categoría colectiva en la que se incluyan que aparezca como dominada.

La carencia de marcos de inserción pareciera afecta la relación imaginaria con el Estado. Para expresar la queja hacia alguien, para acusarlo de no cumplir con sus obligaciones previamente debe adjudicársele competencia y responsabilidad en el tema.

Pareciera que esto se ha desvanecido, como si la desresponsabilización de alguna instancia externa a sí mismos en su suerte se hubiera naturalizado. Se trata, sin duda, de un cambio producido en los últimos años. Quizás parte se deba a que se trata de la primer generación para la que se han borrado las huellas de un pasado mejor. En efecto, en el trabajo de campo sobre nueva pobreza realizado entre 1992–1994 (Kessler y Minujin 1995, Kessler 1998) aparecía una referencia a la movilidad intergeneracional ascendente de las generaciones pasadas. Para los nuevos pobres, el recuerdo de un pasado mejor hacía las veces de una promesa –quizás incumplida– de un futuro de progreso. Para estos jóvenes esta referencia ya no existe, posiblemente porque sus padres conocen una inserción precaria en el mundo del trabajo. En efecto, el promedio de edad de sus padres no supera los 40

años. Ellos han conocido una inserción profesional signada en su totalidad –o casi– por la precarización e inestabilidad.

En rigor, hay una institución pública que aparece una y otra vez en sus discursos: la policía, la cana, la “*yuta hija de puta*”. Es la amenaza constante, el juego del gato y el ratón por momentos, pero a veces con lazos insospechados, como en los circuitos ilegales de armas. De todos modos, al nivel en el que se encuentran estos jóvenes tampoco hay eventuales negociaciones con la policía. Ellos son el “chiquitaje”, los que muchas veces los adultos utilizan para los actos más expuestos, como carne de cañón, pero también por ser menores y por ende, con menor imputabilidad. La policía no es visualizada como parte del estado, no es que afirmen su autonomía respecto a él, pero el discurso de estos jóvenes no llegan a establecer un lazo con él. La policía es el contrincante principal y frente a quien sienten el temor de “perder” (la vida). Un temor difundido en estos jóvenes es el “bolsazo”, es decir la asfixia por una bolsa de polietileno, lo que en el lenguaje de la represión se llamaba el “submarino seco”.

Al mismo tiempo, en el ocio posindustrial de los sectores populares, hay una fuerte apelación a la rebelión frente a la policía y otras conductas, como puede verse en las letras de canciones de grupos de moda. En el análisis de Semán y Vila (1999) sobre las letras del rock que escuchan estos jóvenes, surge la valoración positiva de la barra del barrio. En su visión, las distintas barras se disputan espacios sociales, pero todas ellas se oponen en conjunto al poder establecido. Aparecen también en sus letras, la deslegitimación del mundo del trabajo, una imagen de la sociedad post-populista en la que serían corrientes el alcohol, la disponibilidad de las armas y el odio a la policía. ¿Cuánto de esto influye en las conductas concretas? No podemos saberlos, pero sin dudas muestra la disponibilidad de estos contenidos en el universo cultural de estos jóvenes.



Pero hay un tema más que marca una diferencia clara con la experiencia de la galère que Dubet describe en los jóvenes franceses. Su mundo está teñido de gris y sus acciones violentas y en general vandálicas son la muestra de una violencia expresiva frente al gris de esos suburbios. Los relatos de estos chicos están también marcados por rupturas, expulsiones, tonos grises en general. Pero lo único realmente excitante de sus relatos es cuando describen los hechos delictivos. Ellos constituyen una ruptura frente a los tonos grises cotidianos. Lo que describen parecen fragmentos de telefilms, de series, escenas descritas con lujo de detalle en las que por primera vez ellos son los protagonistas. Miedo, sudor frío, adrenalina, velocidad, todo se juega en esas escenas en continuado en la que tensiones se generan y resuelven en el mismo momento. Sospechamos que muchas veces mienten o exageran sus relatos, sobre todo en las hazañas físicas que describen. Pero no importa, muestra una sensualidad de las experiencias que no debe descartarse al analizar el sentido de estas acciones.

Contar los relatos entre sus pares, el costado lúdico, viril que tienen no puede ser descartado. Es necesario, cuando se entra en confianza, escuchar la forma de esos relatos, comprender que en sus vidas marcadas por el gris, tienen un lugar central. Y no es ajeno a esto la coerción al individualismo del que hablamos. Porque nuevamente, todo está concentrado en el cuerpo, hasta el placer y el daño que el placer puede infligir.

Las sustancias influyen en esto, pero no son por lo general adictos. No hay heroína que genera adicción física, ni crack que genera violencia. A pesar de las ideas reinantes, como se señaló, una encuesta del Ministerio de Justicia de la Nación muestra que, prácticamente el 100% de los aprehendidos en delitos no estaban bajo efectos de las drogas ni del alcohol. No puede establecerse un lazo causal entre drogas, alcohol y actos delictivos. Establecer,

como se hace en los discursos más corrientes en el país, un lazo causal entre drogas y delitos lleva a políticas públicas sin ningún efecto en el problema.

Sin dudas hay en la cotidianeidad de estos jóvenes marihuana, un poco de cocaína y medicamentos (pastas) mezclados con alcohol. Esto último, según los especialistas consultados, genera el mayor estado de “descontrol”. Pero a nuestro entender, la idea de que son adictos que necesitan robar para financiar su vicio no es sostenible, más allá de algunos casos particulares. Preferimos invertir la explicación y relacionarla con la lógica de necesidad. En la justificación social de la delincuencia la necesidad del adicto aparece como un motivo central y por ende con cierta legitimidad. En un estado de múltiples necesidades, los jóvenes se apropian de este significado y lo usan como razón principal de sus acciones. “Robé para comprar porro” y, en realidad, después se ve que con parte del “botín” fueron a bailar o compraron ropa, pagaron algo de la casa. No es la confesión de un adicto, sino de alguien que se apropia de recursos para satisfacer distintas necesidades y que lo debe justificar de algún modo. La necesidad de sustancias es, en realidad, un punto donde habrá consenso entre el joven y el entrevistador –todos saben que la droga genera necesidad.

Por último, nada de lo descrito hasta aquí sería posible sin la facilidad de acceso a las armas que estos jóvenes experimentan. Compra, alquiler, destajo, comodato, son sólo algunas de las formas de contratación existente en un denso mercado ilegal de armas –de todo tipo y calibre– al que estos jóvenes acceden fácilmente. No profundizamos en este tema, simplemente porque implicaba un riesgo para los investigadores, al afectar a la policía y a las fuerzas de seguridad. Pero es necesario dejar claro que ninguna de las acciones sería posible y ninguna política será eficaz sin un control del mercado de armas.

## **El uso innecesario de la violencia**

Lo que más preocupa a la sociedad en relación a las nuevas formas de violencia urbana es lo que aparece como un uso “innecesario” de la violencia. En efecto, periódicamente nos anoticiamos de que en robos en la vía pública, una víctima que no ofrecía ninguna resistencia fue asesinada por el victimario. Intentamos en este punto elucidar el porque de este innecesario uso de violencia. Varios de los elementos anteriormente presentados, sumados a otros aún no discutidos parecen permitir algún tipo de explicación. Una primera constatación es que la muerte de un par es parte del universo de estos jóvenes. Ya sea por el SIDA, a manos de la policía, cuando no por accidentes de tránsito, la muerte de alguien de su generación no es algo desconocido. La muerte se instala, entonces, en el territorio de las opciones imaginables para alguien como ellos.

Pero tomemos como punto de partida la centralidad de la lógica del ventajeo que señalamos anteriormente. Ventajear en toda interacción incluye, por sobre todo, a las situaciones delictivas. En concreto, habrá una predisposición a usar las armas si en un momento parece necesario para ventajear. Y ventajear usando las armas aparece como una opción necesaria cuando los actores son concientes de el aumento de la población civil armada. Y es aquí donde entra en juego el ventajeo. Ante cualquier movimiento que denote la posibilidad de que el otro “ventajee” (en este caso, que el otro tenga un arma y dispare), uno debe disparar primero. Por ello parten de la convicción de que el umbral de riesgo es muy alto, lo que los lleva a estar predispuesto al uso de la violencia, como afirmaba un joven “antes se te asustaban con sólo mostrarle el bulto del arma en el pantalón. Ahora tenés que andar con el dedo en el gatillo, por la cantidad de perejiles armados que andan por ahí”.

La predisposición a disparar como forma de neutralizar al oponente, es indicador de la poca confianza en sí mismos y en sus víctimas. La falta de "profesionalidad" criminal de estos jóvenes los lleva a que no se sientan seguros ellos mismos en el control de las situaciones que encaran. Pero tampoco confían en sus víctimas: temen que estén armados, que ellos quieran ventajearlos, por lo que están muy nerviosos y esto es un factor que sin duda interviene.

A esta sensación de ser ventajeados por la víctima contribuye la escasa disponibilidad de dinero en efectivo. En efecto, no entienden como "un tipo con una super casa, un super coche, una re pilcha, tiene sólo dos mangos encima". Esto los hace creer que posiblemente los estén engañando, por lo que la falta de confianza se acentúa y, por ende, la disposición a la violencia puede incrementarse.

En esta falta de confianza en sí mismos y en sus víctimas interviene la precarización del delito. Estos jóvenes no han tenido una "capacitación" en el delito, sino que al igual que otros mercados de trabajo, el delito se ha precarizado. Según nuestros informantes claves, el mundo del crimen organizado era sumamente jerárquico, con fases de aprendizaje estructuradas. Estos jóvenes no tienen formación, no han seguido un aprendizaje del delito por etapas. Esto se observa sobre todo en la poca capacitación para el uso de armas que denotan. Ellos tienen a su disposición armas pesadas. Se trata de una tecnología sofisticada para la que es preciso una formación de la que carecen. Esto contribuye a la dificultad para dominar la situación. Al no dominar la tecnología, las armas más que un factor de confianza y mayor seguridad, les provocan una inseguridad que, sin duda, favorece la violencia indiscriminada.

Un factor central para minimizar la sensación de riesgo es lo que podríamos llamar suspensión de la conciencia. ¿A que hacemos referencia? Si bien puede haber un

repentismo en tanto falta de planificación, hay por el contrario, una preparación subjetiva, en ese sentido no se trata de arrebatos, sino que existe un trabajo sobre si mismos. Así, cuando preguntamos sobre la manera de sobre llevar el temor que les causa la situación, la sobre inversión subjetiva implica un trabajo sobre si mismos que caracterizan como el “no pensar”. Una forma de detener la conciencia de si mismo a fin de cometer un hecho que, en algún lado, saben que implica grandes riesgos. Tal suspensión de la conciencia no se realiza de forma aislada, es el grupo el que con su influencia lleva a este trabajo, permite que el individuo lleve adelante acciones que, de otro modo, posiblemente no encararía.

### **Principales conclusiones**

En este punto se sintetizan los principales resultados presentados.

1. La información estadística existente confirma un aumento del número de delitos en la última década, en particular los correspondientes a infracciones contra la propiedad. Si bien hay más delitos violentos que en el pasado, la magnitud del problema es mucho menor que en otros países de la región.
2. Con respecto al perfil de los protagonistas de los actos ilegales, los datos más sobresalientes que surge de la información - basada en aquellos que tienen iniciada causa judicial - son los siguientes: 1) no hay asociación entre el uso de drogas ilegales y los actos delictivos, 2) un nivel educativo bajo, 3) en su mayoría son no reincidentes, lo que podría estar mostrando una población que está ingresando en el terreno de las acciones ilegales.
3. La mayoría de las víctimas provienen de los sectores más bajos de la población.

También se pudo detectar que el temor está modificando numerosos comportamientos.

El más sobresaliente es el abandono de barrios considerados peligrosos y la restricción de contactos sociales.

4. En los últimos años hubo un considerable crecimiento del gasto público y privado en temas ligados a la seguridad. Hay un significativo aumento de la posesión de armas entre los particulares. Tanto en la oferta de servicios de Seguridad pública (comisarias) como privada (p.ej. empresas de seguridad) se han detectados diferencias entre los barrios de sectores de mayores ingresos con respecto a aquellos habitados por personas de menores recursos.

5. En relación a los jóvenes entrevistados, el delito no aparece como una actividad exclusiva sino que, en muchos casos, se trata de una actividad que puede combinarse con un trabajo, por lo general precario e inestable. La figura emergente no es la del “delincuente” que construye una vida al margen de la ley sino la de jóvenes que alternan el trabajo con acciones ilegales.

6. La familia, la escuela y la comunidad local parecen estar debilitándose en tanto marcos protectores e integradores de estos jóvenes. En tal contexto cobran relevancia los grupos de pares. Ellos tienen un lugar central como orientadores del comportamiento de los jóvenes mediante la fijación de procedimientos de acción de carácter local.

7. Las normas de los grupos de pares son particularmente eficaces en un contexto de creciente segregación intra e interclase.

8. Se observa un paulatino desdibujamiento de los límites entre lo legal y lo ilegal. En la cotidianeidad de estos jóvenes hay una serie de recursos de acción disponibles para acceder a fines determinados: trabajo, hurto, pedido, "apriete" a los que se puede apelar en distintos momentos sin que su carácter de legal o ilegal aparezca muy relevante.

9. La percepción de lo que llamamos “horizonte de precariedad laboral duradera” es un factor de importancia. En efecto, quizás más significativo que los bajos ingresos de un eventual empleo, pesa la dificultad de vislumbrar una carrera laboral con algún tipo de ascenso social: perciben –en el mejor de los casos– un futuro signado por la alternancia entre empleos precarios e inestables y la falta de trabajo.

10. En lugar de cálculos de costo–beneficio, las acciones de estos jóvenes están regidas por la articulación de lógicas de acción definidas en el interior de los grupos de pares.

Hemos llamado a éstas: lógicas de la necesidad, del ventajeo y del aguante.

11. Dichas lógicas deben ser tenidas en cuenta a la hora de planificar intervenciones públicas. Ellas cuestionan la eficacia de las políticas de disuasión. En efecto, éstas se basan en el supuesto de un actor racional. El axioma de base es que la información sobre el aumento de las penas y/o sobre la posibilidad de ser aprehendido aumentarían el riesgo de cometer una acción delictiva y, por ende, disminuiría la relación costo– beneficio. Pero si se trata de actores que se manejan con lógicas de acción alternativas, el fundamento de las prácticas disuasivas pierde sentido.

12. El motivo de los delitos contra la propiedad son de tipo inmedatista. Roban para satisfacer consumos inmediatos y no en vías de una acumulación económica. Carecen prácticamente de dinero para satisfacer sus consumos.

13. No hay en el imaginario de los jóvenes entrevistados ninguna instancia exterior, como por ejemplo el Estado, al que consideren responsable de su suerte. Experimentan un “individualismo coercitivo”, el convencimiento de que deben indefectiblemente hacerse cargo por sí solos de la satisfacción de todas sus demandas.

14. Si bien el alcohol, ciertos psicofármacos y algunas drogas ilegales (más bien blandas que duras) forman parte del mundo cotidiano de los jóvenes entrevistados no se trata, en general, de adictos que roban para solventar el consumo.

15. Un tema central es el fácil acceso a todo tipo de armas que tienen estos jóvenes. Esto requiere con urgencia políticas precisas y que no aparecen en el debate público. La presencia de las armas aumenta la complejidad del problema. Como surge de los datos, las armas están cada vez más difundidas no sólo entre los que delinquen como los que la usan para defenderse. Lo que se observa es que este incremento crece casi a la misma velocidad entre ambas poblaciones: las posibles víctimas buscan armas para protegerse y los delincuentes al conocer esta situación recurren a armas cada vez de mayor poder. La posesión de armas utilizadas para la protección es otra señal del déficit de confiabilidad en las instituciones.



**VIOLENCIA DE ESTADO E IDENTIDADES POLÍTICAS. ARGENTINA  
DURANTE EL PROCESO DE REORGANIZACIÓN MILITAR  
(1976–1983)**

Preguntarse sobre las consecuencias de la violencia ejercida desde el Estado tiene tantas facetas que el interrogante se transforma en algo difícil de enfrentar.

Imaginemos por un momento que somos aquellos optimistas politólogos que en las décadas del cincuenta y del sesenta se entusiasmaban con la « revolución conductista ».

La complejidad de las variables de la vida social era tal que debíamos reducirla encontrando unidades de análisis que nos permitiesen manipular una masa heterogénea y enorme de datos. Recién a partir de esa simplificación conceptual podríamos comenzar a buscar relaciones causales entre los fenómenos analizados. La pregunta que nos haríamos sería sobre cómo reducir conceptualmente la complejidad de algo tan brutal como la violencia ilegal del Estado. ¿ Dónde buscar esas relaciones de causalidad que nos permitan palpar las consecuencias de esa violencia ? ¿ Cómo hacer para ver empíricamente las consecuencias de algo que por su naturaleza es ocultado, algo al mismo tiempo siempre presente y siempre oculto como lo fue la represión estatal ilegal ? ¿ Se pueden buscar y encontrar de la forma planteada por el conductismo las consecuencias de la violencia estatal para las sociedades y personas que la sufrieron ?

Creemos que la respuesta es negativa. Este trabajo no se propone una discusión epistemológica sobre cómo conocer las consecuencias de la violencia estatal sobre las conductas de las personas y grupos que la han sufrido, por lo tanto comienza con una limitación. Sólo diremos que buscar una relación causal entre conducta estatal y conducta

individual es difícil cuando la represión desde el Estado se hizo en forma ilegal, oculta y negada públicamente. Nos parece más provechoso ahondar en la forma en que se articuló discursivamente esa violencia y luego analizar las consecuencias que esta articulación tuvo en la constitución de identidades políticas posteriores. La presunción aquí es que existe una fuerte relación entre identidad política y conducta. Por lo tanto, la forma discursiva de una identidad será tomada como el disparador de una conducta. Allí es donde buscaremos, y creemos que encontraremos, las consecuencias de la violencia estatal : esta violencia marcó la forma en que se constituyeron las identidades políticas y estas últimas son tomadas como el resorte de las conductas políticas posteriores.

Esta discusión sobre la constitución de identidades políticas y su articulación política será el objeto de la primera sección de este trabajo, donde se definirán brevemente los conceptos utilizados para « simplificar la compleja realidad », siguiendo con la metáfora conductista, que supone investigar esas identidades. A continuación, haremos un breve repaso de la historia política argentina reciente para contextualizar el trabajo que nos ocupa. En tercer lugar, nos meteremos de lleno en la manera en que se articuló la violencia desde la última dictadura militar en la Argentina teniendo en cuenta dos aspectos de la misma. Por un lado, el discurso de la « guerra sucia ». La « guerra » contra el comunismo, la guerrilla de izquierda y el marxismo en general definió la frontera discursiva de la identidad del Proceso de Reorganización Nacional. Por el otro lado, otro elemento del discurso del Proceso fue el discurso del « mercado libre ». Las políticas económicas del régimen militar y el discurso de la reforma económica que las guiaron jugaron un rol importante en la definición de esta nueva articulación. En la discusión de estos dos aspectos discursivos mostraremos cómo las consecuencias de la violencia estatal fueron la debilitación y fragmentación de las identidades políticas.

## **Política y constitución de identidades**

Si pretendemos analizar las consecuencias de un fenómeno sobre la constitución de las identidades políticas, el primer interrogante que se nos presenta es dilucidar cómo puede este fenómeno incidir en una identidad política. Si tomamos a una identidad como una serie de significados sedimentados que nos permiten tener una determinada lectura del mundo que nos rodea, esta identidad será una serie de representaciones que darán sentido a ese mundo. Ahora bien, esta sedimentación nunca es fija e inamovible sino que se va acomodando a los cambios y transformaciones que se van sucediendo. Ante determinados fenómenos esas representaciones irán cambiando intentando dar nuevo sentido e intentando aprehender los cambios que vienen a dislocarlas. Esto es importante en dos sentidos. Primero, porque el papel de la dislocación será fundamental en la emergencia de cualquier identidad. Segundo, porque esto implica que no hay identidades fijas y estables sino procesos de identificación más o menos estabilizados según el caso. En el caso que nos proponemos estudiar aquí analizaremos dos de las más profundas dislocaciones que se pueden pensar en las sociedades modernas. Por un lado, la violencia ilegal e indiscriminada de quien se supone es custodio del monopolio de la violencia legítima. Por el otro, el problema

inflacionario. Como vemos estas dos dislocaciones ponen en duda las identidades más importantes de la modernidad : la identidad de ciudadano y la de consumidor.

Toda identidad emerge entonces a partir de una dislocación de las estructuras de sentido que fuerza la necesidad de nuevas representaciones. Frente a la dislocación aparecerán toda una serie de respuestas que intentan suturar las representaciones ahora dislocadas. Es decir, cuando los significados que tenemos ya no son suficientes para dar sentido a aquello que

nos pasa aparecerán toda una serie de contenidos particulares que intentarán suturar la brecha que se abre con la dislocación. Estos contenidos particulares son diferentes principios de lectura de una situación dada a la que forzosamente debemos darle una respuesta.

Veamos ahora cómo se constituyen esos contenidos particulares. Como principio de interpretación o lectura de una cierta situación todo discurso particular tiene dos características. En primer lugar, se constituye como una crítica al orden dislocado.

Como decíamos recién, una determinada posición emerge como producto de una dislocación. En segundo lugar, un determinado discurso construirá su contenido particular a partir de dicha crítica. Pero en esa crítica, todo discurso proveerá al mismo tiempo una promesa de plenitud más amplia y universal que hace al bienestar de toda la comunidad. Todo contenido particular representará a su vez un principio de espacialidad y estructuralidad más general. Por ejemplo, en el discurso marxista la liberación particular del proletariado implica la promesa de la liberación de toda la sociedad. Es decir, el discurso proletario es un discurso particular que surge como consecuencia de la auto percepción de la clase trabajadora como clase explotada. Simultáneamente, este discurso lleva consigo una promesa de plenitud para toda la sociedad representada por el comunismo ; sociedad en la que ya no habrá conflicto y las relaciones sociales serán transparentes y libres de toda dominación. De este modo, un discurso representará un contenido literal y un proyecto más abarcador y universal que supera su particularidad.

Pasemos a ver ahora cómo se constituyó el discurso del PRN y cómo los efectos de este discurso dislocaron las identidades políticas tal como venían siendo articuladas históricamente.

## **Argentina después de Perón**

Desde que la Revolución Libertadora derrocó a Perón en 1955, el espacio político estuvo configurado por dos campos antagónicos. Por un lado, las demandas de ciertas posiciones particulares (sindicatos, organizaciones juveniles, grupos de izquierda y nacionalistas de derecha, los sectores nacionalistas de las Fuerzas Armadas, etc.) entraron en una cadena de equivalencia discursiva que constituyó el polo peronista del antagonismo. Por el otro lado, la oligarquía liberal, las clases medias, la Iglesia Católica y los sectores más liberales de las fuerzas armadas formaron el polo anti-peronista. Esta división estricta del espacio político en dos campos impidió la constitución de las dos condiciones necesarias para una práctica hegemónica estable : la presencia de una pluralidad de fuerzas antagónicas y la inestabilidad de las fronteras identitarias que las separan. Lejos de esto, la escena socio-política argentina luego de la experiencia peronista puede ser descripta como una situación de estricto antagonismo en la que las fronteras que separaban las dos posiciones estaban fuertemente constituidas. De este modo, el espacio político estuvo estructurado alrededor de vínculos hegemónicos débiles y precarios, excluyendo la posibilidad de prácticas hegemónicas estables.

El período abierto por la rebelión militar que puso fin al gobierno peronista en 1955 estuvo caracterizado por la inestabilidad política. Ninguno de los tres gobiernos civiles - en 1958, 1963 y 1973 - completó sus mandatos, y ninguna de las administraciones militares pudo lograr los objetivos que se plantearon ni imponer sus candidatos a la sucesión. El espacio político en la Argentina estuvo así caracterizado por la emergencia, crisis y desintegración cíclicas de gobiernos tanto militares como civiles.

Estos ciclos le dieron al espacio político cierta uniformidad, con la excepción de la violencia de los ciclos que fue ganando intensidad. Estas circunstancias generaron varias interpretaciones.

La literatura sobre la política argentina entre 1955 y 1976 coincide en un punto : el diagnóstico de una situación de "empate social", un "juego imposible" o un "juego de suma cero" en el cual los vetos recíprocos y la parálisis general fueron las principales características. La razón del empate varía de enfoque en enfoque, algunos centraron su atención en los diferentes intereses económicos de los sujetos, mientras que otros acentuaron el importante rol cumplido por la racionalidad institucional. El espacio político en la Argentina parecía efectivamente paralizado por la capacidad de los elementos de vetar mutuamente sus demandas.

Sin embargo, desde el punto de vista propuesto aquí, el origen del estancamiento político de Argentina descrito en estos análisis debe buscarse en la imposibilidad de constituir una práctica hegemónica estable y abarcadora, y no en una racionalidad intrínseca, sea económica o institucional, de los actores en cuestión. La razón para el estancamiento en la Argentina luego de 1955 debe ser buscada en la manera en que se constituyeron las identidades políticas en el transcurso de la década anterior. La experiencia peronista fue una nueva articulación de la formación política basada en la incorporación de los hasta entonces excluidos sectores populares. La revolución de 1955 que derrocó a Perón fue un intento por revertir esa re-articulación : fue un intento sistemático de destrucción del peronismo. El régimen militar que comenzó con la Revolución Libertadora decretó la no-existencia de Perón, de Evita y del peronismo. Era ilegal mostrar fotografías, cuadros o esculturas del ex-presidente y su esposa, estaba prohibido utilizar la palabra « peronismo » , « peronista » , «

Justicialismo », o la abreviatura PP (Partido Peronista), no se podían celebrar los días conmemorativos de « la tiranía » o cantar la Marcha Peronista. El gobierno militar abolió todas las instituciones y organizaciones creadas en los diez años previos, y se presentó a sí mismo como la « civilización » en contra de la « barbarie » peronista. Esta civilización, enmarcada en una dictadura, representaba para la coalición gobernante los valores libertarios europeos en contra del resentimiento cultural de la « Argentina profunda ». El peronismo quedaba así culturalmente confinado al imaginario de la vagancia, el desorden y la promiscuidad de las clases bajas<sup>5</sup>. Por otro lado, los símbolos populares del peronismo y la figura de Perón en el exilio comenzaron a representar una nueva centralidad. Las demandas populares eran diversas y venían de diferentes grupos, pero se hacían equivalentes con relación al rechazo de la sucesión de gobiernos marcados por la proscripción del peronismo. La figura de Perón comenzó así a encarnar la representación de todas esas demandas. La Resistencia Peronista al régimen militar transformó a sus oponentes en « gorilas », al mismo tiempo que la coalición en el poder. Para una revisión más completa de estos temas véase Sebastián Barros y Gustavo Castagnola : « The political frontiers of the social. Argentine politics after the emergence of Peronist populism (1955-1973) » en David Howarth, Aletta Norval, y Yannis Stavrakakis (comp.) *Discourse Theory and Political Analysis*.

Perón era nombrado por la prensa como el « tirano prófugo » o el « dictador derrocado ». Existía una revista opositora llamada *Pero*.... Para un buen sumario de las tribulaciones de Perón y el peronismo durante esos años véase Gustavo Castagnola, « The pope and his queen. Perón, his word, and his body (1955-1966) », trabajo inédito presentado al Seminar in Ideology and Discourse Analysis, Department of Government, University of Essex, 1998 ; y Claudio Uriarte, *Almirante Cero*. Biografía no autorizada de Emilio Eduardo Massera,



Buenos Aires, Planeta, 1992.. Esto se refleja muy bien en ciertas obras literarias, sirve como ejemplo Juan José Hernández, *La ciudad de los sueños*, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina.

La oposición llamaba a los seguidores de Perón « cabecitas negras ». Con « animales » en el poder y una muchedumbre de « seres inferiores » en el llano era difícil encontrar un imaginario compartido que permitiese articulaciones hegemónicas estables.

Hubo intentos por romper esta parálisis. El Gran Acuerdo Nacional (GAN) implicaba el comienzo de negociaciones entre el gobierno militar y los partidos de la oposición, la CGT y la CGE, y puede considerarse como un intento de resolver políticamente el conflicto. Pero el GAN fracasó por la oposición de Perón y la « pérdida de apoyo social del gobierno de Lanusse ». Otro intento por superar el estancamiento político tuvo lugar cuando Perón ganó las elecciones por tercera vez en 1973. Al retomar el poder, la aspiración del líder era transformar el importante apoyo electoral en un sistema político consensual amplio. Su proyecto de una democracia integrada estaba basado en un pacto social que ayudaría a superar la emergencia nacional. Pero las profundas contradicciones al interior del peronismo rápidamente erosionaron la posibilidad de estabilidad y la formación política comenzó a articularse (o mejor dicho a desarticularse) alrededor de esas contradicciones. Cuando Perón tuvo que gobernar e instrumentar políticas concretas dejó de funcionar como la encarnación de la unidad que representaba hasta el momento. La situación empeoró considerablemente y explotó de manera violenta luego de la muerte del líder en julio de 1974. El mal manejo político de su esposa y vicepresidenta, M. E. Martínez de Perón, aceleró el ritmo de la crisis. La última etapa del gobierno peronista puede ser caracterizada como una crisis orgánica.



La economía estaba fuera de control<sup>9</sup>, y se vivía un sentimiento de inseguridad generalizada por las violentas confrontaciones entre grupos del partido gobernante y por las acciones militares de grupos guerrilleros. La oposición resaltaba la falta de liderazgo de la señora de Perón y su gobierno era presentado continuamente como situado al borde del colapso. Para sorpresa de muy pocos y el descubierto alivio de algunos, las Fuerzas Armadas intervinieron el 24 de marzo de 1976 y derrocaron al desacreditado gobierno peronista. No hubo resistencia ; la Plaza de Mayo permaneció vacía.

En 1976 nuevamente comenzaba un gobierno militar, aunque éste sería diferente. Sus consecuencias fragmentaron el espacio político de manera tal que permitieron su re-articulación de un modo completamente nuevo para la experiencia del país.

### **El Proceso de Reorganización Nacional**

La escena socio-política argentina luego de la experiencia peronista entre 1945 y 1955 puede ser entonces descrita como una situación de estricto antagonismo.

Una situación en la que las fronteras que separaban las dos posiciones en las que estaba dividida la formación política estaban fuertemente constituidas. De este modo, el espacio político estaba estructurado alrededor de vínculos hegemónicos débiles y precarios, impidiendo la posibilidad de una práctica hegemónica estable y duradera. El tercer gobierno peronista se caracterizó, especialmente luego de la muerte de Perón en 1974, por la crisis política y económica.

Perón ganó las elecciones de septiembre de 1973 con el 61.9 % de los votos.

Para una revisión de las políticas económicas del tercer gobierno peronista véase W. Smith, *Authoritarianism and the Crisis of the Argentine Political Economy*, Stanford,

Stanford University Press, 1989, p. 224-31 ; y Guido Di Tella, *Perón-Perón, 1973-1976*, Buenos Aires, Sudamericana, 1983.

La izquierda peronista y una economía fuera de control provocaron una proliferación de antagonismos y una generalizada crisis de las identidades sociales.

Un nuevo proceso comenzó en 1976. El gobierno militar fue la instancia que provocó un cambio tal en la estructura socio-económica que permitió la subsecuente emergencia de nuevas prácticas hegemónicas. Los líderes de las Fuerzas Armadas que tomaron el poder en 1976 proclamaron que su objetivo no era meramente terminar con el desorden del gobierno peronista. Incluso cuando el Proceso fue presentado como una respuesta a la crisis, los generales declararon que su objetivo era transformar las bases de la sociedad argentina.

La conducción del proceso se ejercitará con absoluta firmeza y vocación de servicio. A partir de este momento, la responsabilidad asumida impone el ejercicio severo de la autoridad para erradicar definitivamente los vicios que afectan al país.

Este objetivo estructural del Proceso se reflejaba también en el nombre que se dio a sí mismo. Era una denominación similar a otro proceso fundacional de organización nacional planeado por la Generación del 37 y llevado adelante por la del 80. De este modo, el nombre también reflejaba el contenido que lo constituía. El proceso de organización nacional de finales del siglo pasado sentó las bases para el crecimiento pre-industrial y la modernización hasta 1930. Esta nueva organización, reorganización, estaba entonces intentando volver a ese momento de grandeza englobado en la idea de la Argentina potencia. Y esto implicaba borrar la emergencia del peronismo en los años cuarenta y sus consecuencias.

El discurso militar surgió como una respuesta posible a la dislocación estructural implicada por la crisis que había comenzado en 1973. Una vez perdidas las referencias e identidades

colectivas, en un contexto en el que las imágenes de horizontes futuros se hallaban destruidas y los criterios sociales de « normalidad » se erosionaban día a día, el discurso de un nuevo *Orden* se presentó a sí mismo como el defensor de la comunidad y como el garante de su supervivencia. En la situación de desorden en que estaba inmersa la Argentina, este nuevo discurso fue aceptado porque era el discurso de un orden. Como ejemplo, Corradi cita un trabajo de Galli y O'Donnell en el que ellos preguntaron a los entrevistados, durante 1978 y 1979, cómo eran sus vidas en ese momento y cómo se comparaban con sus vidas previas al Proceso. La definición del « antes » fue dejada abierta. Los entrevistados situaban ese período anterior en la serie de eventos que precedían inmediatamente al golpe militar de 1976. « Lo describían como una situación intolerable en respuesta a la cual cualquier régimen era aceptable.

Cualquier orden es preferible a ningún orden, a un sentimiento de caos primordial ».

El discurso militar de un nuevo Orden fue entonces aprehendido como una alternativa creíble a la crisis generalizada. El discurso del Proceso se presentó a sí mismo como un momento fundacional, ofreciendo un principio de inteligibilidad para la dislocación de las viejas formas de representación. El desorden en el que había terminado el gobierno peronista permitió la articulación de una práctica en la que prevaleció la demanda por un orden autoritario. Como generalmente había sucedido en la Argentina hasta ese momento, las fuerzas armadas fueron el elemento preparado y disponible para satisfacer esa demanda. La efectividad del discurso militar devino de su 10 Junta Militar, « Proclama del proceso de reorganización nacional ». En Oscar Troncoso, *El proceso de reorganización nacional/1. Cronología y documentación (De marzo de 1976 a marzo de 1977)*. Buenos Aires : Centro Editor de América Latina, 1984, p. 108.

La tradicional disponibilidad en el contexto político argentino ; el sentimiento de desintegración social y violencia le dio la necesaria credibilidad para su éxito.

El discurso del Proceso se constituyó como una crítica a la des-estructuración del orden dominante. La descripción de la situación hecha por los militares cuando anunciaron el golpe en marzo de 1976 fue una crítica clara y explícita a la falta de orden estructural.

Frente a un tremendo vacío de poder, capaz de sumirnos en la disolución y en la anarquía ; a la falta de capacidad de convocatoria que ha demostrado el gobierno nacional ; a las reiteradas y sucesivas contradicciones evidenciadas en la adopción de medidas de toda índole ; a la falta de una estrategia global que conducida por el poder político, enfrentara la subversión ; a la carencia de soluciones para problemas básicos de la Nación, cuya resultante ha sido el incremento permanente de todos los extremismos ; a la ausencia total de los ejemplos éticos y morales que deben dar quienes ejercen la conducción del Estado ; a la manifiesta irresponsabilidad en el manejo de la economía, que ocasionara el agotamiento del aparato productivo ; a la especulación y la corrupción generalizada, todo lo cual se traduce en una irreparable pérdida del sentido de grandeza y de fe ; las Fuerzas Armadas, en cumplimiento de una obligación irrenunciable, han asumido la conducción del Estado.

Para los militares, la crisis era generalizada. Este diagnóstico era además compartido por otras fuerzas políticas y sociales.

De la crítica a la crisis generalizada, el discurso del Proceso comenzó a construir su propio contenido literal. Como se afirmó previamente, una identidad debe ser comprendida como una respuesta a un cambio traumático, como un intento de dar sentido a una secuencia de eventos y así suturar el espacio dislocado. Esto puede verse claramente en el Acta que definía los propósitos y objetivos del gobierno militar.

Restituir los valores esenciales que sirven de fundamento a la conducción integral del Estado, enfatizando el sentido de moralidad, idoneidad y eficiencia, imprescindibles para reconstituir el contenido y la imagen de la Nación, erradicar la subversión y promover el desarrollo económico de la vida nacional basado en el equilibrio y participación responsable de los distintos sectores a fin de asegurar la posterior instauración de una democracia republicana, representativa y federal, adecuada a la realidad y exigencias de solución y progreso del pueblo argentino.

Hasta aquí vemos como un actor social particular - y actor político por naturaleza en el contexto latinoamericano - propuso una serie de medidas para superar cierta dislocación del orden estructural. Pero más allá de su contenido literal, el Proceso como espacio discursivo se constituyó como una crítica más abarcadora de otro espacio : el peronismo. El retorno a los tiempos dorados de principios del 1900 implicaba que la « enfermedad » peronista no podía « infectar » nuevamente el cuerpo social. Si la Argentina iba a retomar su destino de grandeza, las características tradicionalmente asociadas al peronismo debían ser obliteradas. Parafraseando el vocabulario médicoquirúrgico del régimen militar, la « enfermedad » populista no podía « infectar » nuevamente el « tejido » social si Argentina quería retomar su « sano » camino de grandeza. Estas características eran la movilización política de los sectores populares.

En otro contexto mostramos como una de las posiciones que más tarde llegó a representar la oposición al Proceso, el alfonsinismo, también compartía esta percepción sobre la situación en 1976. Junta Militar, « Acta fijando el propósito y los objetivos básicos para el proceso de reorganización su incorporación al sistema político, el desarrollo de una estructura económica autárquica y cerrada, y la participación estatal en la regulación de la economía. El nuevo proyecto de plenitud, la nueva estructuralidad del discurso del Proceso

consistió en la modificación sustancial de los estilos de la vida política de la Argentina postperonista.

La nueva estructuralidad, entonces, emergió como una respuesta a la crisis de 1974-1976 y fue articulada por el contenido del discurso procesista. Esto implicaba la erradicación de la subversión y la estabilización de la economía como condiciones para establecer una democracia durable, objetivo alegado por toda intervención militar. Estos dos objetivos se combinaron como dos ingredientes que marcaron la respuesta del Proceso a la crisis : el mito de la guerra sucia y el mito del mercado libre.

### **El mito de la guerra sucia**

Antes de comenzar el análisis de uno de los elementos del mito del Proceso es necesario hacer una aclaración sobre la naturaleza de la guerra sucia como mito. El hecho de caracterizarla de esa manera no implica de ningún modo argumentar que la violenta represión militar a la sociedad argentina no existió. Lejos estamos de pretender que la guerra sucia sea sólo una historia inventada por los grupos que participaron de la violencia de los años setenta. La manera en que la idea de mito es usada en la bibliografía sobre la guerra sucia es un buen ejemplo de lo que no se entiende por mito en este trabajo. Esto tanto como para la literatura sobre abusos a los derechos humanos, como para el uso que se le ha dado al término por parte de los militares. En este último caso, la guerra sucia fue consecuencia de las características de la guerra de guerrillas y del hecho de que en toda guerra se cometen excesos. Estas características le dieron al término una ambigüedad que será examinada en un momento. Por su parte, la literatura que revisa los abusos militares a los derechos humanos niega la existencia de una guerra, no importa si limpia o sucia. Su

reclamo es que lo que comúnmente se denomina guerra sucia no fue más que una mera persecución ideológica. No hubo una guerra porque para ello se necesitan dos ejércitos y ese no fue el caso argentino en los años setenta. El mito de la guerra sucia fue y es usado para esconder la sangrienta persecución de disidentes tras la máscara de una guerra. Desde ambas perspectivas, el término mito es entendido como una deformación subjetiva de la realidad<sup>16</sup>. Esta noción de mito como deformación lleva a decir a un autor que « [m]ás que revisar las premisas que derivó de su (mal)interpretación de los eventos que presenciaba, la Junta intentó « reorganizar » la realidad y conformarla a su propia mitología ». Desde este punto de vista, un mito es la deformación subjetiva de una realidad que está fuera del mito, esperando ser organizada, ordenada o estructurada. La realidad es así pensada como algo externo e independiente del mito.

La noción de mito usada aquí es diferente. Un mito será la reorganización de una secuencia de eventos, y no la deformación de una cierta realidad. En este sentido, un mito *es realidad*. Es un principio de interpretación de una situación y como tal define lo que la situación es. Un mito no es una « realidad subjetiva » como Graziano parece <sup>15</sup> La aparición de movimientos de guerrilla fue entendida también como consecuencia de las maniobras políticas de Perón, incluso cuando no todas ellas eran organizaciones peronistas.

No es de suponer, sino una « realidad objetiva ». Siguiendo con el ejemplo de la represión ilegal, el mito de la guerra sucia no fue una lectura errónea de ciertos eventos, no estaba enmascarando la realidad de una represión brutal, sino que fue el principio que organizó y dio orden a esa realidad represiva.

Para pelear esta guerra sucia contra la subversión, la Junta Militar organizó y armó una serie de unidades diferentes dentro de las fuerzas armadas y policiales. Estas unidades operaban con autonomía e impunidad, pudiendo seleccionar libremente a sus víctimas. Esta

guerra tuvo una fase más intensa entre 1976 y 1979. Durante esta « fase de terror » cerca de 30.000 personas fueron asesinadas o desaparecidas<sup>19</sup>. Aun cuando esta guerra era supuestamente una guerra contra la guerrilla, la represión se extendió mucho más allá de las zonas de conflicto. Afectó no sólo a la oposición no violenta al régimen, sino también a potenciales oponentes a la dictadura. Además de miembros de las organizaciones guerrilleras, sindicalistas, estudiantes universitarios y secundarios, políticos, miembros de asociaciones profesionales y personas cercanas a las víctimas fueron afectadas por la represión. Corradi dio una buena descripción de lo que sucedía en esos momentos.

La Argentina era gobernada por un gobierno visible y uno invisible, por dignos oficiales manejando la maquinaria administrativa del Estado y por asociaciones terroristas secretas, por ejecutores ocultos, agentes del Estado absconditus que intervenían en la vida cotidiana en ciertos momentos impredecibles para sus víctimas, manteniendo el poder en virtud del extendido terror de sus poderes y a través de la extrema violencia asociada a sus actos.

Así, la violenta represión de oponentes - y potenciales oponentes - políticos tuvo traumáticas consecuencias para la sociedad argentina. Sin embargo, el problema a tratar en este capítulo es cómo la "amenaza subversiva" se transformó en el principio de lectura para una cierta dislocación y las consecuencias que esta articulación tuvo para las subsecuentes articulaciones del espacio político en la Argentina.

La amenaza del peligro comunista no era algo nuevo en la Argentina. Los militares describieron la situación de 1976 reflatando un diagnóstico de los años sesenta : revivieron la percepción de una amenaza al *status quo*. La diferencia consistía en que, en los años setenta, el poder de la guerrilla era tal que una guerra estaba siendo librada.

Esta guerra, desde el punto de vista militar, no era una guerra normal, sino una guerra sucia.



Esta guerra, a diferencia de la clásica, no tiene materializado en el tiempo su iniciación y tampoco la batalla final que corone la victoria. Tampoco tiene grandes concentraciones de hombres, de armas y materiales, ni líneas claramente definidas.

Con el término guerra sucia, los militares describían una situación de guerra no convencional en la que las características del enemigo justificaba ciertos excesos. No era una guerra « limpia » en la cual los enemigos se encontraban en un campo de Juan Corradiada quien sabía quién era el « otro ». El enemigo se infiltraba, contaminaba el cuerpo social, no vestía uniforme, no se sabía por dónde y cómo atacaría. Para los militares entonces, las desapariciones, la tortura, el robo de bienes y el secuestro de personas, eran consecuencias del tipo de enemigo contra el cual se estaba peleando. Esta guerra no convencional era una batalla de la « Tercera Guerra Mundial ».

Tenía un carácter internacional porque era provocada por una « conspiración comunista » contra la civilización « occidental y cristiana ». La no convencionalidad de la guerra, según la veían los militares, estaba en el centro del mito de la guerra sucia. Era el principio de interpretación de una situación dada y de ese principio se desprendían todas las subsecuentes definiciones. Siguiendo el mismo razonamiento, el enemigo era no convencional, los métodos y la estrategia para pelear la guerra eran no convencionales y así sucesivamente.

Desde el punto de vista estratégico, se debía encarar la guerra con una lógica global, opuesta a una parcial que implicaba la simple intervención militar. El Jefe de Estado Mayor General del Ejército, Gral. G. Suárez Mason, fue muy claro al respecto :

« Ante el avance de una acción total por parte del marxismo es preciso tener una respuesta integral del Estado. Sería absurdo suponer que hemos ganado la guerra contra la subversión porque hemos eliminado su peligro armado ». De esta manera, la intervención militar se

necesitaba en una multiplicidad de contextos : el lugar de trabajo, el sistema educativo, los movimientos sociales, etc. Fue por eso que sindicatos, canales de televisión, la Asociación de Fútbol Argentino, etc., fueron intervenidos. Contra un enemigo que se encontraba infiltrado en todos los intersticios sociales los métodos utilizados no podían ser los tradicionales.

La no convencionalidad de la guerra también definía la constitución del « otro » excluido, el enemigo. Como mostraron Frontalini y Caiati, el enemigo estaba definido en términos vagos : « izquierdista », « anti-argentino », « incorregible » e « ideológico ». Era izquierdista porque la subversión solamente provenía del lado izquierdo del espectro ideológico. El terrorismo de derecha no era terrorismo en sí mismo, sino una « reacción natural de un cuerpo enfermo » :

Mi concepto de subversión se refiere a las organizaciones terroristas de signo izquierdista. La subversión o el terrorismo de derecha no es tal. El cuerpo social del país está contaminado por una enfermedad que corroe sus entrañas y forma anticuerpos. Esos anticuerpos no deben ser considerados de la misma manera que se considera un microbio. A medida que el gobierno controle y destruya a la guerrilla, la acción del anticuerpo va a desaparecer.

El carácter "ideológico" del enemigo provocaba incluso la pérdida de su nacionalidad : « [y]o quiero significar que la ciudadanía argentina no es víctima de la represión. La represión es contra una minoría, a quien no consideramos argentina ». Ideológicamente el enemigo estaba condenado « por activar a través de ideas contrarias a nuestra civilización occidental y cristiana a otras personas ».

Reduciendo el « otro » a una patología social, el discurso del Proceso enmarcaba a su enemigo como potencial receptor de un « tratamiento ». La « extirpación del tejido enfermo

» se volvió así la condición para el mantenimiento del discurso del *Orden*. Esto implicaba lo que Corradi llamó sanciones, « que pueden ser caracterizadas como prácticas abyectas (expulsión, confinamiento, tortura, desaparición y exterminio) ».

De este modo, la característica principal de la no convencionalidad presentada en el contenido literal del mito de la guerra sucia fue su ambigüedad. Este contenido, que estaba constituido como una crítica a la pérdida de orden estructural, era tan vagamente definido y sus límites eran tan borrosos que la población vivía en un estado de incertidumbre constante. Nadie sabía exactamente, ni siquiera los militares, qué era ser un enemigo o un subversivo, incluso « *la ingenuidad y la indiferencia* » podían llegar a ser causa de complicidad subversiva. La no convencionalidad de la guerra que los militares estaban luchando provocó que nadie supiera con certeza cuándo y dónde la guerra se libraba. Nadie sabía cuándo alguien era o se transformaba en un enemigo.

El miedo y la falta de certezas mínimas indujo una parálisis socio-política. Cuando las formas de representación que reglan la formación política no son claras, y cuando lo que está en juego es la vida, los bienes y la seguridad de las personas, el resultado es una inmovilidad generalizada. Las consecuencias más importantes de la vaga definición del contenido de la guerra sucia fueron la despolitización de los ciudadanos y la reducción de las actividades asociativas. El contenido del discurso actuó como un mecanismo de disuasión, su vaguedad provocó parálisis política. Al mismo tiempo, la incertidumbre dio lugar a la emergencia de estrategias egoístas de supervivencia que, a su vez, retroalimentaron la reducción de actividades asociativas. La sociedad argentina se transformó en una sociedad fragmentada.

Al mismo tiempo, el mito de la guerra sucia implicaba la negación de la violencia cotidiana ejercida por la represión militar. Como explicó Graziano, esto transformó a la violencia en

un « espectáculo abstracto », en la representación de una ausencia cuya presencia era a la vez insistida - por ejemplo, por los espectaculares secuestros en la vía pública, el despliegue de fuerzas militares, etc. - y negada – el terrorismo de Estado, los secuestros, los tiroteos, eran oficialmente negados paralizando a una población desprotegida. Sin embargo, el carácter espectacular y público de la violencia comprometía a la población como observador participante. El poder del mito se multiplicó y provocó un sentimiento generalizado de sospecha. Es en este compromiso forzado por la violencia pública negada que debemos buscar el origen de las tristes y populares condenas anticipadas : « *algo habrá/n hecho* » o « *por algo será* ». El resultado de estas condenas, utilizadas para intentar explicar una detención ilegal o desaparición, fue que ser víctima de algún atropello automáticamente transformaba a la persona en culpable.

La consecuencia de este mito fue entonces la destrucción de los vínculos sociales y de los espacios públicos disponibles para el reconocimiento de referencias colectivas. A esta destrucción debe sumarse la represión y desaparición física de entre 10.000 y 30.000 personas. El resultado del mito de la guerra sucia fue una sociedad fragmentada, condicionada por el miedo y caracterizada por una desorganización y debilidad generalizadas de las identidades colectivas. Esto tuvo importantes consecuencias no intencionales para los militares. La desorganización generalizada de la sociedad provocó una proliferación de antagonismos que el Proceso no pudo luego rearticular.

Una vez que se cumplió la promesa del *Orden* - aunque esto no significó que la violencia pública de 1973-1976 desapareciera sino que se volviera una presencia ausente - el mito del Proceso no pudo proveer nuevas formas de identificación. El Proceso no pudo reconstituir una forma de representación que fuera capaz, una vez más, de suturar las identidades que había coadyuvado a dislocar. Cuando esto se alcanzó a percibir, ya era demasiado tarde. La

Guerra de Malvinas fue una reacción a esta inhabilidad para re-articular el espacio político. El esfuerzo bélico del Proceso puede ser comprendido, desde una teoría de la hegemonía, como un intento de formar una nueva cadena discursiva de equivalencias cuyo exterior constitutivo era ahora un enemigo extranjero. Si el enemigo interno definido por el mito de la guerra sucia era el « otro » de la cadena de equivalencias Orden, durante la Guerra del Atlántico Sur la dimensión de externalidad se encontraba en el imperialismo del Reino Unido. La inhabilidad del Proceso para articular las fuerzas que ayudó a des-controlar caracterizó el contexto en el cual comenzó la transición argentina a la democracia.

Veamos ahora la manera en que el discurso y la política económica del régimen militar complementó el diagnóstico de la guerra sucia. El desorden provocado por el « peligro subversivo » tuvo su correlato en las estructuras económicas heredadas de la experiencia populista que comenzó a mediados de los años cuarenta.

### **El mito del mercado libre**

En 1976, las ideas económicas liberales y de mercado libre no eran nuevas en la política argentina, ni tampoco eran patrimonio exclusivo de la Junta Militar que asumió el 24 de marzo de dicho año. Después de 1955, cuando Perón fue derrocado, este mito era uno de los elementos del antagonismo que dividía a la escena política argentina. En este sentido, estas ideas se definían a sí mismas como una crítica del modelo de desarrollo representado por el polo peronista. Su propuesta consistía en la apertura de la economía al mercado mundial y en la reducción de la actividad del Estado en la esfera económica (principio de subsidiariedad del Estado). Se enfatizaba principalmente el control de la inflación como la condición para restaurar un crecimiento económico sano <sup>31</sup>. Las principales medidas a

adoptar fueron así la restricción de la emisión monetaria, la baja de los salarios y el mantenimiento del equilibrio presupuestario por la reducción del gasto y el aumento del ingreso estatales.

El contenido particular de este mito en 1976 fue explícitamente declarado. Esta es la diferencia más importante respecto del mito de la guerra sucia. Los objetivos de la política económica fueron claramente establecidos desde el principio. El 2 de abril de 1976 el nuevo ministro de Economía, José A. Martínez de Hoz, anunció el Programa de recuperación, saneamiento y expansión de la economía argentina.

En su descripción de la evolución de la economía argentina Martínez de Hoz mencionaba dos características principales. Por un lado, « la estatización y regulación creciente de la economía ». El Estado asumió funciones correspondientes al sector privado, el esfuerzo individual no se vio fomentado y el gasto público aumentó aún cuando los recursos estatales no lo hicieron. Por otro lado, la economía argentina de la post-guerra era un esquema de economía cerrada, aislada de toda corriente innovadora en materia de tecnología y sistemas productivos<sup>34</sup>. De esta manera, el aumento del gasto público provocó el déficit del presupuesto nacional. Dicho déficit era financiado con el argumento que esta necesidad se mantiene hasta los años noventa y recién es satisfecha con la Ley de Convertibilidad.

La inflación, desde este punto de vista la principal patología de la economía argentina, fue ayudada al mismo tiempo por el modelo de industrialización por sustitución de importaciones profundizado por el peronismo. El cierre de la economía al mercado mundial, debido a las características de dicho modelo, se instrumentó transfiriendo ingresos de ciertas actividades económicas a otras. Las medidas tomadas con este propósito fueron tasas de interés diferenciales, la protección de ciertas actividades industriales mediante

impuestos a las importaciones, subsidios, etc. Todos estos factores redujeron el índice de crecimiento de la economía. Entonces, desde el punto de vista liberal, las principales causas de las dificultades sufridas por la economía argentina eran dos : las distorsiones provocadas por ciertas políticas de industrialización y el sobredimensionamiento del Estado. La introducción de impuestos a las importaciones protegieron una industria ineficiente ante la competencia externa y el Estado malgastó recursos en el mantenimiento de una inmensa burocracia, en el sostenimiento de empresas estatales ineficientes y deficitarias y en el respaldo a un enorme, caro y deteriorado sistema de bienestar social. Esta crítica situación se profundizaba además porque :

cuarenta años de adopción sistemática de esta filosofía crearon una educación económica en la población -funcionarios, empresarios, dirigentes gremiales, estudiantes e inclusive las propias Fuerzas Armadas que en 1976 se pronunciaron por su modificación-, que resulta muy difícil de erradicar.

El cambio de esta actitud fue uno de los objetivos de Martínez de Hoz y su equipo, ya que era necesario « un cambio de mentalidad, hábitos y actitudes para realizar transformaciones profundas ». Desde un comienzo el énfasis de la política económica fue puesto en provocar cambios estructurales. La restructuración de la economía fue la base sobre la cual se asentaría la derrota de la inflación. La lucha contra el aumento del índice inflacionario marcó el ritmo de la política económica del régimen militar y las características de la misma derivaron del diagnóstico de sus causas.

Como fue mencionado anteriormente, la causa de la inflación cuando Martínez de Hoz asumió el cargo era el déficit del presupuesto nacional. La solución a estos problemas pasaba así por la liberalización de la economía, la apertura del mercado a la economía internacional y la restricción de la participación estatal en la economía doméstica. Sin

embargo, luego de completada la primer fase del programa y realizadas las primeras reformas<sup>38</sup>, los niveles inflacionarios eran aún un problema. En 1977 una nueva fase del plan económico fue anunciada. El gobierno llamó a una tregua de precios. El punto más interesante de este intento de parar el incremento de precios fue el cambio en el diagnóstico de las causas de la inflación. El déficit presupuestario ya no era la causa única del problema inflacionario ; de ahora en adelante los sectores industriales serían tan responsables como el Estado por el espiral inflacionario. Mientras la primer fase del programa solo pedía responsabilidad en el ajuste de precios por parte de los industriales, la segunda la demandaba.

Los controles de precios fueron eliminados, los sueldos pasaron a ser determinados por el gobierno y el peso fue devaluado. Hemos observado en el pasado que ciertos sectores o empresas se han aprovechado de su situación, de alguna manera monopólica o de oligopolio en el mercado, para efectuar frecuentes o grandes aumentos en los precios. Quiero advertir que estas situaciones van a ser observadas muy de cerca y que, llegado el caso, sabremos adoptar todas las medidas necesarias dentro de la amplia gama que tiene el Estado, desde las medidas arancelarias para permitir la importación, hasta las de otro orden, para que estas empresas entren en razón y no ejerzan prácticas contrarias a una actuación leal en el mercado.

Esto significó que uno de los elementos articulados dentro de la cadena discursiva Orden, las organizaciones empresariales, era acusado de no respetar los principios dictados por el Proceso. La fracasada lucha para bajar los índices inflacionarios deterioraba constantemente la capacidad articuladora del gobierno militar.

La tregua de precios fue considerada por el gobierno como una medida temporaria para facilitar la transición a una nueva política monetaria. En junio de 1977 fue anunciada una



reforma financiera que implicaba la liberalización del sistema bancario argentino. Los cambios más importantes fueron dos. Por un lado, se revocaba la legislación por la cual todo el crédito estaba controlado por el Banco Central (hasta 1977 el gobierno determinaba el crédito disponible y elegía los grupos económicos que iban a recibir el crédito). Por el otro, fueron liberadas las tasas de interés, ahora los bancos podían ofrecer y cobrar las tasas de interés que consideraran apropiadas.

La reforma financiera fue implementada al mismo tiempo que terminaba la tregua de precios. Pero este nuevo esfuerzo fue un fracaso. Este período se caracterizó por una creciente inflación, dado el final de la tregua de precios, y por los primeros síntomas de recesión económica. Una de las consecuencias de esto último fue el aumento significativo de los niveles de desempleo. Esto es importante si se tiene en cuenta que el abandono de esta política se debió a presiones de las Fuerzas Armadas, que desde un principio rechazaron cualquier tipo de política que implicara desocupación. Las razones alegadas estaban relacionadas con la seguridad nacional. De esta manera, incluso los indicadores económicos objetivos a los que Martínez de Hoz prestó mayor atención se estaban deteriorando. Una nueva fase del plan económico se hacía inevitable porque era necesario mostrar resultados positivos. La lucha antiinflacionaria fue un arma de doble filo para el equipo económico de la Junta. Una vez que la misma fue identificada como el objetivo principal de la política económica, sólo el éxito podía justificar la permanencia de Martínez de Hoz y su equipo en el gobierno militar.

En diciembre de 1978 se anunció la profundización y ajuste del plan económico. Las nuevas medidas tendían a dar :

un marco de referencia al sector privado, cierta orientación y seguridad con respecto a la evolución de algunos factores económicos y financieros, cuya ausencia, desconocimiento o

errónea interpretación en el pasado ha llevado a que exista una tendencia por parte del sector privado de sobreprotegerse y de reciclar la inflación a un nivel de expectativas desmesuradas.

El problema a resolver por el equipo económico era cómo bajar la inflación sin caer en recesión. Con este propósito se inauguró una nueva política anti-inflacionaria. Alfredo Martínez de Hoz, *Boletín Semanal n° 172*, Ministerio de Economía, Buenos Aires, 14 de marzo de 1977.

La ventaja de la nueva solución residía en el hecho de que no requería desempleo ni controles estatales en el mercado (como los ajustes más ortodoxos o los controles de precios por ejemplo). El gobierno usaba en el corto plazo y de una manera intensificada instrumentos que conformaban la racionalidad de las reformas estructurales de largo plazo : la apertura de la economía y la liberalización del mercado de capitales. La idea era utilizar la competencia externa para controlar la inflación. Los productos importados baratos domesticarían a los ineficientes productores locales.

La nueva política tenía dos componentes principales. Por un lado se intensificaba la apertura de la economía por la baja de aranceles de importación. Por el otro, se reducía el índice de devaluación de la moneda. Martínez de Hoz anunció la variación de la tasa de cambio para todo el año entrante. Durante este período la moneda sería devaluada repetidamente, cada vez en un porcentaje menor. La característica principal de la « tablita » era el incremento predecible del valor del peso comparado con el dólar. Un dólar barato resultaría en productos importados a menor precio que, a su vez, forzarían a los productores locales a reducir costos y, por lo tanto, detendría el ritmo inflacionario.

Las consecuencias para el sector productivo fueron predecibles. Las pequeñas y medianas empresas fueron las que más sufrieron cuando importaciones baratas comenzaron a competir con sus productos, que anteriormente estaban protegidos.

Incluso empresas multinacionales comenzaron a sentir esta presión, siendo el cierre de General Motors el ejemplo más representativo. Las consecuencias de esta fase de la política económica del régimen militar fueron la recesión económica y la desindustrialización. Las principales entidades corporativas comenzaron a reclamar cambios en la política económica seguida por el gobierno militar. El 18 de octubre de 1979, la Unión Industrial Argentina pidió que la reducción de las tasas de importación se frenara hasta que el gasto estatal fuera reducido. En agosto de 1980, la Sociedad Rural Argentina cuestionó por qué todo estaba siendo liberalizado excepto la tasa de cambio<sup>45</sup>. Otra característica importante de este período fue el creciente endeudamiento del país. La liquidación del banco privado local más grande, el Banco de Intercambio Regional, fue la estocada final al programa económico de Martínez de Hoz. Otros bancos quebraron durante el mismo período y como los depósitos estaban garantizados por el Banco Central, debieron ser pagados con dinero del Tesoro. Casi al mismo tiempo, el sucesor del General Videla estaba siendo elegido dentro de las fuerzas armadas. Esto agregó incertidumbre política a la generalizada crisis económica. La inseguridad general tuvo como resultado el desastre económico.

El régimen militar fue incapaz de controlar las diferentes variables económicas. Esto implicó que el Proceso dejó de proveer un principio de lectura para la dislocación que suponía la crisis económica. La cadena discursiva *Orden* comenzó así a disolverse. Incluso los elementos más favorables de la cadena, los intereses agropecuarios e industriales, quitaban su apoyo al gobierno. Desde este momento y hasta el final del 42. Así fue

denominada esta política en Argentina. En la jerga económica este tipo de política se denomina « a passive crawling peg ».

La actividad industrial no creció entre 1970 y 1980. En 1970, la industria representaba el 28 % del PBI, régimen los militares intentaron infructuosamente controlar la situación. Luego de la derrota de Malvinas la situación empeoró tanto política como económicamente. El espiral inflacionario creció hasta alcanzar niveles récord y volvieron los problemas con la crisis fiscal.

La incapacidad de controlar la economía de acuerdo al orden prometido en el mito del mercado libre debilitó a la cadena de equivalencias Orden. Al mismo tiempo, las consecuencias de este mito también contribuyeron a la inestabilidad de la formación política. La apertura de la economía a la competencia extranjera provocó el desmantelamiento de la producción industrial. La presencia de bienes importados baratos en el mercado tenía como intención crear un excedente en la producción nacional que provocaría una baja en la inflación. Esta última sería el detonante del tan esperado crecimiento económico. Pero el privilegio de la lucha anti-inflacionaria implicó que cualquier estrategia de crecimiento quedara a un lado. El sector industrial adoptó así una actitud a corto plazo, « postergando todo proyecto de expansión productiva ». Fue por esto que la actividad industrial no mostró tendencia al crecimiento, al mismo tiempo que se registró una reducción relativa del valor agregado del sector manufacturero.

Muchas pequeñas y medianas empresas quebraron como consecuencia de la competencia extranjera. Los problemas económicos de estos productores provocaron que algunos cambiaran a actividades comerciales o especulativas. Muchos de ellos pasaron al sector informal de la economía, disminuyendo así la cantidad de empleadores en la población activa y creciendo el número de trabajadores independientes. Estas dos últimas variables

reflejan las consecuencias de la política económica para la pequeña y mediana empresa. Estos pequeños y medianos propietarios formaban parte del polo peronista del antagonismo que dividió la política argentina después de la experiencia peronista. Ellos eran la « burguesía nacional », « ineficiente y sobreprotegida » en el discurso liberal, y el « motor del progreso nacional » en el discurso populista. Este proceso de desmantelamiento de la industria nacional es parte de un proceso más complejo de concentración del poder económico. La unificación de intereses sectoriales durante la dictadura militar implicó una homogeneización de los sectores dominantes.

Esto se dio alrededor de una elite productiva, financiera y comercial que jugaría un rol muy importante más adelante. Este contexto, caracterizado por la recesión, el cierre de compañías pequeñas y medianas y la actitud cortoplacista del sector industrial, tuvo entonces importantes consecuencias para lo que aquí se denomina polo peronista del antagonismo que dividió la política argentina desde 1955.

La política restrictiva de salarios implicó una reducción drástica del salario real. La participación de los trabajadores en la distribución del ingreso cayó del 50 % en su punto más alto, a casi el 30 %. El poder adquisitivo del salario declinó en porcentajes calculados entre el 40 y el 60 % entre 1974 y 1982. Esta política restrictiva de salarios se complementó con una política de diferenciación salarial que modificó la estructura de remuneraciones del sector industrial. Como explicaba el ministro de Economía, la estratificación de salarios significaba que : poco a poco la pirámide salarial será revertida, y en lugar de tener una amplia base de mano de obra no calificada con bajos salarios, esta base se reducirá y el número de trabajos

Los salarios industriales sufrieron una drástica reducción. La evolución de los mismo entre 1975 y 1980 fue la siguiente : 1975=176, 1976=104, 1977=100, 1977=100, 1978=94, 1979=104, 1980=124.

Con oportunidades salariales más altas se incrementará a través de mejor formación y especialización técnica.

El peso del salario básico por horas trabajadas u horas extras declinó, dando lugar a otro tipo de ingreso como bonos por productividad o premios. Esto intensificó diferencias intersectoriales por la diversificación del ingreso entre los distintos sectores económicos. En Argentina, los salarios de trabajadores en categorías similares eran parecidos, sin importar el sector de la actividad. Estos cambios originados en las políticas que derivaban su contenido del mito del mercado libre produjeron la heterogeneización, fragmentación y estratificación de sectores populares tradicionalmente homogéneos. La reducción del empleo industrial es también un factor a destacar. Entre 1975 y 1980 el empleo industrial se redujo en un 26 %<sup>52</sup>. Sin embargo, esta reducción no implicó el incremento del índice de desempleo. El sector terciario absorbió parte del empleo previamente industrial. Este sector incluye una variedad de actividades, todas asociadas a diferentes formas de organización del trabajo, con características distintas en el proceso laboral, diferentes tradiciones culturales y formas de lucha . El crecimiento del trabajo independiente fue otra consecuencia de la reducción del empleo industrial. Este tipo de labor es una actividad no socializada y, en consecuencia, tiene poca tendencia a articularse colectivamente. Los trabajadores independientes eran el 19 % de la población activa en 1974 y el 23 % en 1978<sup>54</sup>. En las regiones más pobres del país el trabajo independiente tuvo un carácter mas informal, marginal y precario.

El fracaso económico del régimen militar tuvo consecuencias políticas importantes. Las formas de representación de los sectores populares fueron dislocadas y fragmentadas, un cambio fundamental si se tienen en cuenta las tendencias políticas tradicionales de Argentina. Los cambios en la estructura social y ocupacional entre 1976 y 1981 provocaron la heterogeneización de los sectores que formaban el polo peronista del antagonismo. Su identidad fue negada, desafiada por esos cambios. Paradójicamente la nueva estructuralidad del mito del mercado libre puede ser rastreada en sus fracasos.

En este sentido, el fracaso económico del régimen militar puede ser traducido como el debilitamiento de las identidades y la fragmentación de lo social. Este debilitamiento y esta fragmentación social provocados por el programa económico instauraron las condiciones de posibilidad para una nueva hegemonía en la Argentina.

El Proceso, como espacio discursivo, propuso una serie de cambios en respuesta a ciertas dislocaciones : la subversión y la inflación. El objetivo de estos cambios era la reforma estructural de la escena socio-política argentina. Sin embargo, la instrumentación y operacionalización de esos cambios fue un fracaso. El caso de los dos mitos analizados en este capítulo son buenos ejemplos de lo citado. Por un lado, el mito de la guerra sucia estaba constituido ambigüamente y pobremente articulado. Sin embargo, las consecuencias de la represión fueron claras. La no convencionalidad de la guerra sucia y la vaguedad de su contenido en el espacio mítico del Proceso provocó la José Martínez de H Villarreal, por ejemplo, señala el « bajo nivel de combatividad de estos sectores, su limitada tradición de lucha y su falta de cohesión derivada de su inserción en un mosaico heterogéneo de diferentes actividades », parálisis política de la población. El terror fragmentó los espacios públicos y dislocó las identidades colectivas. Por otro lado, la política económica del Proceso tuvo un contenido explícito desde el momento de su concepción. Pero el aumento

de los índices inflacionarios fue imposible de detener y la mayoría de las medidas tomadas por el equipo económico tuvieron un carácter cortoplacista y contingente. El mito del mercado libre provocó la reducción de la participación de los asalariados en el producto bruto interno, la desindustrialización y, fundamentalmente, la fragmentación de una tradicionalmente homogénea fuerza de trabajo.

Revisando la bibliografía sobre la política económica del régimen militar, la tentación de atribuirle una cierta instrumentalidad es grande. Las consecuencias estructurales, como vimos, parecen haber sido planeadas pensando en la imposición de cierto proyecto ideológico. Economistas como J. V. Sourrouille y A. Canitrot parecen haber caído en esa tentación. Ellos se refieren a un « objetivo disciplinario » de la política económica, o al « *contenido clasista* » de la misma. Pero al mismo tiempo ambos reconocen que el plan económico de Martínez de Hoz fue un fracaso. Para Sourrouille, por ejemplo :

Podrá discutirse si éste [el objetivo buscado por el programa económico de la Junta] fue sólo un duro intento de ruptura de los fundamentos de la alianza política urbano-industrial [...] o si efectivamente fue el de la construcción de una organización económica, política y social sobre nuevas bases y como tal fracasó sin mayores atenuantes.

Pero desde el punto de vista adoptado aquí, estos dos elementos no son parte de una alternativa como Sourrouille propone. Ambos aspectos, el quiebre de la alianza urbano-industrial y la nueva estructura social, son dos caras de la misma moneda. El quiebre de la « alianza defensiva » fue la base sobre la cual una nueva organización económica, social y política - una nueva hegemonía - fue construida, y ambos procesos se dieron en base a la lectura de la Junta Militar del principio de estructuralidad constituido por los componentes míticos de la guerra sucia y el mercado libre. Pero esta nueva hegemonía no fue una consecuencia intencional de la acción de la cúpula militar.



Más bien las consecuencias más importantes de la política económica entre 1976 y 1981 fueron las consecuencias no deseadas de la acción. Esto significa que el fracaso de la política económica produjo cambios mucho más importantes de lo que generalmente es aceptado. La dictadura militar quería producir cambios en la mentalidad de la población, pero estos cambios fueron mucho más radicales y profundos en relación a los fracasos que en relación a los éxitos de la política económica.

En el caso de la lucha anti-inflacionaria esto fue muy claro. Si la liberación de precios y el congelamiento de salarios no pudieron bajar la inflación, era lógico que se intentaran otras medidas. Más que una estrategia cuidadosamente planificada, el plan económico parece haber sido una continua y contingente respuesta a los altos índices inflacionarios. Como remedio a la inflación el plan fue un fracaso, pero sus consecuencias estructurales fueron muy importantes si consideramos lo que sucedió después. Puede decirse que el programa económico bajó los salarios para combatir la inflación ; que desindustrializó el país para incrementar la eficiencia de la producción capitalista por medio de la apertura de la economía al mercado internacional ; que liberalizó el mercado de capitales para estimular el uso eficiente de los recursos 55 Adolfo Canitrot, La disciplina como objetivo de la política económica. Un ensayo sobre el programa económico del gobierno argentino desde 1976, Buenos Aires : financieros ; que eliminó las restricciones a la entrada de capital extranjero para promover el desarrollo económico ; o que proclamó la naturaleza subsidiaria del Estado para controlar el déficit fiscal. Estos fueron los objetivos del programa, y como tal fue un fracaso. Debemos prestar atención a las consecuencias que van más allá del contenido literal del programa, que crearon nuevas condiciones para el juego político, cambiando las maneras tradicionales de hacer política en Argentina.

De esta forma, las dos condiciones para una práctica hegemónica se hicieron presentes en la Argentina : la presencia de una pluralidad de fuerzas antagónicas y la inestabilidad de las fronteras ideológicas que las separan. La presencia de una vasta área de elementos disponibles y la posibilidad de que los mismos sean articulados en campos opuestos permitió la constitución de una nueva práctica hegemónica en Argentina. Esto implicó que en la Argentina cambiaran las formas tradicionales de interacción política y que se abrieran nuevos espacios para diferentes articulaciones. El contexto en el cual estas nuevas articulaciones tuvieron lugar era una dictadura militar en retirada y una formación política desarticulada que tenía una sola referencia común : su carácter anti- Proceso. Parece entonces una mejor estrategia concentrarse, primero, en las consecuencias que van más allá del contenido literal del mito y que cambiaron las maneras tradicionales de la política en la Argentina creando nuevas condiciones para el juego político. Segundo, y tomando estos cambios como punto de partida, será necesario concentrarse en las nuevas articulaciones que resultaron de estas nuevas condiciones.

## **JUSTICIA E INJUSTICIA CON LOS JÓVENES DE BARRIOS POPULARES DEL GRAN BUENOS AIRES**

La percepción de la población acerca de la justicia e injusticia está sujeta a una reformulación evidente, debido en gran parte al proceso de transformación socioeconómica, los cambios en la estructura de oportunidades proporcionadas por el Estado y el mercado de trabajo, la crisis del marco institucional –y de las normas y valores interiorizados– y el derrumbe de las estructuras sociales que proporcionaban a los individuos una percepción de igualdad y seguridad.

El presente tiene como objetivo desarrollar, desde una perspectiva crítica, un análisis de dichos procesos y sus consecuencias para el desarrollo de las nociones de justicia en el contexto de sus prácticas políticas, por parte de jóvenes de sectores populares y de clases medias empobrecidas. Nuestro estudio intentó comprender cuál es la conceptualización que los jóvenes tienen de justicia e injusticia, noción estrechamente conectada a la esfera de la protección de los derechos y necesidades, como a la de una mejor metodología de distribución de bienes.

En los últimos años las ciencias sociales se encontraron ante la certeza del incremento de las desigualdades y las dificultades para analizar sus nuevas características. A las

clásicas desigualdades que se derivan del uso de indicadores económicos, divisiones de clase social o cuestiones de poder se suman "nuevas", inter e intra categoriales, más móviles y flexibles (Fitoussi Rosanvallon,1997). Por su parte Sennet (2000) señala cómo las dinámicas promovidas por el capitalismo flexible, detrás de un discurso que enfatiza la individualización y autonomía, afectan elementos fundamentales de integridad, identidad y compromiso de los sujetos. Cambian tanto los sentidos de pertenencia como los modos de socialización.

De forma paralela, en la Argentina la juventud comienza a ser nuevamente considerada como un todo homogéneo, lo que posibilita su estigmatización. Se los tilda de descreídos, vagos, delincuentes, poco participativos; oscilantes entre la abulia y la violencia. Ante la proliferación de discursos sobre ellos resulta fundamental acercarse a sus percepciones, los sentidos de sus experiencias cotidianas y los significados que adquieren. De allí que en este breve trabajo quisiéramos presentar algunas reflexiones a partir de una indagación en los riesgos, temores y sensaciones de injusticia en grupos de jóvenes de dos barrios populares del Gran Buenos Aires, Argentina.

El Barrio La Paloma se encuentra ubicado en la Ciudad de El Talar, partido de Tigre, en la zona norte del Gran Buenos Aires. Está delimitado territorialmente por la Calle 25 de Mayo, 11 de septiembre, la calle José María Gutiérrez y las vías del Ferrocarril Bartolomé Mitre. El partido de Tigre cuenta, según datos del 2003, con 300.559 habitantes. Está dividido en ocho delegaciones e integra una zona del conurbano bonaerense de buen poder adquisitivo en términos comparativos. De las setenta mil personas que habitan la ciudad de El Talar, el último censo indica que veintitrés mil

pertenecen a La Paloma.

Los barrios San Martín, el Tala, La Paz, Santa Rosa y Santa Lucía se encuentran en San Francisco Solano, Quilmes, al sur del Gran Buenos Aires. En el año 1981, en un hecho que lo convirtió en uno de los asentamientos emblemáticos, con la ayuda en la organización por parte de un cura de la zona, las comunidades eclesiales de base de la iglesia católica y cierto apoyo externo como la presencia del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel del Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), se promovió la ocupación de terrenos que tenían (y en algunos casos todavía tienen) dueño. En ese momento, próximo a la apertura democrática, existió ya una distinción entre lo legal y lo legítimo, compartida por personas con diferentes orígenes, muchos nuevos migrantes, otros que venían de reubicaciones y diferentes experiencias de asentamiento, buscando la concreción de un "barrio".

La sociedad argentina sufrió considerables transformaciones en las últimas dos décadas. La Paloma padece actualmente un índice de desocupación, según estimaciones oficiales, cercano al 50 por ciento. El barrio está considerado como uno de los más carenciados de la zona, a pesar de tener una amplia provisión de infraestructura y servicios públicos. Por su parte, en los barrios de Solano la situación es bastante diferente en cuanto a la infraestructura y similar en lo social. Existen pocas calles asfaltadas: la principal y las que rodean las escuelas, no hay estación de tren cercana ni servicio de cloacas, y al centro de Quilmes se llega luego de una larga hora de viaje en colectivo. La desocupación y precarización se extienden, a las que variadas organizaciones sociales intentan enfrentar con planes sociales, comedores, servicios para los afiliados, autoconstrucción de viviendas, panaderías y diversos

emprendimientos comunitarios.

### **Inseguridades laborales**

La Argentina se distinguió históricamente en el contexto latinoamericano, junto con Chile y Uruguay, en particular por sus amplias clases medias y en general por una estructura social más igualitaria que permitía la integración social donde el Estado cumplía un rol determinante. Este modelo integracionista alcanzará su fin en 1976. A partir de este momento, se dará comienzo a un gran proceso transformador de la sociedad argentina al encumbrarse en el poder un régimen militar que diseñó y ejecutó un proyecto político que articulaba "la lucha contra la subversión" –para lo cual se inició un fenomenal terrorismo de Estado–, y la redefinición del papel del Estado. El plan económico implementado desde 1976 apuntó a modificar radicalmente el modelo de acumulación de capital a partir de reformas estructurales orientadas a la valorización financiera en detrimento de la estructura productiva. La reforma financiera y la apertura comercial iniciaron un proceso de desregulación de la economía que reorganiza funciones y roles. Quedará en manos del mercado la responsabilidad de asignar los recursos; acotando el rol del Estado como productor de bienes y servicios. Estas reformas pusieron fin al creciente proceso de salarización de la clase media, a la vez que incrementaron la desalarización y descolectivización de la clase obrera.

La década del 90' será el escenario donde se consolidarán estas transformaciones. Con el inicio del plan de convertibilidad en 1991, bajo el mandato de Carlos Menem,

se retoma y profundiza el modelo aperturista del gobierno militar. Se implementa un plan de liberalización económica que estableció, entre sus características más relevantes, la reducción de aranceles a las importaciones, la fijación de la tasa de cambio, la libre convertibilidad de la moneda y el libre ingreso de capitales. A estas medidas se sumaron la reducción del déficit fiscal y un ambicioso plan de privatizaciones de empresas del Estado. A pesar del logro de la estabilidad económica en términos macroeconómicos, entre otras consecuencias de esta política se registró un deterioro de ingresos de los sectores asalariados, ampliándose la desigualdad. A esto se añade las modificaciones en la legislación laboral, que afectaron la estabilidad del empleo, disminuyeron el costo laboral y la responsabilidad de los empleadores. Un factor explicativo del incremento de la pobreza en los años '90 será el aumento del desempleo, que ya en mayo de 1993 alcanzaba el 10 por ciento de la población económicamente activa, pero que se elevaría a la inédita tasa del 18,6% en mayo de 1995, la más alta de la historia argentina hasta ese momento. En términos de relaciones laborales, el Estado redujo ostensiblemente su capacidad regulatoria en el mercado laboral, desarticulando los institutos laborales propios de la regulación fordista y favoreciendo formas de flexibilización de la contratación y de disciplinamiento laboral (Novick, 2002). Como se puede observar, el país atravesó en los últimos años un proceso que derivó en una sociedad dual, donde amplios sectores experimentan situaciones de inestabilidad, pobreza e indigencia<sup>1</sup>, que pone en riesgo de ruptura la posibilidad de cierta práctica recíproca de justicia.

Tradicionalmente, para los sectores populares y medios de la población la esfera de justicia se expresaba y vinculaba en referencia a los derechos sociales (Jelin:1996),

que no igualaba a todos pero brindaba sí garantías igualitarias de justicia. Implicaba de esta manera una construcción de la esfera de lo justo a través del acceso al trabajo, desdeñando la ciudadanía política. Pero la inestabilidad laboral resultante del ocaso de la sociedad salarial puso en cuestión el acceso a estos derechos y la estabilidad de los criterios de justicia señalados. Como señala Robert Castel, a la luz de las nuevas transformaciones operadas en la sociedad moderna con la crisis del Estado de Bienestar y de las regulaciones que éste había instituido, la desintegración del tejido social y la creciente masa de excluidos, una nueva cuestión social se abre en las postrimerías del siglo XX. En la problematización que realiza Castel de este nuevo fenómeno, presta especial atención a la inestable situación en que se encuentra el individuo ante el desmoronamiento de los grandes colectivos que lo contenían y que actuaban como matrices desde donde podía "desarrollar su autonomía". Castel apela a la noción de desafiliación para nombrar el proceso –compuesto por una "serie de rupturas" de vínculos– por el cual va atravesando el individuo hasta quedar aislado de los grupos sociales en donde se inscribía su pertenencia.

Ahora bien, es menester examinar la naturaleza de los procesos de exclusión y fragmentación social y el impacto que éstos tuvieron sobre los sujetos en el contexto latinoamericano donde las características de los mismos adquieren dinámicas diferentes a las de las sociedades europeas centrales. En primera instancia cabe aclarar que, tal como señala Kessler (2004) siguiendo a Altimir y Beccaria, la situación más habitual en el mercado de trabajo no es el desempleo de larga duración sino la inestabilidad y la precariedad, es decir creación de puestos de trabajo en condiciones precarias, con bajas remuneraciones, sin cobertura social y nula



protección al despido. De esta forma los jóvenes, pero también sus padres, van desarrollando trayectorias inestables, alta rotación, puestos por lo general de baja calificación y corta duración; intercalados con momentos de desempleo o subempleo, prácticamente sin posibilidades de que el trabajo se convierta en un espacio de socialización. Por otra parte no menor importancia adquiere el proceso de territorialización, fomentado tanto por las características del proceso productivo, la focalización en las políticas sociales, los intereses de algunas organizaciones y los propios sujetos que buscan en la comunidad cierta seguridad.

De esta forma en los sectores populares se produce una suerte de vuelta al barrio, existiendo un reflujo de las organizaciones sociales, las cuales asumen, ante la desconfianza en su papel, anteriores competencias o cuestiones garantizadas por el Estado y encabezan las demandas. Si es cierto que la inscripción territorial, en términos de Merklen (2005), da lugar a la politicidad de los sectores populares y a cierta idea de comunidad, también lo es que el espacio está desarticulado, fragmentado, lo que dificulta una adscripción a la organización más allá de la necesidad de hacerlo para acceder a un plan social o a algún bien. El conflicto, que anteriormente se resolvía en otras esferas, generalmente a través de la puja distributiva y las relaciones de fuerza resultantes, poco a poco se traslada a los barrios. Surgen distintos escenarios: negociaciones, conflictos, intercambios, diferentes lógicas de acción mediados por diversos arreglos territoriales. Se redefinen las condiciones de posibilidad a partir de límites precisos en tensión entre lo deseable y lo efectivamente realizable. Para muchos jóvenes su registro de experiencias, ante la desarticulación del mundo del trabajo y la baja eficacia de la ley (O'Donnell:2002),

está marcado así por la inestabilidad, las fronteras borrosas, la ambigüedad en su relación con las instituciones y las organizaciones barriales, los cambios en los criterios sobre lo justo y la manera de percibir sus derechos. El barrio es lugar de diferentes usos y apropiaciones por parte de los sujetos, no exentos de controles y regulación. Riesgos, temores e injusticias circulan y tienen lugar en el ámbito barrial. En el contexto de fragmentación social anteriormente señalado, la sensación de inseguridad se generalizó e impactó con contundencia en la vida cotidiana, reformulando o readaptando hábitos, conductas y prácticas rutinarias. Al temor por la delincuencia se sumó la inseguridad respecto a la estabilidad laboral. Sobre este telón de fondo impactan los formatos mediáticos de construcción de delito y configuración de un "otro amenazante", "sospechoso". En la conjugación de amenaza y pérdida que experimentaron vastos sectores de la sociedad, se puede leer una tendencia a la regulación de los espacios, el constreñimiento simbólico de la territorialidad, la disminución de los lugares y entramados de sociabilidad. Estas características están presentes en el barrio La Paloma, considerado como uno de los más carenciados de la zona. Cuenta con plena cobertura de asfalto, red de gas natural y la mayoría de las viviendas son de material. Sin villas de emergencia, cerca de la plaza central se ubica un asentamiento de dimensiones reducidas. Las zonas más empobrecidas no se alcanzan a percibir inmediatamente. Pero desde la topografía simbólica que surge de los relatos vecinales, se delimita una "zona comercial", las zonas "peligrosas" y aquellas por las que se debe transitar "con precaución". Con todo, cuando se recorre La Paloma, el contraste con otros lugares de Tigre es sorprendente. Un barrio que nació y creció impulsado por el desarrollo industrial en los años 70, sufrió

ostensiblemente las mutaciones estructurales durante la década pasada. Si la inseguridad civil había permeado desde los orígenes el barrio, estigmatizándolo como "violento" y "peligroso", en los últimos años el cierre y achicamiento de fábricas cercanas al barrio, fomentaron un elevado índice de desempleo y precarización laboral.

La inseguridad, la droga, la "vagancia", los "pibes chorros" y la prostitución, aparecen como marcas claras de la estigmatización del barrio como "pesado". Para Jorge<sup>4</sup>, que no reside actualmente en La Paloma, "siempre fue un barrio jodido, como decirlo, con mucho robo, había muchos malandras en La Paloma, mucha inseguridad". En tanto Carlos, que tampoco vive actualmente en el barrio, evoca su época de secundario para recordar que estaba acuñado el término "los palomeros": "Era sinónimo de quilombero, y había banditas que venían a pegar acá. Siempre La Paloma se la tuvo entre comillas. Después fue cambiando, pasó a ser San Lorenzo, el barrio jodido". No obstante, para Nora, antigua pobladora de La Paloma, esta caracterización negativa debe circunscribirse a una zona determinada: "Hay partes, sectores. Yo vivo en 25 de mayo y España. Eso es lo que tiene La Paloma. Hay zonas. Si vos caminás dos cuadras para allá es otro tipo de gente, otra realidad. De 25 de mayo a esta zona, es de terror. Una zona más pobre, más, no sé cómo decirte, y después, San Lorenzo, que era un barrio horrible, ha progresado muchísimo. Pero hay zonas muy marcadas de pobreza". En tanto Guillermo, también zonifica la inseguridad: "el paso a nivel, el puente del Talar, donde realmente hay mucha oscuridad, más que nada durante la noche. Asociadas al delito, también delimita ciertas zonas que operan como corredores de droga: está concentrado en una porción

del barrio, cerca de la escuela 47, de la calle Antares hasta Francia, es todo un corredor de ventas impresionante. Por ejemplo alrededor de la escuela 47 están las personas que son las que distribuyen y venden y vos vas a ver que van y compran".

Distintas experiencias vividas, relatos que circulan con fuerza de mito y la propia cotidianeidad, van trazando en el imaginario barrial una geografía simbólica del miedo ligado al delito. La Paloma aparece demarcada por zonas "transitables" y zonas oscuras, sombrías, donde se requiere de ciertos códigos de complicidad con sus moradores para poder desplazarse sin peligro de robo. Para Claudia, directora de un centro de Asistencia Social ubicado frente a la plaza central, ésta es un lugar "peligroso" en determinados horarios del día por la congregación de "jóvenes drogados"; para otros vecinos, tanto la plaza como la zona céntrica en general son zonas seguras, "no pasa nada". El límite de la transitabilidad se corre difusamente hacia un interior del barrio estigmatizado como peligroso por la eficacia del rumor, del cual se apropia Eliana, de 21 años, estudiante: "Por lo que me comentan hay una zona de allá, para abajo, que vos ves que hay mucha joda, fiestas, borrachitos, entrás pero no salís si no conocés a alguien... la cuestión es que vayas con alguien que conozcas, no importa la hora del día".

Esta cartografía del miedo al delito no se circunscribe, empero, al propio barrio, sino que se extiende a los barrios lindantes con La Paloma. Más aún, éste aparece como un barrio tranquilo en comparación con San Lorenzo y Ricardo Rojas, Las Tunas y San Pablo y, fundamentalmente, esa zona borrosa, lúgubre, acechante que es "el bajo". El otro peligroso se presenta como un intruso, un invasor, como alguien que al no ser vecino viola todo código de convivencia. Esta imaginario fomentado por ese

desplazamiento pendular entre rumor y experiencia vivida operó como un temor paralizante en la ola de saqueos desatada en diciembre del 2001, como lo reafirma Eliana: "Los sobresaltos de todo el tiempo se sienten; lo último fue el tema del 19 de diciembre del 2001. No podías salir a la calle, decían que toda la gente de la parte baja, de Ricardo Rojas, de la villa allá de 197, se venían para acá, que era un quilombo. Eso era lo que se comentaba, por eso la gente no salía; se comentaba pero al final no pasó nada", en referencia a supuestos saqueadores de otros barrios. En tanto para Pedro, cuyo hermano participó de los saqueos a supermercados, el "otro invasor" tiene un componente más xenófobo: "yo estaba un poco de acuerdo con eso (en referencia a los saqueos). Yo por ahí sigo de acuerdo con eso. No tanto por ahí con los de acá, pero estaría más de acuerdo con los chinos. Porque los chinos se llevan los bolsillos y se van a la mierda, y nosotros somos los que nos rompemos el tuje laburando para que vengan del extranjero y se lleven toda la plata que vos estás haciendo".

Pero además de otro "externo", "invasor", "de la villa", se reconoce un otro interno corporizado en la figura de los adolescentes y jóvenes que no trabajan ni estudian. A partir del mediodía, ellos circulan por el barrio caminando o en bicicleta; toman cerveza en grupo en las esquinas, fuman marihuana... están, permanecen... escrutan los movimientos para codificar quién es quién en el catastro barrial. Un lugar habitado con frecuencia por ellos es la plaza central, ubicada a unas cuadras del centro comercial de La Paloma. Frente a ella funciona la capilla, el centro de Asistencia Social y el Centro de Salud. Por la mañana circulan por ella fundamentalmente adultos y chicos que van y vienen de la escuela. A partir del

mediodía se apropian de ella, en distintos horarios y pequeños grupos, tres, cuatro, cinco; se sientan, fuman, ríen, se empujan, vuelven al silencio y después de un tiempo se van. A veces vuelven al rato, otras deambulan por el barrio. Todo transcurre de modo muy natural, los ritmos parecieran no alterarse.

Gladis atiende el quiosco que está enfrente de la plaza. Cuando le preguntamos por el barrio asoma cierta mueca de frustración entre las rejas que la separan de sus clientes: "Acá el principal problema es la inseguridad. Empezó desde hace un año. Porque antes era un barrio tranquilo... pero están estos pibes, estos vagos que se sientan acá en la plaza, a fumar droga, pibes de 13, 14, 15 años, que después se cruzan y te vienen a manguear cigarrillos. Y a partir de la tardecita se pone bravo". Pero paradójicamente, cuando intentamos profundizar el tema, se resguarda: "a mí acá en el quiosco nunca me robaron. El barrio es inseguro, pero como en todos lados", en un guiño de que le incomodaba dar mayores precisiones. A Claudia la separa de Gladis varios metros de vereda y una opinión más contundente en torno a la acechanza de ese otro intimidante: "De los tres barrios (San Lorenzo, Ricardo Rojas y La Paloma) acá es donde más se sufre la violencia, con el delito, a los más chicos los ves en la plaza, no sé si será porque estamos justo enfrente de la plaza, pero dentro de un rato ya se empiezan a ver, ayer mismo a esta hora se estaban peleando, en cualquier momento se agarran a las piñas y chau... se escapaban por acá y la policía lo corrió y lo balearon acá en la puerta, del lado de adentro, la policía tampoco se mide en eso... La policía sí... lo que pasa es que siempre pasa algo por acá en la plaza o en el centro de salud, y la policía no se mide y empieza a los tiros y escondete. Durante todo el día, antes se veía más a la noche pero ahora durante todo el día".

En el desplazamiento del otro exterior al otro interior, coexisten un sentimiento vergonzante por el afecto que traba el vínculo con jóvenes delictivos que conocen desde siempre, con la indignación provocada por la ruptura de códigos (el robo en el barrio, la violencia y el ataque a los conocidos y vecinos). En general, el joven sin trabajo y sin estudio que recorre el barrio sin itinerario fijo, carga con el estigma de chorro y drogado. Su sola presencia en una esquina o en la vereda ya supone una amenaza. Pero quienes han tenido algún pasado similar o para aquellos que están involucrados en alguna actividad de asistencia social, la actitud es más comprensiva y condescendiente. En este caso, la responsabilidad se desplaza a la falta de trabajo, la persecución de la policía, la negación de oportunidades por parte del Estado y la ausencia de regulaciones externas.

Algunos vivieron la experiencia de ser ese otro amenazante. En tal sentido, el caso de Pedro es significativo. Tiene 27 años, nació en Los Troncos, un barrio cercano. Hace tres años que vive en La Paloma pero conoce la zona desde siempre. Empezó a drogarse a los once años y pudo salir de la adicción a los veinte, con un tratamiento de rehabilitación. A partir de los 16, alternó changas y ocupaciones legales de carácter informal con trabajos ilegales, primero robos de poca monta y luego atracos a propiedades y supermercados. Pedro reconoce que lo hacía porque estaba drogado y no le importaba nada. A veces tenía alguna changa de construcción o reparto pero iba "para hacerle la pata a sus compañeros". Aclara que nunca robó en el barrio y que uno de los códigos era robarle al que tiene, no al que no tiene. Pedro marca una distinción entre su época y la actual en relación con el delito: "yo aparte de andar en la joda, mayormente laburaba. Vivía laburando. Y tanto no me dedicaba. Ibamos más

para hacerle la pata a mis compañeros que no tenían laburo. Hoy no hay laburo, no dan fuentes de laburo. La culpa no es de los pibes, es del Estado, del gobierno. Aparte que la sociedad misma te discrimina, te dicen ése estuvo preso, no le hablés eh, a ver si te contagia". Con todo, Pedro reconoce que "los pibes hoy por hoy no tiene códigos" y se lo atribuye al incremento en el consumo de drogas. "Para mí en los años '90 no había tanta droga como hay ahora. Drogas baratas, como la pasta base que te liman la cabeza".

Pedro dice que nunca lo robaron y cree que es porque lo conocen "yo digo, yo soy muy sociable". Pero a medida que avanza la conversación, el paisaje del "no pasa nada" se va sembrando de algunos temores. Al mencionar Parque San Lorenzo recuerda que una noche que tuvo que ir a vender una garrafa, un chico drogado intentó robarlo poniéndole un arma en la cabeza. "Y hasta que no le sacaron el arma yo estaba temblando". Reconoce que fue la única vez que sintió miedo por él y que lo asaltaron en el barrio, aun habiendo sido del palo. Hasta que el miedo abierto, sin ocultamiento, aparece en forma de confesión: "La Paloma hoy no es tan pesado. Acá te digo la verdad, yo tengo miedo que me vengán a robar de otro barrio, hasta del mismo Los Troncos (dónde él nació y vivió hasta hace poco). Los chorritos de acá se juntan con los de allá. Y los de acá no te van a venir a robar. En cambio el que viene de afuera y no te conoce..." devela Pedro, rememorando viejas tácticas.

El miedo asume una dimensión espacio-temporal. Rejas en los paredones, en las puertas de entrada, en las ventanas, en los kioscos; portones, alarmas en algunas viviendas. Hasta una cadena que clausura la puerta de entrada de la escuela 47 durante el horario de clase. Según los vecinos, las rejas en tanto dispositivo para



minimizar los asaltos son un fenómeno de los últimos años, pero están presentes en el noventa por ciento de las viviendas de La Paloma, tanto en los sectores de clase media como en los más carenciados. A esto se suma la protección policial y la seguridad privada que custodian varios negocios del centro comercial, mañana y tarde. Para Guillermo la interacción cotidiana supone entonces una situación de riesgo, pero de control del peligro potencial: "estamos todos medio acostumbrados, el que puede vive enrejado con llave, trata de andar en el horario diurno y después si ven algo miran para otro lado. Los que más o menos viven en el barrio hace mucho saben quién es quién, pero todos tienen el temor de 'yo no voy a ir a denunciarlos porque ponés en riesgo tu vida y la de tu familia' ". En tanto el temor de Pedro es qué le puede pasar a su pareja y su hijo cuando él sale a vender garrafas por la calle La precaución que toma es que ellos se queden con algún familiar mientras él no está en la casa, nos cuenta mientras coloca el vidrio en el local donde vive con su familia y utiliza para la venta de garrafas. "Si llego a poner un kiosquito acá quiero poner rejas", anticipa. El mismo caso es el de Rodríguez, quien dice que se turnan en su familia para no dejar nunca sola la vivienda.

¿Alcanza para disminuir el riesgo con dispositivos como las rejas? ¿o con que alguien de la familia permanezca en la vivienda para cuidarla? Como modos de regulación y neutralización, no sólo se debe circunscribir las prácticas y formas de comportamiento cotidiano a las zonas y los lugares "fuera de peligro", sino además a ciertos horarios y momentos del día. Si para Claudia el mediodía es un horario crítico para circular por la plaza aledaña al centro que dirige, para otros vecinos del barrio es la noche el momento donde se deben tomar recaudos. Daniel localiza el temor en un

lugar definido, en un horario determinado y ante actores potencialmente peligrosos: "Cuando voy a trabajar, a las cinco de la mañana, el trayecto habitual hasta la Panamericana para tomar el colectivo, es recorrido los lunes a la madrugada por las barras de pibes que vienen de Tropi (boliche bailable), en cualquier estado. La amenaza encarnada por los jóvenes 'drogados' y 'borrachos' los lunes por la madrugada modifica la rutina de Daniel: Yo ahí me cuidaba o trataba de evitar hacer el mismo recorrido que los pibes. Si sabía que ellos venían por acá yo iba por allá".

Pero no siempre se los puede evitar. ¿Qué sucede cuando se debe circular por el barrio, interactuar en el espacio público con aquéllos a quienes se les tiene miedo o se los percibe como una amenaza? Para Pedro la clave está en ser conocido: "Yo estoy en la esquina, pasan los pibes que andan robando, hola loco como andás... bien, loco todo bien. No tenés diez centavos? Para qué és? Para comprarme un cigarrillo. Le doy un cigarrillo. Bueno, gracias viste, y ya te da como una afinidad con los pibes".

-¿Si te conocen no te afanan?

"No te afanan. Claro, aparte hay como muchos tipos grandes de acá de La Paloma que a mí me conocen de años anteriores y saben lo que era. Y se corre el rumor. Claro, como que pertenezco a la jerga de ellos. Y entonces yo pienso que por eso me respetan".

Marta, la mujer de Rodríguez, también los conoce de toda la vida. Pero al ver a los grupitos de adolescentes y jóvenes consumir droga con frecuencia, teme por sus conductas imprevisibles. "No se puede hacer mucho: cerrar, tratar de no salir a la noche, hay que tratar de saludarlos, de establecer amistad, hola ¿cómo andas? Yo siempre voy a la iglesia que queda para allá, vuelvo a las 10 de la noche y sé que

están en la esquina y paso y les digo: hola chicos ¿cómo andan? Para que sepan que soy yo... y así vivimos".

### **Violencia institucional y sensaciones de injusticia**

El miedo como mecanismo de legitimación no es un fenómeno novedoso en la cultura política argentina. Para no retrotraernos demasiado, basta mencionar su utilización por parte del llamado Proceso de Reorganización nacional como punto de inflexión en cuanto a las maneras de entender y vivir la ciudadanía. Situación no del todo saldada desde el regreso a la democracia. Así en los tempranos 80' la juventud, a pesar de la euforia de la recuperación de la democracia, empieza a ser definitivamente vista como problema (Braslavsky:1985), un "otro" peligroso, dueños de actitudes extrañas, incomprensibles a los ojos de los adultos.

A partir de los años '90 prevalece este tipo de discurso negativo y paternalista, junto con una situación de crisis económica y social. Ello potencia prácticas comunes de la cultura política argentina basadas en una relación vengativa amigo-enemigo como los casos de gatillo fácil, la violencia policial y la violencia institucional en general. Luego de la denominada Masacre de Ing. Budge en 1987 –donde un grupo de jóvenes fue asesinado en un barrio popular–, el caso de Walter Bulacio, muerto en una comisaría después de un recital de rock, fue de los primeros en captar la atención de la opinión pública. A los que se sumaron, entre tantos otros, el de Sergio Schiavini mientras tomaba algo en un bar, producto de disparos de la policía que perseguían supuestamente a delincuentes; los de Mariano Wittis y Darío Riquelme, el de

Sebastián Bordón en una comisaría en Mendoza, la llamada Masacre de Floresta donde un policía que trabajaba de custodio privado asesinó a tres jóvenes, o Carla Lacorte, quien quedó paralítica al recibir un disparo de la policía durante un tiroteo en el que estuvo atrapada hasta la muerte de Ezequiel Demonty encontrado en aguas del Riachuelo en La Boca, después de que a la salida de una bailanta la policía lo detuviera con unos amigos y los hiciera meter en el agua como "escarmiento". Como señalan los informes de Correpi para 2003 y 2004, "casi todas las víctimas responden a una misma definición de clase: jóvenes pobres, desempleados y excluidos" (Informe Correpi 2003 y 2004).

La proliferación de casos de abuso policial ha generado varias movilizaciones y reclamos donde la búsqueda de justicia es el eje central. Sin embargo a pesar de la mayor visibilidad de familiares y amigos, este tipo de hechos no ha disminuido: existen dificultades de articulación de acciones entre los protagonistas de los diferentes episodios (entre los más organizados se encuentran Las Madres del Dolor, Correpi y Cofavi), escaso acompañamiento por parte de otros sectores, las condenas obtenidas no han sido en todos los casos las esperadas y desde ya pocos adquieren presencia masiva. En contraposición, se va instalando la inseguridad como problema central que acapara la atención pública y colabora en la construcción por parte de la sociedad de una imagen sobre los jóvenes "normales". La difusión de conceptos prácticamente nuevos como violencia y delincuencia juvenil sirven no sólo como se presume para delimitar nuevos fenómenos sino para intensificar un cierto control social que asegure un desarrollo "normal" de los jóvenes según ideas no concebidas por ellos. Sin negar que muchos jóvenes consuman alcohol o drogas, o protagonicen

hechos violentos, la paranoia y el temor de otros sectores sociales genera que algunas zonas de la ciudad sean espacios vedados, legitimando los abusos policiales. El mantenimiento de la jerarquía se impone sobre la igualdad de trato como valor a preservar. Si ya es dificultoso para personas de clase media como los casos señalados que se enfrentan por primera vez con la administración de justicia (Cingold 1991), dichas diferencias se intensifican en los sectores populares. Lo cual no es un tema menor, ya que el hecho mismo de contar con la instancia de acceso a la justicia, la referencia a la ley a la cual las distintas clases sociales deben acatar implica uno de los principios fundamentales de la ciudadanía (Nun 2000).

¿Cuáles son las bases sobre las que se asienta el predominio de la jerarquía, donde la búsqueda de seguridad parece imponerse sobre el acceso igualitario a la justicia? Paradójicamente muchos grupos de jóvenes que padecen la desigualdad de trato reproducen similar orientación normativa, configurándose así una hegemonía discursiva en torno al tema.

Veamos por barrio. Para los jóvenes de los barrios de Solano, la presencia del poder a través de la fuerza policial y sus diferentes ramas represivas o la seguridad privada pasa a ser vista siempre como amenazante, con las cuales la mayoría tuvo malas experiencias como detenciones arbitrarias y malos tratos. En el relato de los protagonistas constantemente la desigualdad en el trato aparece como una de las cuestiones más destacadas. Carlos tiene 29 años, dos hijos y actualmente, después de transitar los más variados trabajos, realiza la contraprestación del Plan Jefes en un comedor organizado por su suegra. Recordando sus viajes a Capital para ir al trabajo se destacaban las detenciones constantes: "capaz que pensaban que uno era un

delincuente porque vive en un barrio así. Pero hoy por hoy yo me doy cuenta que los delincuentes no viven en un barrio así. Por lo menos lo veo yo. Ahora los delincuentes andan de traje y corbata" (Entrevista con Carlos, 29 años).

Se incrementan la desconfianza y el surgimiento de la idea de que el castigo siempre cae sobre ellos, lo que aumenta la sensación de injusticia.

"A lo que si te llevan por tu cara nomás. A mí cuantas veces me llevaron" (Luis, 25 años).

"Están metido los comisarios, no va a estar metida la gente que necesita" (Lorena, 20 años).

"A mí me hicieron causa, nos fuimos de vacaciones con todos mis amigos, fuimos con la murga, y es gente extraña la de ahí, nos ven a nosotros que somos así re bardo, y ellos son así re capital, digamo.

P: ¿Hay mucha diferencia?

"Si que hay diferencia porque... más de uno te ve y parece que se asusta, no sé por qué será así. Se piensa que son más que los del barrio, los de capital, yo no puedo ir al shoppin porque te miran mal, esa es la verdad; no sé qué piensan, que te vas a robar algo" (Lucas, 18 años).

Las distinciones por cuestiones vinculadas a "la cara" o "por vivir en un barrio así" que aparece en sus palabras expresan, vivenciando en carne propia, la desigualdad de variados ámbitos sociales. O como comenta Lucas "Re capital y re bardo" diferencian en el discurso y en los hechos la conformación de comunidades de referencia distantes. La desigualdad se palpa en el propio cuerpo. La justicia deja de ser pensada como una esfera racional basada en criterios compartidos por la comunidad

(Heller:1993) pasando a depender de casos personales:"es justo porque no tenía qué comer", "si es justo para otros, también para mí", "es injusto no poder entrar ahí", etc. Muestra que si el Estado está más presente en las necesidades de las familias, no cumple con el rol institucional esperado de garante de la igualdad ante la ley. En una escenificación real de una relación con "la justice à quarante vitesses" (Wacquant 2001), que da a entender un tratamiento groseramente desigual de la justicia penal para diferentes categorías sociales e infracciones. Al aumentar la brecha entre sectores sociales el sentido de justicia se redefine, pasando de un principio de aplicación general a una enunciación práctica que dependerá de la situación.

Al estar la sensación de injusticia vinculada a cuestiones individuales, también está presente la idea de que no le toque a uno. Esto lleva por un lado a la distinción entre "policías buenos y malos" pero fundamentalmente respecto a lo legal y lo legítimo, perdiéndose valores comunes de referencia sobre la ley y cuestionando la legitimidad de ciertas normas. Así, vinculado a la sensación de desprotección, aparece una legitimación de la búsqueda de justicia por mano propia en defensa personal; que lejos de ser irracional entronca con la experiencia popular de revalorizar al honesto trabajador como pauta de conducta a seguir. De alguna manera los diversos tipos de intentos de justicia por mano propia, tan comunes en el Gran Buenos Aires, están mostrándonos una nueva cuestión que pasa de lo privado a lo público. El ejercicio de justicia privada no sólo es considerado justo sino que pareciera ser una pauta habitual de comportamiento, en sintonía con el aprendizaje a valerse por sí mismo, el tener que defender lo propio que tanto costó conseguir. Los méritos, la necesidad y la primacía en las relaciones o el conocimiento representan lo primordial, dificultando

la conexión de nociones extensibles al grupo de pertenencia con un principio de vigencia universal.

¿Qué sucede en la relación entre los jóvenes y sus vecinos?, ¿qué percepción en definitiva sobre lo justo e injusto construyen en el momento de las prácticas políticas?

En los barrios no existen organizaciones autónomas de jóvenes ni instancias de socialización brindadas por el Estado (aparte de las escuelas), por lo que las opciones quedan restringidas a sumarse o no a algún tipo de organización ya existente. En el tipo de política social implementada, la definición técnica de la necesidad desplaza a la política, perdiendo ésta la capacidad de cambiar el destino de la gente (Frederic 2004), y traslada la responsabilidad al barrio. El Plan Jefes/as al articular la vida comunitaria en tanto disputa por un derecho de inclusión (Grimson y Cerutti 2004) condiciona las actitudes de los sujetos. Si a primera vista, en cuanto al diseño del Plan, representan los grupos etarios más afectados ya que no tienen acceso al mismo salvo que tengan hijos, y por lo tanto puedan ser considerados justamente jefes/as de hogar, su suerte dependerá de la serie de relaciones que entablen; lo que se extiende a otros escenarios, como el acceso al comedor, la bolsa de mercaderías o los servicios de las organizaciones. Para muchos otros será el ámbito de la calle el lugar reconocido, vivido como propio, donde transcurre gran parte de la vida, y también el lugar donde sea por necesidad, por bromas<sup>14</sup>, por pasar el rato ocurren situaciones conflictivas, algunas vinculadas a hechos delictivos.

A la vez las organizaciones sociales reglan permanentemente dichos espacios con la preocupación de "sacarlos de la calle", pero también desde el Estado se insta a su autoorganización como a través del Proyecto Adolescentes (para jóvenes de 14 a ¡21!



años que deben presentar sus emprendimientos). Es como si de pronto se percibiese que "hay que hacer algo por los pibes". Es ahí cuando se organiza alguna charla, la murga se potencia e incluso muchas madres van detrás de ellos para que se acerquen al trailer sanitario que cada tanto llega a los barrios para obtener algún tipo de anticonceptivo. En torno a la normalidad y la necesidad de regular espacios en los barrios, Estado y organizaciones se homogeneízan ante la "dificultad de sumar a los pibes", intentando que queden así inmersos dentro de los arreglos territoriales que mencionábamos anteriormente. Pero las soluciones posibles se vinculan, dadas las características del contexto y con un Estado que transfiere la responsabilidad a las organizaciones con las propias respuestas generadas por los jóvenes, desde los márgenes. Los cazadores de los que habla Merklen (2000) o los proveedores cuya fuente de legitimidad de obtención de recursos se base en aplacar necesidades (Kessler 2004), pueden sumarse circunstancialmente en estos arreglos. Al igual que en otros espacios de su vida, el compromiso es lábil. Quizás una de las imágenes que mejor representa la situación de jóvenes que en muchos casos son padres o madres, o tienen amigos con hijos, es que pasan por las mismas privaciones que los adultos y se saben postergados en el momento de distribución de los bienes a menos que entablen relaciones privilegiadas con las organizaciones, lo cual implica acatar una imagen de joven normal.

Su mirada hacia las mismas trasunta desconfianza, quizás un rasgo principal de la cultura política del país, buscando más bien actividades que los vinculen a sus grupos de pares u otros espacios como la escuela. Lorena tiene 20 años, es hija de un matrimonio que participó de la toma de terrenos, y la menor de cuatro hermanas.

Estudia en un instituto terciario en el centro de Quilmes, donde además terminó la secundaria. Allí conoció por primera vez lo que es un centro de estudiantes. Cobra el Plan y la contraprestación comunitaria la hace en unas huertas comunitarias de una de las organizaciones barriales. Tiene una visión bastante particular acerca de los jóvenes del barrio, distinguiendo su situación de la de los demás:

A mí me importa porque creo en el futuro, si no me importara no tendría ni ganas de terminar el secundario. Me cagaría en todo. Pero no, quiero seguir estudiando, seguir mi carrera y tener algo para mí. Yo creo que los jóvenes de ahora son muy vagos, muy... tengo amigos que son así. Yo estoy participando en una murga. Allá en el barrio. Yo estuve en todo y acá estamos. Por suerte. Y los pibes ahora son muy panchos porque tienen todo servido. O sea son muy nenes de mamá. Salen, pero a hacer cagadas. Desayunan con vino. Viven tomando, fumando.

La construcción resultante es ambigua, variando constantemente entre la idea de derechos y las necesidades, tener lo propio y los amigos de la murga, descubriendo la tensión jerarquía-igualdad y la distinción con otros jóvenes que "salen, pero a hacer cagadas". También Luis de 25 años, quien luego de trabajar en el depósito de una juguetería y diversos tipos de changas, no siente que tenga que sumarse a alguna organización porque todavía no adquirió la forma más novedosa de la normalidad, tener el plan, se distancia de quienes paran en la esquina sin hacer nada; alguna vez acompañó a un amigo a una marcha. En definitiva parece extenderse la búsqueda personal, diferenciadora del otro cercano.

"Sí, fui a una vuelta, me enganché y..."

P: Y cómo fue eso?

"Y agarramo, 'hicimo' una caminata. Hasta ahí, reclamaban, le pedían carne, no sé qué. No, fui a acompañar a un amigo ahí, porque yo no tengo ningún plan, porque no tengo familia. Vamos, me dice, vamo' le digo".

Estos relatos expresan las dificultades para integrarse al mundo adulto por parte de jóvenes que no adquirieron el estatus que asegura el pase a la normalidad y la reciprocidad: el trabajo<sup>15</sup>. En este punto es pertinente la perspectiva de Tonkonoff (1998, 166 y 167) cuando señala que "son ciertos consumos, ciertos gustos, ciertas actitudes y gestos, los signos que configuran una forma hegemónica de ser joven producida y reproducida massmediáticamente..., y es al mismo tiempo el juego de esta normalidad hegemónica, el que los hace fácilmente vulnerables". Vale recordar que Maristella Svampa (2004), sugerentemente, ha señalado cómo la demanda de normalidad legitima la brecha impuesta por el modelo neoliberal. El campo de lucha en torno a la normalidad es también acerca del tipo de ciudadanía en construcción. Los usos del cuerpo, la vestimenta, la gorrita o el cuello para cubrirse la cara, simbolizan a la vez la producción personal y la identificación como joven mientras los aleja de la normalidad (auto) impuesta.

Que en definitiva "por los barrios" pretende ser un intento de rejerarquización y regulación que marca lugares y espacios donde los jóvenes pueden o no estar, así como varias de sus prácticas y que ellos reproducen. La manera en que se relacionan y se acercan los jóvenes al espacio público, y especialmente qué cuestiones de la esfera privada se hacen públicas, tiene repercusiones en la adquisición de prácticas sociales, e implica no sólo qué derechos son/o no reconocidos y garantizados sino también las responsabilidades y los marcos donde se desarrollan las acciones

individuales y colectivas generando nuevas nociones, precarias, inestables, provisorias, sobre lo justo.

### **Miedos e injusticias, vinculados con lo político**

Los reclamos surgen cuando se sienten injusticias. En el mundo moderno la justicia ha sido vista como una esfera racional, alejada de las pasiones, como el otro indicado de común acuerdo para hacer cumplir las leyes. Por su parte la experiencia de lo injusto es una manera de aprendizaje, lo que no puede ser, que no se tolera, que legitima o deslegitima ciertas demandas. Las variaciones de la noción de justicia en diferentes grupos de jóvenes nos muestra en definitiva la manera en que tematizan la igualdad y la desigualdad. Lo justo e injusto pareciera definirse desde lo personal, a partir de la vinculación o el caso particular, de acuerdo al lugar que cada uno ocupe en el territorio; definición sólo extensible a la comunidad de referencia. En este sentido la ambigüedad entre jerarquía e igualdad que traspasa varios espacios de la vida de grupos de jóvenes, posibilita la emergencia en sus discursos de la legitimación de la obtención de lo propio o la búsqueda de justicia por mano propia en defensa personal que entronca con el discurso hegemónico en cuanto a la seguridad. Tal como señalan Feixa, Pallarés y Costa (2002) el fenómeno intolerante es residual, cíclico, se retroalimenta de la misma sociedad, explotando esporádicamente en hechos que adquieren relevancia pública vinculadas a imágenes del pasado histórico y a nuevas formas de discriminación presentes en sectores sociales mucho más extensos.

Podemos adaptar al caso argentino lo que un autor comenta para Chile: "entre los principales logros que se pueden atribuir al período militar, en el nivel simbólico, fue subordinar la validez de los valores democráticos al cumplimiento de otros valores, como el orden social, el esfuerzo individual y el éxito económico" (Medina Carrasco 2002:126). En momentos que la justicia tiende a ser pensada en forma de casos particulares (Fitoussi y Rosanvallon 1997), y ante procesos donde se desdibuja la idea de un tercero que intervenga en los conflictos, es necesario repensar los mecanismos de redistribución así como las normas de justicia en la sociedad. Grupos de jóvenes se habituaron, y lo hicieron extensible a sus prácticas políticas, a un tipo particular de democracia. Sin bases sólidas de recursos de apelación legítima de derechos y saberes podría pensarse que sus actitudes políticas se vinculan mejor con tradiciones populistas o de democracia formal, que con una sociedad participativa donde la justicia social tenga carácter sustantivo para todos sus miembros. Una de las herencias más fuertes de la dictadura militar que en los barrios, a su manera, se trata de enfrentar.

La criminalización del hecho de ser joven, las imágenes de los medios de comunicación presentando jóvenes rebeldes, o aquellas mismas construidas por sectores tradicionales de poder viéndolos como peligrosos, nos alejan de la posibilidad de indagar en sus significados. El espacio público, el tiempo del ocio, se han convertido en la forma por excelencia de relacionarse, legitimarse y buscar su identidad particular y grupal de grupos de jóvenes también en el Gran Buenos Aires. En cierta manera buscan un espacio propio donde no son estigmatizados: la murga, los amigos, la calle; pero también la escuela, el recital o alguna marcha al voleo

donde intentan adquirir un sentido a sus vidas. Los cambios en los hábitos y en las formas de ocio de los jóvenes son un producto social, reflejan a la vez cambios no sólo en la cultura juvenil y las costumbres sino también –y esto adquiere mayor trascendencia– en las relaciones sociales, en la interacción entre individuos, en las oportunidades de vida y en la construcción de ciudadanía resultante.

Distintos grupos de jóvenes, más que prácticas contraculturales, a la vez que padecen un avasallamiento de sus derechos individuales muestran un intento de situarse en una posición diferente a la de sus otros cercanos, contradictoria pero que nos señala la centralidad de los derechos civiles. Lo que deja abierta la posibilidad de pensar y discutir los distintos sentidos sobre lo normal y los tipos de ciudadanía en construcción. Reflexionar en torno a los nuevos registros de experiencia de los jóvenes pero a la vez indagar hasta qué punto las políticas públicas y nosotros mismos no contribuimos a fijar límites más que posibilitar condiciones de realización.

## **BIBLIOGRAFÍA**

ATILIO, A : “Pluralidad agonista”. Revista Internacional de Filosofía Política N° 8 Madrid. 1996.

BADIOU, A: “La violencia simbólica: su rango de ampliación”. En “La cuestión del otro”. Instituto Hannah Arendt. Buenos Aires 2004

BANCO MUNDIAL: “Informe sobre desarrollo humano mundial 2000-2001”. Revista Foro Nro. 10. Chile. En-Febr. 2002

BOBBIO, N: “El futuro de la democracia ”. Fondo de Cultura Económica. México; 1986.

BORRADORI, G: “La filosofía en una época de terror”.2004

CABANCHIK, S: “Yo, las cosas, los otros”, en “ Introducción a la filosofía”. Edit. Gedisa.

CARRIO,E: “Hacia un Nuevo Contrato Moral “ Edit. Norma. 08-2004. “El Contrato Moral; arca de la dignidad nacional” ARI, Mar del Plata.Oct. 2004

CELS: “Derechos Humanos en Argentina: Política de seguridad, violencia institucional, exclusión.” Buenos Aires 2004

CISNEROS, L: en “Página 12”. 17-09-2004

CORSI Y PEYRU: “Violencias sociales “, Buenos Aires, Argentina 2003

DURAN, D: “La infancia en peligro en la Argentina” Ecoportal. Net.

EDREIRA, M: “De los actos impunes a la infancia intimidada”. En “Actualidad Psicológica” Buenos Aires. Mayo 2003

FOUCAULT, M: “Vigilar y castigar” Edit. Siglo XXI. México.1993

“La voluntad del saber” Ídem. 1985.

“Coraje y verdad”. Conferencias en College France. Paris.1983

GARCÍA CANCLINI, N: "Cultura y violencia simbólica. Sociedad: una introducción". Cuadernos De Divulgación. e Información. México 1981

GIBERTI, E: "Vulnerabilidad psíquica y social" Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales.Univ.Hebreo- Argentina. Buenos Aires. 1998.

"Los clientes y la vulnerabilidad social" En Pagina 12 10-11-2004

HOLLOWAY, J: "Cambiar el mundo sin tomar el poder". Edit. Herramienta, Buenos Aires

INDEC: "Encuesta permanente de hogares". Diciembre 2004.

MAFFIA, D "El contrato moral" en Instituto Hannah Arendt. 2004.

MARCONI, A: "Pobreza, La Deuda Interna". En "Futuro", "Página 12". 27-03-2004.

MURILLO, S: En "Página 12". 21-11-2004.

OMS: 51ª sesión, Comité Regional Europeo. Madrid. Sept. 2001.

PÉREZ CHÁVEZ, K Y ZALDUA, G: "Contextos violentos, vulnerabilidad y resiliencia", "Violencia y Psicología". Eudeba. Buenos Aires, 1999.

TOURAINÉ, A:"Crítica de la modernidad". Fondo de Cultura Económica. 1984.

UNICEF ARGENTINA: "Sobre el estado mundial de la Infancia".2004

VIGLIOLA, E Y SUBATOVSKY, I: "Resiliencia o capacidad de sobreponerse a la adversidad". Medicina y Sociedad. Suárez Ojeda. 1983. En "Actualidad Psicológica". Mayo 2004.

ESCOBAR, Justo y VELAZQUEZ, Sebastián: *Examen de la violencia argentina*; Fondo de Cultura Económica, Mexico, 1975.

Del OLMO, Rosa: *América Latina y su criminología*; Siglo XXI, 1981.

FEINMANN, J. P.: "Estado policial y novela negra en la Argentina" En: PETRONIO, G., RIVERA, J y VOLTA, L.: *Los héroes difíciles. Literatura policial en la Argentina y en Italia*; Corregidor, Bs.As., 1991.



- GEERTZ, Clifford: *Conocimiento local*; Piados, Bs.As., 1994.
- GIDDENS, Anthony: *La constitución de la sociedad*, Amorrortu, Bs.As., 1995.
- GIDDENS, Anthony: *Modernidad e identidad del yo*; Península, España; 1995.
- INGENIEROS, José: *Criminología*; Bs.As., 1916.
- LANDI, Oscar: *Reconstrucciones. Las nuevas formas de la cultura política*; Puntosur; 1988.
- LINK, Daniel: *El juego de los cautos. La literatura policial: de Poe al caso Giubileo*; La Marca; Bs.As., 1992.
- MELOSSI, Darío: "La gaceta de la moralidad: el castigo, la economía y los procesos hegemónicos de control social", En: *Revista Delito y Sociedad*; Año I, N°1, Bs.As., 1992.
- O'DONNELL, Guillermo: "Democracia en Argentina: Micro y Macro"; En: Oszlak, O.: *"Proceso", crisis y transición democrática*/1; CEAL, 1987.
- O'DONNELL, Guillermo: "Y a mí que mierda me importa" En: *Contrapuntos. Ensayos escogidos sobre autoritarismo y democratización*; Piados, 1997.
- PALMIERI, G.: "Derechos humanos y detenciones arbitrarias y discrecionales. El Sistema contravencional, los Edictos policiales y la detención por averiguación de identidad". En: *Informe sobre la situación de los derechos humanos en la Argentina*; CELS, 1996.
- PETRONIO, G., RIVERA, J y VOLTA, L.: *Los héroes difíciles. Literatura policial en la Argentina y en Italia*; Corregidor; Bs.As., 1991.
- SALESSI, Jorge: *Médicos, maleantes y maricas*; B.Viterbo Editora; Rosario, 1995.
- TISCORNIA, Sofía: "Peligrosidad política o peligrosidad social? Procesos de construcción de hegemonía en torno al (des)orden ciudadano".
- Arslanian, I. 1999. *Foro Para la Seguridad Pública*, Ministerio de Justicia y Seguridad, Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad, Año 2 N° 3. 1999

Auyero, J. 1993. *Otra vez en la vía. notas e interrogantes sobre la juventud de sectores populares*. Buenos Aires. Espacio editorial.

CEPAL.1998. *Panorama Social de América Latina*. Santiago de Chile. Naciones Unidas—CEPAL.

Guerrero, Rodrigo. 1998. “Prevención de la Violencia a través del control de sus factores de riesgo” en *La Ciudad en el Siglo XXI: experiencias exitosas en gestión del desarrollo urbano*, Editores: E. Rojas y R. Daughtrs, Marzo.

Kaztman, R. 1999. *Activos y estructura de oportunidades. Estudios sobre las raíces de la vulnerabilidad social en Uruguay*. Montevideo. PNUD—CEPAL.

Kessler, G. y Minujin, A. 1995. *La nueva pobreza en la argentina*. Buenos Aires. Temas de Hoy.

Kusznir, J. C. 1997. “En busca de la seguridad pérdida”. *Novedades Económicas*. Abril. Pp. 38–52.

Lahosa I Canellas, J. 1997. “Comunidad Y Seguridad : el modelo de Seguridad en Barcelona

1984–1994”, en *Elias Carranza, coord. Delito y seguridad de los habitantes*, Naciones Unidas y Siglo XXI Editores, México.

Marcus, M. 1997. “El delito y los modos de regulación de los conflictos urbanos”, en Elias Carranza, coord. *Delito y seguridad de los habitantes*, Naciones Unidas y Siglo XXI Editores, México.